

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS

E. A. P. DE LINGÜÍSTICA

**Análisis lingüístico de la argumentación en el discurso
jurídico peruano**

TESIS

para optar el título profesional de Licenciada en Lingüística

AUTORA

Lourdes Natividad Cuentas Lagos

Lima-Perú

2009

DEDICATORIA

Dedico la presente tesis a mis queridos padres Rosa y Nemesio por su apoyo e infinito amor.

ÍNDICE

DEDICATORIA.....	2
ÍNDICE	3
INTRODUCCIÓN.....	5
CAPÍTULO I	
ASPECTOS BÁSICOS	
1.1 El problema de la investigación.....	6
1.2 Objetivos.....	7
1.3 Hipótesis.....	7
1.4 Justificación e importancia de la investigación.....	8
1.5 Aspectos metodológicos de la investigación.....	9
1.6 La cuestión del método.....	11
1.7 Antecedentes de la investigación.....	13
CAPÍTULO II	
ASPECTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN	
2.1 Bases lingüísticas.....	14
2.1.1 Teoría de la argumentación.....	14
2.1.1.1 Las ideas de J.C. Anscombe.....	15
2.1.1.2 La explicación de Jean Claude Anscombe y Ducrot.....	15
2.1.1.3 Los planteamientos de Perelman y Tyteca.....	18
2.1.1.4 Las teorías de Frans van Eemeren	18
2.1.1.5 Las explicaciones de Marta Tordesillas.....	19
2.1.2 Los Marcadores del discurso.....	21
2.1.2.1 Definición del marcador del discurso.....	21
2.1.2.2 Tipos de marcadores textual.....	22
2.1.2.3 Desde el punto de vista gramatical.....	25
2.1.2.4 En relación a la teoría de la argumentación.....	28
2.1.2.5 Su estudio en relación a la teoría de la relevancia	29
2.1.3 La coherencia y la cohesión	31
2.1.3.1 Condiciones de coherencia.....	32
2.1.3.2 Procedimientos básicos de cohesión.....	33
2.2 Bases jurídicas.....	34
2.2.1 Los principios y las reglas en el razonamiento jurídico.....	34
2.2.2 Las dimensiones de la argumentación jurídica.....	34
2.2.3 La coherencia argumentativa	36
2.3 Valoración.....	38
2.3.1 De las bases lingüísticas.....	38
2.3.2 De las bases jurídicas.....	39

CAPÍTULO III

ANÁLISIS TEXTUAL DE LAS SENTENCIAS

3.1 Descripción y análisis jurídico de las sentencias	40
3.2 Análisis lingüístico-discursivo de las sentencias.....	54
3.2.1 Uso de los marcadores textuales.....	108
3.2.2 Uso de las categorías discursivas: tópico, foco, tema y rema.....	130

CAPÍTULO IV

GENERALIZACIÓN DE LA ARGUMENTACIÓN EN LOS TEXTOS JURÍDICOS

4.1 Generalización lingüística.....	137
4.1.1 Ambigüedad.....	137
4.1.2 Vaguedad.....	140
4.1.3 Conectores argumentativos.....	142
4.1.4 Estructura argumentativa.....	153
4.2 Generalización jurídica	161
4.2. 1 Ambigüedad.....	163
4.2.2 Vaguedad.....	163
4.2.3 Lagunas.....	163
4.2.4 Redundancias.....	163
4.3 Propuesta de investigación.....	163
Conclusiones	169
Bibliografía.....	171
Anexo.....	179

INTRODUCCIÓN

El propósito de la presente investigación es aproximar el análisis textual a la estructura argumentativa de las sentencias. La importancia de este estudio radica en las interpretaciones jurídicas de las sentencias que son abordadas desde la perspectiva de la lógica jurídica. Nos proponemos dar otra perspectiva: el enfoque de la lingüística textual.

Este trabajo es un inicio para aplicar modelos teóricos que se basan en representación textual y en las reglas de formación del texto para dar cuenta de las relaciones existentes entre sí a partir de los marcadores del discurso.

Consideramos importante el trabajo interdisciplinario porque permite aportar desde el estudio de la coherencia y cohesión textual nuevas formas para analizar y evaluar la estructura argumentativa de las sentencias.

El trabajo se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo se refiere a los aspectos básicos de la investigación. El segundo capítulo comprende los aspectos teóricos pues se tiene en cuenta las bases lingüísticas y las bases jurídicas que permiten establecer una valoración de las mismas. El tercer capítulo presenta el análisis textual de las sentencias teniendo en cuenta la interpretación jurídica. El último capítulo expone la generalización tanto jurídica como lingüística.

Esta investigación cuenta con las sugerencias y los comentarios de los siguientes profesores: Dra. Marta Tordesillas, Lic. Lilia Llanto y de mi asesor Mg. Manuel Conde Marcos.

CAPÍTULO I: ASPECTOS BÁSICOS

1.1 El problema de la investigación

Ante la problemática general de la redacción de las sentencias y de otros escritos como la demanda y los alegatos, así como ante la interpretación y aplicación de dichos documentos, es necesario llevar a cabo un análisis lingüístico que permita observar el esquema argumentativo en los textos jurídicos.

Desde la Antigüedad y a lo largo de la historia del pensamiento en Ciencias del Lenguaje, numerosos pensadores han dedicado gran parte de su actividad al estudio del discurso jurídico como fuente de conocimiento, de poder y de ejercicio de la justicia; sin embargo, los principios científicos aplicados se situaban en el marco de la retórica y, por ello, tenían un carácter extralingüístico. Las investigaciones más recientes y contemporáneas en lingüística general muestran que el componente semántico es intrínseco a la lengua y su configuración, tanto implícita, como explícita, sitúa la cuestión en el tejido argumentativo, y también enunciativo, de la lengua. Resulta entonces esencial considerar las dinámicas argumentativas del discurso, sus topoi o lugares comunes, sus garantes, los argumentos y conclusiones, los tipos de argumentos, los grados, la tensión que presentan, la gestión, así como las figuras discursivas de tipo enunciativo, ya sea puntos de vista, enunciadores o locutores, que se convocan en el seno del discurso.

Desde la teoría del discurso, esencialmente argumentativa, se enfocará entonces el texto teniendo en cuenta su impacto directo en la construcción de sentencias.

Se evidencia en los fallos problemas sistemáticos (lagunas normativas, inconsistencias argumentales, heterogeneidad en la aplicación de las leyes, uso de argumentos en aras de intereses retóricos, desatención lingüística, ejercicio del poder, etc.) o indeterminaciones lingüísticas.

Es en este ámbito donde surgen la ambigüedad y la vaguedad como problemas de interpretación que se identifican en los discursos jurídicos. El planteamiento del problema lleva a formular las siguientes interrogantes:

1.- ¿Qué fenómenos semánticos y sintácticos se dan con mayor frecuencia en la construcción de la argumentación jurídica?

2.- ¿Qué aspectos son condicionantes para la falta o insuficiencia en la determinación del significado en los textos judiciales?

3.- ¿Qué tipo de funciones argumentativas en el discurso jurídico producen las ambigüedades y vaguedades argumentativas?

1.2 Objetivos

Objetivo general:

Determinar, analizar e interpretar los tipos de argumentos utilizados para exponer, desarrollar, aplicar y justificar las elecciones valorativas desde el análisis lingüístico en la construcción del discurso jurídico.

Objetivos específicos:

- a. Establecer las estrategias argumentativas para la construcción del discurso jurídico.
- b. Identificar las tipologías argumentativas frecuentes en la construcción de las sentencias.
- c. Proponer principios argumentativos que regulan la coherencia y la cohesión textual.
- d. Analizar los diferentes tipos de marcadores textuales que permiten generar las construcciones argumentativas.

1.3 Hipótesis

Esta tesis ha considerado las siguientes hipótesis:

General

El análisis semántico argumentativo y enunciativo permite determinar de manera precisa la estructura discursiva de las sentencias judiciales, resolviendo los problemas de ambigüedad, falta de cohesión y coherencia que se presentan en ella.

Específicas

- La utilización de los marcadores del discurso (elementos conjuntivos) identifica la estructura argumentativa de las sentencias.
- El empleo de las categorías discursivas de tópico, foco, tema y rema determina una interpretación adecuada de los enunciados que conforman las sentencias.

1.4 Justificación e importancia de la investigación

El presente estudio es importante por las siguientes razones:

- Busca un estudio sistemático del fenómeno para mejorar la calidad de los argumentos jurídicos.
- Incrementa los estudios sobre la gramática argumentativa.
- Logra mayor conocimiento de la configuración semántica de la lengua en las sentencias.

La investigación del tema Análisis lingüístico de la argumentación en el discurso jurídico peruano ha sido realizado considerando los siguientes aspectos:

a) Importancia

El asunto que se ha seleccionado como tema de investigación es importante porque da lugar a un estudio lingüístico en los niveles sintáctico y semántico. Además es interesante porque su abordaje produce un impacto en el análisis del discurso y supone un progreso científico en el conocimiento de la lengua y ejercicio discursivo. Conduce a determinar la influencia de las ambigüedades lingüísticas y pragmáticas en la construcción de la argumentación de la sentencia jurídica peruana.

b) Relevancia social

La presente investigación tiene una trascendencia social de suma importancia, porque tiene relación directa con la decisión judicial.

c) Valor teórico

Esta investigación tiene un valor teórico muy importante por cuanto busca esclarecer los problemas que surgen en la interpretación de los textos jurídicos y además va a contribuir en el desarrollo de la lingüística textual (semántica argumentativa) en nuestro país.

d) Viabilidad de la investigación

La presente investigación ha sido viable debido a que se ha contado con los siguientes recursos:

1.- Humanos

El investigador ha llevado personalmente la presente investigación. Por otro lado, se mantiene en contacto con investigadores reconocidos internacionalmente como Marta Tordesillas, quien es especialista en la materia y nos ha apoyado en la realización de la presente investigación.

2.- Financieros

El investigador ha contado con capacidad económica suficiente para cubrir los gastos que ha demandado el estudio del tema.

3.- Materiales

Es necesario el uso de útiles de escritorio, equipos electrónicos, como computadoras, impresora y sus accesorios, fichas, textos y revistas especializadas.

e) Consecuencias

La presente investigación tiene una repercusión favorable, novedosa y de progreso en el análisis de los textos jurídicos de nuestro país considerando propuestas de la semántica, la pragmática, la lingüística del texto, la retórica y el derecho.

1.5 Aspectos metodológicos de la investigación

La investigación es descriptiva en la primera etapa ya que analiza el corpus constituido por 10 sentencias del Tribunal Constitucional a fin de determinar los tipos de argumentos y los marcadores discursivos. En la segunda etapa se lleva a cabo la interpretación lingüístico- jurídica de las sentencias más representativas del Tribunal Constitucional. En la tercera etapa es explicativa porque pretende dar cuenta de los

principios que rigen la argumentación de los textos jurídicos y los fenómenos lingüísticos involucrados. Ésta es una investigación básica donde se busca el aumento del conocimiento existente sobre el tema, a la vez que aportar propuestas científicas novedosas.

En el análisis documental se aplicará el método textual debido a que el análisis del texto se presenta como una disciplina de útil aplicación en el proceso de definición de las estrategias de interpretación, precisamente porque estudia al texto en sí como un todo, como una unidad de lenguaje en uso, semántica y, no puramente formal, enfatizando el hecho de que un texto se realiza a través de las relaciones entre los elementos de la frase (intrafrástico) y entre frases (interfrástico).

Para el análisis, la base del texto es de naturaleza lógico-semántica, es decir, los componentes frásticos, secuenciales y textuales figuran bajo la forma de una cadena de representaciones sintácticas y semánticas estructuradas de tal forma que sus relaciones de conexión queden manifiestas a través de un análisis formal.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación será de carácter descriptiva y explicativa.

Es descriptiva porque busca describir el fenómeno en estudio.

Es explicativa busca establecer que causa produce el fenómeno lingüístico materia de estudio.

Es inductiva-deductiva, porque se propone buscar las regularidades y ofrecer un marco general de funcionamiento.

Universo

La presente investigación se ejecutará en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. La población está conformada por personas involucradas con el tema de investigación por su tarea cotidiana y por reunir características que constituyen elementos de estudio.

Muestra

La investigación de la argumentación en esta tesis ha sido realizada en 10 textos jurídicos del Tribunal Constitucional. Estos textos son analizados fundamentalmente en el plano lingüístico.

3.1 Método

El método descriptivo- explicativo.

Técnica de investigación

-Técnicas de recolección de datos.- En la presente investigación se inició con la Técnica del Registro documental. Se recopiló información de expedientes judiciales de donde se tomarán los datos necesarios para la investigación, utilizándose una hoja denominada “Hoja de Recolección de datos”, en ella se recogió los datos importantes de los expedientes judiciales relacionados con la investigación. Asimismo se utilizó la técnica del fichaje para recoger los datos para estructurar el marco teórico, en este caso de textos especializados, nacionales y extranjeros.

- *Entrevista.-* Se preparó cuidadosamente preguntas para los estudiantes de maestría en Derecho de la UNMSM , abogados y profesores universitarios de la materia de estudio.

1.6 La cuestión del método

En el presente estudio se analizó la problemática de la argumentación interpretativa desde la perspectiva lingüística. A partir de una aproximación inicial, se plantea el problema de las estrategias discursivas y los tipos de argumentos.

Los estudios lingüísticos de estos últimos años han estado orientados, sobre todo, a la argumentación, y son interesantes por los aportes que exponen en relación con el aspecto pragmático.

El estudio de Charaudeau (2000: 48) explica la problemática de base de una lingüística de discurso. Plantea que cuando los estudios se focalizan sobre la mecánica argumentativa por sí misma, buscando esquemas argumentativos prototípicos y orientaciones argumentativas de las palabras, participan de una problemática cognitiva.

Marta Tordesillas (2007:152) formula una propuesta gramatical cuya base descriptiva son parámetros de tipo semántico-argumentativo. Su propuesta tiene cuatro planos que permiten la configuración semántica de las dinámicas discursivas como el plano tópico, el plano enunciativo, el plano argumentativo y el plano locutivo.

Desde la investigación de Lo Cascio (1991:41), los textos argumentativos deben contener una tesis y al menos un dato que la justifique. Además, sostiene que un razonamiento debe contener tres elementos: un dato o argumento, una regla general, que, permita, a partir del dato o argumento proponer una tesis. Este autor plantea que existen diferentes formas lingüísticas para realizar un discurso argumentativo, por consiguiente los modelos serán diversos. Como dice Lo Cascio (1991:42): “*La elección de los modelos la determinan la oportunidad y las reglas gramaticales y textuales que cada lengua impone*”.

De Zubiría Samper (2006:106) afirma: “*Las ideas hay que argumentarlas, de lo contrario no pasarían de ser opiniones. Esta es, por tanto, la función principal de los argumentos: darle sustento a una idea principal, darle soporte*”. Este autor establece una diferencia entre la argumentación y la opinión. La primera está dirigida a brindar razones o pruebas que sustenten la idea central. Es decir, los argumentos justifican, sustentan y ratifican lo dicho; la segunda es abiertamente interesada, subjetiva, personal además, busca un interés y un beneficio a quien la formula.

Como lo expresa Lo Cascio (1991:41) se puede determinar otra forma de delimitar la opinión y la argumentación. Al respecto se puede constatar: “Una opinión que no se apoye en argumentos no es una argumentación.”.

Siguiendo de cerca el trabajo de van Dijk (1997:161), su estudio desde la perspectiva textual ubica las categorías en un esquema jerárquico dependiendo del contexto que se ajustará al diagrama arbóreo que propone el autor. Una justificación también puede seguir a una aseveración expresada anteriormente, cuando es evidente que esta aseveración es una conclusión del hablante. Cuando se argumenta indirectamente, puede ser suficiente nombrar una circunstancia dada y no la conclusión en sí: si me preguntan si podré venir esta noche, basta con que conteste: estoy enfermo.

Este autor plantea que si se desea explicar la estructura argumentativa tiene que existir una base para la relación de las conclusiones y para la relación semántica condicional entre circunstancias en las que se basa la conclusión.

Vicenzio Lo Cascio (1998: 43) señala otro tipo de estructura argumentativa que apunta a la interacción:

1. El marco, que concierne a las situaciones pragmáticas en la que se da la argumentación.
2. El núcleo fundamental, la estructura, que viene a ser la gramática interna y textual de la argumentación, su función, su relación jerárquica, los argumentos, las reglas generales, etc.

Las propuestas son diversas dependiendo de la estructura argumental de los textos. Sin embargo, los modelos de análisis lingüístico de los textos jurídicos son escasos y limitados en nuestro medio. Entre los estudios más completos, tenemos de Ducrot y Anscombre como también de Marta Tordesillas. Estos modelos serán tratados en la presente investigación.

1.7 Antecedentes de la investigación

No se cuenta con investigaciones que traten el tema de la argumentación jurídica desde el enfoque lingüístico. Uno de los trabajos interesantes en la aplicación de la teoría argumentativa en los textos periodísticos es el de Mario de la Fuente García (2006) en el estudio de La argumentación en el discurso periodístico sobre la inmigración sustentado en la Universidad de León (España) donde plantea el objetivo principal de su investigación: “Es el hacer explícitas las estructuras y estrategias argumentativas, concebidas como el resultado de la elección previa de un punto de vista, que los medios de comunicación españoles emplearon en la caracterización de los actores sociales implicados en los sucesos de “El Ejido”. Su principal interés radica en el estudio de la vertiente de los procesos sociales en los que se den relaciones desiguales de poder. Los marcadores textuales le permiten al autor observar los procesos de modificación argumentativa.

CAPÍTULO II: ASPECTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 BASES LINGÜÍSTICAS

En este capítulo, haremos una exposición teórica de la argumentación desde el punto de vista lingüístico. Las investigaciones teóricas serán de utilidad y de interés para el ámbito jurídico.

2.1.1 La teoría de la argumentación de la lengua

La teoría de la argumentación cuenta con las propuestas de Ducrot y Anscombe (1994), Ducrot (1998), Anscombe (1998), Perelman y Tyteca (1989), Frans van Eemeren (2006) y Marta Tordesillas (2007) entre otros investigadores. Con respecto a la teoría de la argumentación estudiada por De la Fuente García (2006) en su tesis titulada *La argumentación en el discurso periodístico sobre la inmigración* se expone los principios teóricos de la argumentación y la evolución de la teoría de argumentación en la lengua. Ahora bien, acota el investigador la implicancia de una teoría no referencialista que como dice: *“Son los elementos lingüísticos y no los hechos del mundo los que determinan el progreso argumentativo de un discurso. Uno de los componentes de este enfoque es la denominada Teoría de los Modificadores Argumentativos. Esta (sub)teoría es principalmente semántica, sin embargo, es posible demostrar que la sintaxis impone igualmente restricciones a los procesos de modificación argumentativa. Por este motivo, se propone la existencia de un Componente Sintáctico en dicha (sub)teoría que es necesario tener en cuenta para comprender correctamente el alcance explicativo de la misma”*.¹

En la teoría no referencialista, la lengua y el mundo son dos entidades totalmente independientes a las que no une una relación intrínseca y necesaria. Mientras que la teoría referencialista, como señala Escandell (2004:39), enfatiza la relación entre las expresiones lingüísticas y el mundo.

¹ Mario de la Fuente García presenta en la revista Dialnet las ideas centrales de la teoría no referencialista que son tomadas de su tesis *La argumentación en el discurso periodístico sobre la inmigración*. 2006 Universidad de León (España)

2.1.1.1 Las ideas de J.C. Anscombe

Uno de los estudios acerca de la teoría de la argumentación teniendo en la teoría referencialista fue la investigación de Mario de la Fuente García (2006: 189). El autor aborda un aspecto puntual al diferenciar las teorías referencialistas fuertes y débiles. La primera posición de Anscombe y Kleiber (2001) es ubicar la función referencial como perteneciente o no del sentido. Se admite la posibilidad de que los enunciados derivados de los valores argumentativos adquieran usos informativos. De la Fuente expone dos motivos que sintetizaremos porque coincidimos con él y nos parecen interesantes. Cuando se refiere a la argumentación en la lengua que pertenece a la teoría semántica le parece incorrecto admitir que toda teoría semántica es una teoría débil de los actos de habla. Sostiene que las teorías argumentativas serán débiles debido a que la argumentatividad sería derivable de la informatividad.

Luisa Puig (1991: 31) enfoca su análisis entre la argumentatividad y la informatividad. Esto es, en la mayoría de los enunciados hay ciertos rasgos que determinan su valor pragmático independientemente de su contenido informativo. Ella considera que la significación de la frase contiene instrucciones que le permiten al alocutario reconstruir el sentido de un enunciado en función de la situación del discurso.

2.1.1.2 La explicación de Jean Claude Anscombe y Ducrot

Jean-Claude Anscombe y Oswald Ducrot proponen la idea de topoi. Tordesillas (2007:154) explica que “entendiendo por topoi un principio común, general y gradual que actúa como garante, el vínculo entre esos dos enunciados o segmentos del discurso, E1 y E2 respectivamente. Se trata de considerar las variables argumentativas que trazan el discurso y se basan en un topoi común. Asimismo, Santibáñez (2002:29) identifica la propuesta de Ducrot y Anscombe que proponen que el sentido argumentativo de los enunciados se percibe a partir de la reconstrucción semántica y a partir de la construcción de las frases. Por tanto, la significación está formada por un conjunto de instrucciones que producen sentido. El autor reconoce las dos teorías: la teoría polifónica de la enunciación y la teoría de la argumentación que se conoce también como la teoría del topoi. Esto se unifica en la teoría de la argumentación en la lengua.

Anscombe y O. Ducrot (1994) formulan que la argumentación es una dimensión que afecta a los textos, al discurso, cualquiera que sea su estatus, y que depende del material lingüístico utilizado. Para estos investigadores, unos topoi constituyen una relación discursiva entre dos proposiciones independientes. Estas pueden ser enfocadas como argumento-conclusión que da soporte al enunciado. El significado de las palabras condiciona las posibles continuaciones discursivas y las inferencias. Se presentan los conectores argumentativos, que reagrupan no solo las tradicionales conjunciones coordinadas y subordinadas, sino también las diferentes locuciones conjuntivas. Por tanto, las unidades son analizadas como signos. En resumen, el sentido de las unidades lingüísticas está constituido por ciertos discursos que le están asociados. El sentido es caracterizado en términos de argumentación, es decir, en términos de inserción de los enunciados en los encadenamientos discursivos.

La teoría de los bloques semánticos propuesto por Anscombe formula una representación de la significación en términos de estereotipos y frase estereotípica. Otra postulación interesante es de Ducrot y Carel que proponen una descripción semántica de los encadenamientos argumentativos a partir de un nuevo desarrollo, la teoría de los bloques semánticos.

La teoría se proyecta en la argumentación, el encadenamiento argumentativo y el principio argumentativo. La argumentación es entendida como la concatenación de dos segmentos de discurso que forman dos enunciados un argumento y una conclusión. Santibáñez (2002:33) resalta la importancia del encadenamiento argumentativo porque aparecen los topoi específicos que vinculan el argumento con la conclusión. Según Ducrot y Anscombe (1994:18), el garante o topoi asegura ese trayecto argumentativo. Meyer (1982: 146) precisa que los planteamientos de Ducrot y Anscombe se diferencian de la posición de Perelman, y Tyteca señala que en el primero estábamos en presencia de una conclusión como adhesión (lo implícito) a una tesis sobre la base de los valores del auditorio. En el segundo “lo explícito es lingüísticamente portador de una conclusión, sugerida por variables argumentativas inmanentes a la oración, que el auditorio consiente o no”. Si bien ese topoi representa ese saber compartido también es importante el uso de los conectores argumentativos dentro del encadenamiento argumentativo. La investigación de Santibáñez (2002:33) aduce que los conectores imprimen fuerza a la unión de enunciados en el encadenamiento.

Santibáñez (2002: 45) expone los topoi que vinculan el argumento y la conclusión en el proceso de concatenación. Su estudio será descrito con las postulaciones de García Negroni (1998: 43) que señala que los tópicos tienen tres propiedades: la universalidad, la generalidad y la gradualidad. La primera propiedad se caracteriza porque el topoi es admitido en toda la comunidad lingüística y en una disputa argumental, “Es presentado como válido no solo en la situación a la que se le aplica, sino en una infinidad de situaciones análogas (similar a la noción de ejemplo en la tópica jurídica)”. La última propiedad se caracteriza porque relacionan dos predicados a través de conectores donde prevalece una fuerza argumentativa de uno de los predicados dando lugar a toda la argumentación potencialmente gradual. El ejemplo que formula Santibáñez es de García Negroni (1998) con los conectores.

“Es un tipo trabajador, muy trabajador incluso. Yo que vos lo contrataría. ...en que los dos argumentos. Es un tipo trabajador y es muy trabajador, no solo están orientados hacia el mismo tipo de conclusión sino que el segundo es más fuerte que el primero a favor de ella – la conclusión-. Así, y puesto que toda argumentación es potencialmente gradual, los topoi también han de serlo ya que son ellos los que garantizan el pasaje del (de los) argumento(s) A a la conclusión C”. (García Negroni, 1998:33).

Según Santibáñez (2002:45) la estructura argumental parte de los tópicos entendidos de acuerdo a la propuesta de Rivano, E. (1999: 45) “Los tópicos son normas sociales que vinculan un par de entidades, vinculación que permite establecer o inferir una de ellas la otra y manipular el vínculo en la comunidad persuasiva”.

Movimiento principal		
Tópicos		Metas
(antecedente)	(consecuente)	(logro audiencia)
Miseria	simpatía	obtener simpatía
injusticia	justicia	exigir justicia

(Rivano, E. 1999:45)

Finalmente, los tópicos tienen diversas perspectivas para ser definidas, pero coincidimos con Santibáñez cuando llama a los topoi *cristalizadores* de conocimientos, de experiencias, etc.

2.1.1.3 Los planteamientos de Perelman y Tyteca

La argumentación, como el arte de persuadir, se ubicaba en este estudio clásico dentro de la noción de demostración a través de dos premisas y una conclusión. Además, se resaltaba el papel esencial del nexo causal que partía de un principio: todo acontecimiento tiene una causa.

La importancia del efecto retórico en el auditorio es identificado por Meyer (1982:143) quien señala que para Perelman *“no hay que otorgar ningún privilegio a la lógica- matemática porque no hay discurso sin auditorio: por tanto no hay argumentación que no tenga efecto retórico”*. Todo ello va relacionado con las técnicas que conducen al asentimiento.

Alexy (2007:240) habla de la distinción fundamental de Perelman cuando examina las premisas y las diferentes técnicas de argumentación. Esta última trata de las diferentes formas de argumento y la interacción hacia el desarrollo de la estructura de los argumentos.

2.1.1.4 Las teorías de Frans van Eemeren

La definición de van Eemeren (2006:17) sobre la argumentación es la siguiente: “La argumentación es una actividad verbal, social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar este punto de vista”. Desde esta perspectiva, apunta este autor a describir una argumentación razonable. Ahora bien, identifica tanto la justificación como la refutación. Este plano explica los diferentes indicadores de la argumentación que surgen en el proceso. Van Eemeren (2006:46) señala que no siempre podemos reunir enunciados explícitos sino podemos emplear indicadores de argumentación que pueden anotarse como indicadores de punto de vista (por lo tanto, así, consecuentemente, porque, por lo tanto, etc.) a fin de señalar si se trata de un argumento múltiple, coordinado o subordinado. Por consiguiente, prefiere hablar de la pragma-dialéctica considerado como un acto de habla discursivo.

Para entender esta propuesta, De la Fuente (2006:204) detalla algunas características que sintetizaremos a continuación:

- La argumentación se da en aquellos discursos en los que se evidencia una diferencia de opiniones relevantes.
- La argumentación se concibe como un macroacto discursivo complejo.
- Toda argumentación posee reglas para su estructuración.

2.1.1.5 Las explicaciones de Marta Tordesillas

El trabajo de Marta Tordesillas ²(en prensa, 2007) acerca de la argumentación en la lengua tiene el propósito de presentar el marco lingüístico en el que se ubica la teoría de Jean- Claude Anscombe y Oswald Ducrot. Además, busca explicar la evolución de esta teoría. La autora asevera que hay tres disciplinas que se ocupan de la verdadera función de la argumentación:

- La filosofía con Ch. Perelman y L. Olbrechts-Tyca
- La lógica con Grize y Mieville
- La lingüística con Ducrot y Anscombe y otros

Según la autora esta última visión lingüística permite revisar los problemas argumentativos de naturaleza lingüística. Su análisis se centra en los fundamentos argumentativos que permiten la actividad argumentativa a través de los topoi; y además, resalta las marcas argumentativas que denomina conectores. La autora explica que significar para un enunciado es argumentar. Reafirma que argumentar es actuar en el enunciado con el fin de permitir y desencadenar tal o cual conclusión. Asimismo, expresa que los argumentos son parte integrante en todo enunciado y configuran el sentido del mismo.

Todo enunciado tiene diferentes intenciones argumentativas que se registrarán por una escala argumentativa. Asimismo, el valor argumentativo de un enunciado está regido por su orientación argumentativa que puede estar coorientado o antiorientado. En términos de Tordesillas (2007: 82), la evaluación de las intenciones comunicativas

² Notas personales de la investigación de Marta Tordesillas, proporcionadas por la autora quien las preparó con motivo del Congreso de Lingüística auspiciado por la Universidad Ricardo Palma (2007) celebrado en Lima, Perú, bajo el título de Lingüística General: semántica argumentativa y enunciativa, pág. 81

será a través de los topoi. La autora lo explica de la siguiente manera: “La teoría de la argumentación hace que intervenga la noción de topoi; es decir, un principio argumentativo que permita establecer una relación entre los elementos que componen el enunciado y las conclusiones previstas”. La importancia del topoi radica según la autora en el vínculo que se establece en la construcción de encadenamientos para fortalecer la idea central.

“Podemos decir que la estructura misma de la frase impone ciertas condiciones en lo que respecta a los topoi (plural de topoi). Son utilizados cuando estas tres frases son realizadas en el discurso y sirven para producir encadenamientos argumentativos, lo que permite dar una forma más precisa a la idea central que sustenta y dirige toda la teoría de la argumentación en la lengua (...)”.

(Tordesillas, 2007: 83)

El carácter general y gradual de los topoi es ejemplificado por Tordesillas (1998:353) en el ejemplo: “Es un día soleado, vamos a la playa” se identifica el argumento: (es un día soleado), la conclusión (vamos a la playa). El topos garante (el día soleado es un elemento favorable para ir a la playa). El topos está constituido por metapredicados o predicados que denomina Tordesillas a P (la temperatura) y Q (el agrado). Resulta interesante la identificación que realiza la lingüista de los tipos de topoi tanto directo como converso. El primero (concordante) cuando sigue el mismo sentido adquiriendo el mismo rasgo (creciente y decreciente) $\langle +P, +Q \rangle$, $\langle -P, -Q \rangle$. El segundo (discrepante) se caracteriza cuando tiene un sentido inverso. $\langle +P, -Q \rangle$, $\langle -P, +Q \rangle$.

La autora destaca no dejar de lado la función principal de la lengua que consiste en argumentar lo que permite por ende la dinamicidad y gradualidad que se genera a partir de la actividad lingüística. En este sentido, la semántica argumentativa de Anscombe y Ducrot permite dar una explicación de los diferentes planos del discurso donde el sentido del enunciado será el punto clave para dilucidar los diferentes fenómenos semánticos y pragmáticos.

Especialmente pertinente para nuestra investigación es el artículo de Tordesillas (2001: 25) en el cual se afirma: “La fuerza ilocucionaria vinculada con una oración caracteriza la enunciación de esta oración”. Esto conlleva a la explicación de Ducrot sobre el carácter polifónico de la lengua donde el sentido de un enunciado es abordado por diversos puntos de vista. En palabras de Ducrot, que precisa la autora “consiste en una descripción de la enunciación en sí misma”. Finalmente, Tordesillas³ (2005: 321) reitera que “la lengua es polifónica, detrás de la lengua hay discursos; el sentido del enunciado es una cristalización de puntos de vista, el discurso convoca topoi”. Ahora bien, se entiende desde el punto de vista lingüístico que el topoi será ese nexo o relación que se logra a partir de la construcción de enunciados.

2.1.2 Los marcadores del discurso

2.1.2.1 Definición del marcador del discurso

De la Fuente García (2006:432) explica que los marcadores discursivos son los responsables de explicitar los valores concretos que el hablante asigna a los enunciados. Es decir, los encadenamientos de las distintas unidades se logran a través de una progresión temática y para ello requieren de ciertos marcadores para evidenciar los diferentes tipos de relaciones. Como dice Herrero (2006:88): “Esos marcadores señalan también las operaciones de carácter discursivo a través de las cuales el sujeto productor del enunciado va manifestando su intencionalidad comunicativa y su actitud ante el tema tratado y ante el destinatario del mensaje”.

Cortés y Camacho (2005:185) hablan de la perspectiva textual y ubican en el análisis textual al marcador como sinónimo de estructuración de la realidad del lenguaje que tiene que ver con la organización del discurso y la articulación de sus unidades. Marchante (2004:3) refuerza la idea al considerar a los marcadores unidades léxicas que poseen la función fundamental de vincular semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro anterior proporcionando instrucciones que guían las inferencias.

³ Marta Tordesillas en IX Simposio Internacional de Comunicación Social. Santiago de Cuba. 24-28 de enero 2005.

2.1.2.2 Tipos de marcadores textuales

La clasificación de los tipos de marcadores textuales surge a partir de la orientación argumentativa. Herrero (2006:89) establece dos grupos teniendo en cuenta el propósito y la finalidad comunicativa. El primer grupo está caracterizado por la conducción del sujeto enunciador de una organización metatextual seguidamente propone el autor los organizadores textuales introductores de operaciones enunciativas (marcadores) y el segundo grupo está conformado por los conectores intratextuales. Estos últimos sirven para encadenar las relaciones lógicas, argumentativas, temporales y espaciales.

Cortés y Camacho (2005:144) postulan que los marcadores se dividen en dos grupos a partir de las instrucciones que emiten al oyente. El primero es denominado marcador textual y es definido de la siguiente manera: “El marcador textual relaciona bloques de palabras-unidades- de manera directa, pero, indirectamente, se convierte en vínculo del modo como el hablante formaliza con palabras esa serie de operaciones lógico-lingüísticas respecto al referente”. Se caracteriza por articular las unidades discursivas. El segundo grupo es el marcador interactivo, figura importante en las constricciones culturales y en las normas de cortesía.

La orientación del trabajo es explicar el tipo de relación y su ubicación textual de los marcadores a fin de dar cuenta del uso que conlleva o desencadena en la configuración del sentido del discurso. El modelo teórico que aplicaremos como fase inicial es el formulado por Luís Cortés y María Matilde Camacho (2005) en una primera etapa a fin de dar cuenta de las reglas de formación y tipos de progresión textual en el esquema propuesto por Santibáñez.

En una segunda etapa es pertinente complementar los estudios teóricos de acuerdo a la naturaleza de la investigación con los planteamientos de Zorraquino y Portolés (1999) acerca de los marcadores del discurso y sus subclasificaciones.

Cortés y Camacho (2005) dan importancia a los marcadores textuales porque les permiten orientar la interpretación del discurso. En este sentido, desde un

razonamiento inductivo de lo particular a lo general nos proponemos describir los marcadores textuales para dar cuenta de las dos propiedades constitutivas del texto la coherencia y la cohesión textual.

Estos autores (2005:185) definen al marcador como “sinónimo de estructuración de la realidad del lenguaje”. La clasificación que proponen se proyecta en la apertura, desarrollo y cierre del discurso. Cortés y Camacho (2005:188) señalan que “ la mayoría de ellos va estar integrada por una fase intermedia (un texto o fragmento discursivo es un desarrollo), donde habrá que constituir, en principio, dos grandes grupos, según que dichos marcadores relacionan unidades con fuertes relaciones de dependencia lógico-lingüística – marcadores jerárquicos- o yuxtapongan tales unidades conformando también la urdiembre textual – marcadores lineales-“.

La clasificación está integrada por marcadores desde una perspectiva textual temática distribuida en los siguientes grupos:

- a. de apertura: reactiva, no obligatoriamente reactiva
- b. de desarrollo: lineales (articuladores, desarticuladotes, rearticuladores), jerárquico (unidireccionales y bidireccionales) y
- c. de cierre: de cierre de inicio, no obligatoriamente de inicio

El párrafo anterior permite destacar la clasificación de los marcadores de acuerdo a sus características básicas. En primer lugar, el marcador de apertura o cierre puede enmarcar el contenido macroproposicional, al mismo tiempo que tiene la característica de ser reactivo. Debemos tener en cuenta que dependerá de la función que cumplen estos conectores en el contexto discursivo.

Cortés y Camacho (2005) indican que hay marcadores de relleno que tienen una función textual primaria. En segundo lugar, el marcador de desarrollo o progresión temática tienen la función de encadenar las distintas unidades que constituyen un texto. Los autores (2005: 192) precisan que funcionan como mecanismos de cohesión textual de manera que “propician una articulación entre las partes afectadas con matices mucho más variados que los otros mecanismos de cohesión”.

De esta manera se plantea que los marcadores conectivos cumplen una función de acuerdo a la relación que se establecen en la unidad discursiva.

MARCADORES TEXTUALES DE PROGRESIÓN TEMÁTICA Y RELACIÓN JERÁRQUICA BIDIRECCIONAL					
JUSTIFICA CIÓN	CONSECUENCIA		HIPÓTESIS	CONTRAARGU- MENTACIÓN	OPOSICIÓN CONCESIVA
	PROPIA	CONCLUSIÓN ARGUMENTATIVA			
Porque	así	en conclusión	si	pero	aunque
	de ahí que...	en resumen	suponiendo que	aunque	
a causa de	en consecuencia			antes bien	aun
				es que (abriendo intervenciones reactivas)	
				de modo que	en definitiva
ya que	Luego	por el contrario			
por mor	por consiguiente		pongamos que	Con todo	aun incluso
	por tanto			a pesar de que	
Pues	como consecuencia		en el supuesto de que	no obstante	incluso
	entonces			ahora bien	

Cortés y Camacho (2005:197)

La clasificación está elaborada teniendo en cuenta el tipo de relación jerárquica y lineal. Los dos grandes grupos son los siguientes:

1. Relación jerárquica : bidireccional y la unidireccional
2. Relación lineal: articulatoria, desarticulatoria y rearticulatoria

Zorraquino y Portolés (1999:4081) señalan: “Los conectores son marcadores discursivos que vinculan semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro miembro anterior o con una suposición contextual fácilmente accesible”. Estos autores clasifican a los marcadores textuales en cinco grupos:

- a. Estructuradores de la información: comentadores, ordenadores y digresores.
- b. Conectores: aditivos, consecutivos, contraargumentativo.
- c. Reformuladores: explicativo, de rectificación, de distanciamiento, recapitulativos.
- d. Operadores argumentativos: de refuerzo argumentativo, de concreción.
- e. Marcadores conversacionales: de modalidad epistémico, de modalidad deóntica, enfocadores de alteridad metadiscursivos conversacionales.

2.1.2.3 Desde el punto de vista gramatical

Con relación a estos elementos, es importante considerar dos aspectos analizados por Martín Zorraquino, María Antonia⁴. El primero es la integración de los marcadores del discurso en relación con la estructura oracional. La importancia que da la autora al nivel informativo que se identifica en el texto a partir del tópico y del foco. El segundo está referido a las propiedades gramaticales de los marcadores del discurso en español, destaca un conjunto de características sintácticas de los marcadores, entre las que se mencionan las siguientes:

a. Comportamiento del adverbio

Los autores (1998: 36) señalan “la situación “externa” a la oración, los marcadores no representan entidades adyacentes al núcleo predicativo, por lo que no pueden ser sustituidas por los elementos pronominales o deícticos que marcan habitualmente las funciones complementarias”. Esta condición permite distinguir a los adverbios que inciden en el verbo, desempeñando la función de “complemento circunstancial” de los adverbios y locuciones adverbiales que son marcadores del discurso. El propósito del autor al utilizar el signo de puntuación de la coma (,) es el de enfatizar el elemento adverbial como integrante de un enunciado distinto a la oración que le precede. En el siguiente ejemplo propuesto por el autor (1998: 36) observemos el comportamiento del adverbio.

- Le hablé francamente.
- Le hablé así.
- Le hablé, *francamente*.
- Le hablé, así (así no es sustituto de *francamente*).

En el primer caso, el adverbio “francamente” modifica directamente el significado del verbo “hablé” es decir, que dicho adverbio equivale a la expresión “de manera franca o sincera”. En cambio, en el segundo caso, el adverbio “francamente” no se encuentra ligado al verbo “actúa”, sino que constituye un enunciado independiente

⁴ Martín Zorraquino, María Antonia (Universidad de Zaragoza) desarrolla el tema Los marcadores del discurso desde el punto de vista gramatical, el cual aparece en el texto Los marcadores del discurso teoría y análisis (1998).

con valor oracional; es decir, que dicho adverbio equivale a la expresión "realmente, lógicamente, efectivamente".

Los adverbios de incidencia verbal pueden ser sometidos a la interrogación parcial, mientras que los marcadores, no. Revisemos el primer ejemplo propuesto por el Zorraquino (1998:36). Este autor ubica al adverbio como modificador del verbo de manera directa y su respuesta es inmediata. En el segundo ejemplo se interpreta que la respuesta está segmentada en dos enunciados y que es irrelevante preguntar porque la respuesta está antes de la pregunta.

- Actúa *naturalmente*
- -¿Cómo actúa?
-*Naturalmente*.
Actúa, naturalmente.
*¿Cómo actúa?

Los adverbios no marcadores admiten la coordinación con elementos equifuncionales, mientras que los marcadores no. Zorraquino (1998:36) propone estos ejemplos para evidenciar la importancia de la ubicación de los adverbios como modificadores del verbo y las relaciones que establecen con los demás elementos de una manera directa y más cercana. Ahora bien, cuando son marcadores se interpretan como entidades independientes que están unidas por un tipo de relación.

- Razona *lógicamente* en toda su argumentación.
- Razona *lógicamente* y *con agudeza* en toda su argumentación.
- Razona, *lógicamente*, en toda su argumentación.
- *Razona, *lógicamente* y *con agudeza*, en toda su argumentación.

Los autores (1998:37) indican "Los adverbios que inciden en el verbo son focalizables o enfatizables por medio de una "perífrasis de relativo", mientras que los marcadores, no". Zorraquino (1998:37) analiza en los siguientes ejemplos el sentido que tiene el enunciado a partir de la función que cumple el adverbio.

- Me habló *sinceramente*.
- Fue *sinceramente* como me habló.

- Tu hijo es un caradura, sinceramente.
- *Es sinceramente como tu hijo es un caradura.

b. Condición “extraproposicional”

Zorraquino (1998:36) indica que “ los marcadores del discurso no pueden ser reemplazados o sustituidos por elementos pronominales que reproducen total o parcialmente la oración en la que comparecen”. Así tenemos las siguientes oraciones:

- *Mi enamorado, claro, está fascinado con su auto.*
- *Mi primo, lo mismo, con su moto.*

En el segundo ejemplo, *lo mismo* sustituye a algunos de los constituyentes del predicado del primer ejemplo, pero no al marcador del discurso *claro*.

Para incluir a *claro* en el segundo enunciado, habría que repetir el marcador:

- *Mi primo, claro, lo mismo, con su moto.*

c. Restricciones entre los marcadores

Zorraquino (1998: 38) señala que “los marcadores del discurso no admiten, normalmente, la gradación ni cualquiera de otro tipo de cuantificación, ni pueden ser sometidos a la negación”. El autor (1998:38) expone en el ejemplo los valores pragmáticos que asume el hablante desde diferentes perspectivas tanto cualitativa como cuantitativa. Cuando un adverbio no incide directamente en el núcleo predicativo, un adverbio no puede ser graduado cualitativamente.

- Demostró la tesis *evidentemente*.
- Demostró la tesis *muy evidentemente*.
- Demostró la tesis *evidentemente del todo*.
- Demostró la tesis *no evidentemente*.
- Ha ganado, *desde luego*.
- *Ha ganado, *muy desde luego*.
- *Ha ganado, *desde luego del todo*.
- *Ha ganado, *no desde luego*.

d. Incompatibilidad con la coordinación

Zorraquino (1998: 38) indica que hay “otro aspecto sistemático en el comportamiento de los marcadores del discurso es la incompatibilidad que manifiestan con la coordinación. Los marcadores no expresan “estados de cosas” sino que representan puntos de vista del hablante o relaciones entre éste y el oyente, etc. respecto de la información que se procesa en la comunicación”. Los dos primeros ejemplos propuestos por el autor indican que los adverbios de incidencia verbal pueden coordinarse; los adverbios “oracionales”, marcadores del discurso no pueden coordinarse, pero sí yuxtaponerse.

- Se afeitó la barba *lentamente*.
- Se afeitó la barba *lenta y cuidadosamente*.
- Claro, ha hecho las paces con su novia.
- **Claro y afortunadamente*, ha hecho las paces con su novia.
- *Claro, afortunadamente*, ha hecho las paces con su novia.

2.1.2.4 En relación a la teoría de la argumentación

Portolés, José (Universidad Autónoma de Madrid) aborda los marcadores del discurso de acuerdo a la teoría de la argumentación en la lengua.⁵ Este autor cita a Jean –Claude Anscombe y Ducrot, autores del libro *La argumentación en la lengua* (1983), quienes mantienen que no se argumenta “con” la lengua, sino “en” la lengua. Son los propios elementos lingüísticos y, no los hechos que pudieran representar los que condicionan por su significación la dinámica discursiva.

También Portolés se refiere a la orientación argumentativa. El autor (1998:81) precisa que “ el mantenimiento o la ruptura de la orientación argumentativa, se puede diferenciar entre conectores que antiorientan enunciados y conectores que mantienen la orientación. Así, *sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien*, etc., presentan el segmento del discurso como contrario a la orientación de un miembro

⁵ Portolés, José incluye el artículo *La teoría de la argumentación en la lengua y los marcadores del discurso* en el texto *Los marcadores del discurso. Teoría y análisis*. (1998)

anterior del discurso: *mientras que, además, así pues, por tanto, entonces*, etc., conservan la orientación. Además, el autor alude a la enunciación como acto de emplear un enunciado en un lugar y un momento determinado. Según Ducrot, el enunciado comenta el acto de enunciación”. Ducrot estudia cada componente lingüístico con el fin de organizar la teoría argumentativa partiendo del micronivel. Lo interesante que hace ver Portolés es la incorporación de la pragmática integrada que generan indicadores pragmáticos que los denominan los *topoi*. Su relación es cercana con la denominación de garante o reglas de justicia que se basan en una constructo de reglas de racionalización y que permiten dar sentido a las palabras y orientar la secuencia lógica de las ideas. Los enunciados concatenados provocan una acción determinada dentro del discurso. De esta manera se plantea la importancia del sujeto empírico, el locutor y el enunciadador en el discurso.

Otros aspectos considerados por Portolés son la fuerza argumentativa, los modificadores realizantes y desrealizantes, las escalas argumentativas y los *topos*.

2.1.2.5 Su estudio en relación a la teoría de la relevancia

Montolío Durán, Estrella (Universitat de Barcelona) desarrolla el tema de la teoría de la relevancia y el estudio de los marcadores discursivos⁶.

La autora (1998:94) menciona que la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson “es un modelo pragmático que se propone explicar cómo interpretamos los hablantes los enunciados, apoyándose en una hipótesis de carácter cognitivo acerca de cómo los seres humanos procesamos la información lingüística”.

Dicha teoría persigue la simplicidad al reducir el aparato explicativo de una teoría pragmática a un único criterio singular: el principio de relevancia.

Se establece tres de los rasgos caracterizadores de la Teoría de la Relevancia:

⁶ Montolio Durán, Estrella presenta el artículo La teoría de la relevancia y el estudio de los marcadores discursivos en el texto Los marcadores del discurso. teoría y análisis (1998)

- (ii) El principio de Cooperación de Grice (calidad, cantidad, relación y manera) : ser relevante

En la perspectiva de Sperber y Wilson, sin embargo, la relevancia se entiende de un modo mucho más amplio, en términos no solo de adecuación al tema sino también de *relieve* (*ostensión*, término técnico en esta teoría), es decir, de importancia informativa.

- (iii) Se trata de una teoría inferencial donde se realiza un proceso complejo donde se integran los contenidos de diversas representaciones internas.

- (iv) La Teoría de la Relevancia se presenta como teoría sobre el funcionamiento de la comunicación humana.

Es conveniente considerar el principio de relevancia, principio central que se basa en una característica básica de la cognición humana: un individuo y en interacción con el medio, presta más atención a unos fenómenos que a otros. Desde el punto de vista biológico, psicológico y cultural, la atención humana es característicamente selectiva. La Teoría de la Relevancia postula una concepción cognitiva del contexto, caracterizada por dos supuestos: (i) el contexto desempeña un papel decisivo en la interpretación pragmática de todos los enunciados; y (ii) el contexto no está predeterminado o dado de antemano en la mente del destinatario que ha de procesar un enunciado, sino que *se construye al mismo tiempo que se interpreta*.

También cabe mencionar la concepción relevantista de los marcadores discursivos, según la cual la utilización de un conector solo es pragmáticamente adecuada si el hablante puede encontrar, sea en el contexto físico, sea en el lingüístico, sea en la memoria, alguna premisa que explique el porqué de la relación entre las proposiciones relacionadas.

La teoría de la argumentación es una teoría semántica pues se preocupa de cómo se construyen los significados en una lengua. Se desliga de la

realidad como sostén del significado para hallarle una base exclusivamente lingüística; por ello, se puede inscribir dentro de un planteamiento estructuralista.

2.1.3 La coherencia y la cohesión

Este estudio nos orienta al análisis discursivo de la estructura argumentativa de las sentencias. Por tal razón, es importante mencionar las dos propiedades constitutivas del texto: la coherencia y la cohesión.

Uno de los estudios acerca de la coherencia y la cohesión es de Álvaro Díaz (1998) quien define a la coherencia como una propiedad semántica y pragmática del texto. Este autor plantea que la coherencia debe manifestarse tanto en un nivel microestructural (nivel intraoracional), como en un nivel macroestructural (nivel interoracional). Es decir, es la integridad y comunicatividad del texto que se verifica en el contexto. Veamos los siguientes ejemplos:

- El derecho fundamental a profesar una religión, **en consecuencia**, está reconocida en la Constitución Política del Perú.
- El reumatismo es con frecuencia el resultado de una acumulación de acidez en los músculos y en las articulaciones. **Sin embargo**, mucha gente sufre de esa incómoda enfermedad. (Ejemplo tomado de Álvaro Díaz 1999:28)

El primer ejemplo es incoherente por la ubicación del conector en esta sentencia. La consecuencia debe marcar el inicio del enunciado. En el segundo ejemplo también es incoherente porque no expresa una relación causa- consecuencia sino un contraste. Por consiguiente, vemos un error en la selección del conector.

La coherencia es el orden lógico que sigue un texto. Díaz (1999:32) señala que la coherencia alude a una organización lógico-semántica y pragmática de su estructura interna y profunda.

Rafael Núñez y Enrique del Teso (1996:147) afirma: “La coherencia es esa característica de los textos que nos hace percibir todas sus partes como compatibles en un mismo todo y que nos permite avanzar sin que la interpretación de unas partes deba

hacerse a costa del olvido de otras”. Esto quiere decir que el texto presenta un tema que es desarrollado siguiendo un orden lógico para lograr una unidad de sentido. Reforzamos esta idea con los planteamientos de Núñez y Del Teso (1996:152): “Las partes de un texto, no sólo deben guardar las relaciones de coherencia que deben darse en ellas, sino que además deben ser coherentes con el mundo posible en que se incardina la actividad comunicativa”.

Esto nos conlleva a examinar la actividad comunicativa que implica un tipo de relación en el texto a partir de la intencionalidad y del contexto en que se inscribe el acto comunicativo. Reyes (2003: 131) señala: “La coherencia surge de la interacción entre la estructura de dicho texto y la interpretación del lector, que ha de contar con datos contextuales”.

2.1.3.1 Condiciones de coherencia

Reyes (2003:131) propone cinco condiciones básicas:

a. El texto debe ser relevante.

Esta condición establece que la información que se brinde sea conocida y provechosa a los intereses del lector. Por ejemplo, la sentencia cumple un rol importante porque dará a conocer un fallo de interés para ambas partes del litigio.

b. El texto debe presuponer correctamente la información conocida.

Esta condición implica que los datos deben ser claros, precisos y pertinentes para que el juez dictamine y para que el litigante escuche o lea el fallo bien fundado.

c. El texto debe tener un tema central.

Esta condición es la más importante porque permitirá la construcción lógica del texto a partir de las ideas en el tema central. Esto permite una identidad individual del texto.

d. El texto debe argumentar de manera adecuada.

Esta condición es el sustento de la exposición. La estructura está jerarquizada de proposiciones a través de diferentes tipos de relación textual.

e. El texto debe implicar los mecanismos de cohesión pertinentes.

Las relaciones de pertenencia, inclusión, parte-todo y posición serán de importancia para establecer ciertas condiciones que permitan contar con un texto coherente.

Procedimientos de cohesión

La cohesión es definida a partir de sus mecanismos morfosintácticos. Díaz afirma (1999:32): “La cohesión se refiere a mecanismos gramaticales a través de los cuales se realiza la coherencia en la estructura externa o superficial del texto”.

En cambio, Reyes la define a partir de un tipo de relación o de unión entre las partes o elementos que permiten una construcción articulada de las unidades que la conforman. Reyes (2003:136) señala: “Se llama cohesión textual a la unión entre las partes de un texto realizada por medios de mecanismos lingüísticos. La cohesión es un fenómeno superficial, es decir, que se verifica en la superficie lingüística, por medio de pronombres, subordinadas, conectores, repeticiones, etc”.

Renkema (1999:59) afirma: “La cohesión siempre trata las conexiones evidentes en el discurso. Sin embargo, en muchos casos existen conexiones entre oraciones sucesivas que no resultan notorias en los elementos del texto”. Todo ello nos conlleva a reafirmar la importancia de los conectores y la teoría de la relevancia.

Entre los procedimientos básicos de cohesión descritos por Halliday y Hasan (1977), tenemos:

- a. Sustitución léxica: manejo de elementos correferenciales.
- b. Elipsis: la información elíptica no afectará el sentido del texto.

- c. Conectores: relación semántica que permite conocer el propósito del texto.

2.2 BASES JURÍDICAS

2.2.1 Los principios y las reglas en el razonamiento jurídico

Los principios son disposiciones de carácter general. En el caso de colisión de principios, prevalece el de mayor peso, pero sin eliminarse el otro principio. En caso de conflicto de reglas, prevalece la última norma desapareciendo la anterior, es decir, queda derogada.

El método de la aplicación de reglas es a través de la subsunción; y cuando hay conflicto de reglas se resuelven por la validez. Los principios deben ser optimizados por medio de la ponderación, es decir, por el peso que representan en la argumentación. La colisión de principios debe resolverse estableciendo una relación de precedencia entre los dos principios relevantes y condicionada a las circunstancias de un caso concreto. La optimización puede ser fáctica (adecuación de la medida o idoneidad y necesidad) y jurídica (proporcionalidad y ponderación).

Ejemplo:

Decreto Supremo X expedido por el Ministerio de Transporte: “La velocidad máxima en zonas residenciales es de 40Km/h”. Ordenanza municipal “Y”: La velocidad máxima en las zonas residenciales es de 30 Km/h.

En el conflicto de reglas se extrae una de las dos normas desde un plano de validez donde una de ellas desaparece. Esto se resuelve teniendo en cuenta los criterios de especialidad, jerarquía y temporalidad. La ordenanza municipal tiene mayor jerarquía porque tiene rango de ley lo que no ocurre con el Decreto Supremo.

2.2.2 Las dimensiones de la argumentación jurídica

La teoría de decisión judicial establece una diferencia entre argumentar y decidir. A la perspectiva jurídica del Derecho le interesa la justificación, es decir, las razones objetivas que acompañan una decisión judicial. Por tal razón, es importante

conocer la motivación de una decisión judicial. Perelman (1979:213-214) presenta lo resumido por León Pastor (1995:13) sobre la definición de la motivación judicial:

“Motivar es justificar la decisión tomada proporcionando una argumentación convincente e indicando lo bien fundamentado de las opciones que el juez efectúa. Esta justificación específica del razonamiento judicial es lo que hay que examinar más de cerca. Al explicar las razones del fallo, debe convencer a los litigantes que la sentencia no es una toma de posición arbitraria”.

Sánchez Fernández (2004: 90-91) quien resume a Rieke y Sillars (2001) considera: “Un argumento puede definirse como la unidad básica de la argumentación, que relaciona una pretensión con sus razones de apoyo”. La característica lingüístico-pragmática de los argumentos proporciona un criterio inmediato para clasificarlos atendiendo a sus usos principales en la discusión judicial.

- a. Argumentos que fundamentalmente informan. Estos provienen de diversas actividades de interpretación, prueba y calificación de hechos.
- b. Argumentos que fundamentalmente justifican. Son aquellas que están vinculadas a las actividades de justificación interna y externa.
- c. Argumentos que persuaden. Son aquellas que se usan durante la discusión jurídica por las partes con el fin de sensibilizar la opinión del juzgador.

- La dimensión formal de la argumentación

El objetivo principal es rescatar la lógica en las teorías actuales. Esta dimensión se basa en la deducción.

- La dimensión material

Esta dimensión se interesa por la verdad, la coherencia y la calidad material de los argumentos para que sean consistentes.

- La dimensión pragmática

En la pragmática hay dos aspectos: la dialéctica que se basa en el intercambio de los argumentos y la retórica a la que le interesa persuadir. Se plantea a partir de la intencionalidad del emisor. Se busca comunicar bien a fin de que logre su propósito.

2.2.3 La coherencia argumentativa

Sánchez Fernández (2004:105) orienta el estudio de la coherencia hacia una relación de compatibilidad entre proposiciones teóricas. Cuando Dworkin se refiere a la coherencia como la “consistencia basada en principios”, establece que las decisiones armonicen con los principios. Por consiguiente, establece una diferencia entre consistencia y coherencia. La primera se ubica en el plano teórico, evaluando la relación entre proposiciones. El segundo lo realiza en el plano práctico, evaluando la relación entre proposiciones y actos. Según Sánchez (2004) la consistencia es un indicador inmediato de la coherencia de los argumentos. Por otro lado, el autor indica la relación de correspondencia que se establece entre los argumentos, es decir, *“la manera en que una decisión sigue consecuentemente a los argumentos y a la conclusión que ellos resulta”*. Su ejemplo es el siguiente: Autoejecución de sentencia

“CONSIDERANDO: a) que la sentencia es cosa juzgada, b) que los efectos de la misma deben referirse que se extienden aquellos puntos que sin haber sido materia de pronunciamiento expreso, por ser consecuencia necesaria o depender indispensablemente de tal decisión, resultan resueltos tácitamente, c) que la sentencia declara la nulidad de la asamblea de la asociación en la que se eligió al señor Y como Presidente, d) que la sentencia no se pronuncia sobre la reasunción en el cargo del anterior Presidente, señor X, RESUELTO: **que mal puede disponerse que el señor X reasuma el cargo de Presidente, y dejar sin efecto el cargo que ostenta el señor Y, siendo el petitorio del señor X “improcedente”**. (Reproducción libre de la sentencia del 2do. Juzgado Civil de la Corte Superior de Arequipa, de fecha 30 de octubre de 1996, caso a Ayala vs. Rivas, materia: Nulidad de acuerdos de Asamblea). Sánchez Fernández (2004:106)

La incoherencia, según este autor surge en el hecho de que su decisión no es coherente con la conclusión implícita en los presupuestos que enuncia. Al respecto,

cabe señalar que existe un principio de congruencia procesal en materia judicial, el cual establece que debe existir una relación de consecuencia entre el petitorio de la demanda y el fallo de la sentencia.

Con respecto al tema que nos interesa, Guastini ⁷ (1997:190) destaca la importancia de la estructura del lenguaje e identifica los problemas de interpretación textual que nacen de la vaguedad y de la ambigüedad de los textos sujetos a interpretación. Este autor precisa que la vaguedad y la ambigüedad requieren decisiones interpretativas en sentido estricto y la antinomia se presenta si se niega la aplicación de un conflicto. Finalmente, una laguna (es una situación de carencia o ausencia de contenido normativo) permite tener una norma nueva (implícita). Como dice el autor, conecta una determinada consecuencia jurídica a un supuesto de hecho no previsto. Este último término nos remite a la integración jurídica o normativa, consiste en el mecanismo por el cual se busca complementar el sentido de una norma. La vaguedad significa la imprecisión o deficiencia en el contenido de una norma (toda construcción jurídica). Los mecanismos de integración jurídica son la analogía, la costumbre, los principios generales del derecho, etc.

Uno de los aspectos relacionados con la lingüística es la presencia de los tópicos en las sentencias. Javier H. Barbieri explica en su artículo De los tópicos a las sentencias lo siguiente: La expresión griega *topoi* (lugares), acuñada según T. Viehweg por el mismo Aristóteles, aparece en los libros I de los Tópicos. Se divide en tópicos comunes y específicos. Los tópicos comunes son aquellos utilizados en todas partes, generalmente aceptados y reconocidos por todos, referidos no a una materia específica sino aplicables a temáticas diversas. Según expresa Barbieri, “Los tópicos específicos son los que están aprobados por una determinada especialidad”.

Santibáñez (2002: 40-41) analiza la tópica como una teoría de las premisas en la argumentación jurídica. Se le adjudica a Theodor Viehweg (1953); en Atienza, 1993; también Alexy, 1989) impulsar con fuerza una teoría de la argumentación jurídica que rechaza a la lógica formal como instrumento para analizar los razonamientos, y proponer, en cambio, un método jurídico basado en el pensar tópico

⁷ Ricardo Guastini, “Problemas de interpretación”, en *Isonomía* N° 7, México, 1997

y/o retórico. Importa aquí disponer de algunos rasgos de la *tópica* en tanto material de la argumentación jurídica, pues se entrelazan con la discusión conceptual sobre el término de tópico expuesto. Santibáñez reitera que la *tópica* es una búsqueda y un examen de premisas. Desde el punto de vista sintáctico, los tópicos constituyen elementos adjuntos, es decir estructuras preposicionales o adverbiales que incluso pueden representar a toda una oración subordinada que anuncian al elemento principal que generalmente está constituido por la oración matriz. La importancia del tópico radica en cumplir un rol de orientador y enfatizador del sentido de la oración.

Para entender el *topoi*, Atienza (2006:83) acota que Viehweg, Ballweg, Kenberger, Rodingen y Seibert destacan “la prevalencia del nivel pragmático del lenguaje frente al sintáctico y el semántico, la acentuación del carácter de dependencia con respecto a la situación de toda argumentación y la crítica a la ontologización a la que tiende una comprensión ingenua del lenguaje (cfr. Neumann, 1986 p.55). Esto quiere decir que la intención comunicativa a partir del interlocutor y el efecto que provoca será importante en este proceso. Por ejemplo, Xavier Frías Conde (2006:31) plantea el siguiente ejemplo: “Entonces María, (ella) acaba este año la carrera”. Desde el punto de vista lingüístico, el tópico en el enunciado es “Entonces María” y el comentario está constituido por “(ella) acaba este año la carrera”, donde se puede identificar el tema (ella) y el rema (acaba este año la carrera).

En este ejemplo, el tópico crea un efecto interpretativo en el interlocutor, ya que el elemento “Entonces María” equivale al mensaje. “Entonces María, como te estaba diciendo” que está implícito en dicha expresión.

No podrá ser explicado por otra teoría que no cumpla con una explicación profunda del proceso de argumentación a fin de describir el razonamiento jurídico.

Ahora bien, Atienza (2006:84) acota que la importancia de un sistema jurídico experto consta como mínimo de una base de datos y de un motor de inferencia.

2.3 VALORACIÓN

2.3.1 De las bases lingüísticas

La contribución que brinda el análisis lingüístico en el tratamiento del discurso jurídico se determina esencialmente en el nivel sintáctico y semántico. En el nivel sintáctico, por cuanto esto se puede observar en el análisis de los constituyentes sintácticos: la frase y la oración, los cuales permiten identificar de una mejor manera los elementos argumentativos que conforman un enunciado. Xavier Frías Conde (2006:31) presenta el ejemplo siguiente:

Enunciado		
Tópico	Tema	Rema
En la estación	mis primos	dejaron la maleta en consigna.

En el nivel semántico, se puede analizar el fenómeno de la ambigüedad así como el fenómeno de la coherencia y la cohesión. Es decir, que debe identificarse cuándo un enunciado presenta una situación de ambigüedad, es decir, surge un doble sentido que crea una confusión en el interlocutor sobre la determinación del contenido real de un mensaje. Y también debe identificarse cuándo un enunciado se presenta como cohesivo y coherente; es decir, un enunciado será cohesivo cuando mantiene una armonía o concordancia morfosintáctica entre sus elementos componentes, y un enunciado será coherente cuando mantiene una armonía lógico semántica entre dichos elementos componentes, tanto a nivel microestructural como a nivel macroestructural.

2.3.2 De las bases jurídicas

Los principios y las reglas serán las pautas que todo magistrado tendrá que tener en cuenta al momento de emitir su fallo. Ahora bien, la argumentación jurídica está relacionada con el razonamiento jurídico. Por tal razón, en su estructura interna, tendrá en cuenta tanto la coherencia como la interpretación jurídica en cada caso. Para que se pueda estructurar el razonamiento jurídico, el magistrado debe tener en cuenta que las premisas que constituyen la parte considerativa de sus sentencias tienen que guardar una relación de coherencia y congruencia con la conclusión que constituye la parte resolutive de las mismas.

CAPÍTULO III: ANÁLISIS TEXTUAL DE LAS SENTENCIAS

3.1 Descripción y análisis jurídico de las sentencias

El objetivo del texto argumentativo es persuadir o convencer al receptor de la veracidad de una idea o de la interpretación de la realidad. En el análisis de diez textos jurídicos típicos y representativos, vemos cómo los marcadores textuales tienen la función de señalar los cambios de contenido, a la vez que remiten a una configuración semántica profunda en la que se convocan los presupuestos discursivos en los que se fundamenta el sentido. En un texto argumentativo, los marcadores textuales unen, conectan e instruyen la restricción, la oposición, la relación causa-consecuencia, etc.

Teniendo en cuenta que nos ocuparemos de textos jurídicos y que los instrumentos que estos utilizan para su desarrollo es la lengua, entendemos esencial combinar tanto una perspectiva de argumentación jurídica, como una de argumentación lingüística. Si bien una no dista demasiado de la otra, si es susceptible de modificarse el modo de aprehender las argumentaciones.

Se considera el esquema argumental propuesto por Cristhian Santibáñez (2002) el cual está constituido por cuatro partes: garantía, apoyo, dato y conclusión.⁸

El análisis de las sentencias⁹ es realizado considerando tanto lo jurídico como lo lingüístico, enfocando los siguientes aspectos:

- a. Argumentación: Es el texto que da razón de algo que se pregunta.
- b. Justificación: Consiste en la motivación o demostración. Comprende el marco (especificación) y la circunstancia (situación determinada). Está constituida por los puntos de partida (bases sobre la cual se debe argumentar) y los hechos

⁸ Santibáñez Yáñez, Cristián, en el texto *Teoría de la argumentación ejemplos y análisis*, presenta el esquema argumental de un argumento principal en un fallo jurídico. Tal esquema permite reconocer la potencia de la lógica jurídica, en el sentido del despliegue de los encadenamientos.

⁹ Van Dijk, Teun A., en el libro *La ciencia del texto. Un enfoque interdisciplinario*, explica la estructura de una argumentación a través de categorías jerárquicas representado en un diagrama arbolado (1996:160)

(sucesión ordenada). Los puntos de partida comprenden la legitimidad (autenticidad de un hecho) y el refuerzo (consecuencia de la legitimidad).

c. Conclusión: Es el conocimiento o idea a que se llega.

Además, el análisis considera:

- a. la organización estructural del texto y
- b. la progresión coherente del texto

Se toma en cuenta la coherencia y la cohesión textuales. Se enfatiza en los enlaces extraoracionales, los conectores sintácticos y los conectores pragmáticos.

Las fórmulas correspondientes a los párrafos de los textos argumentativos contienen un núcleo seguido de una proposición conclusiva a partir de su desarrollo u organización tanto secuencial o dialéctica.

Los estudiantes de la Maestría en Derecho Procesal de la UNMSM fueron entrevistados por la investigadora para que den su opinión especializada sobre el contenido de las sentencias que son materia de análisis.

SENTENCIA 1

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.º 835-2002-AA/TC

I. PRESENTACIÓN DEL CASO:

La empresa Full Line S.A. interpone acción de amparo contra las empresas Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú S.A. con la finalidad de que se abstengan de continuar realizando actos como la carta de requerimiento de pago en la que se adjunta la fotografía de personas vestidas de manera singular y llamativa y portando carteles con frases denigrantes, con el propósito de divulgar información de la demandante, considerando que ello amenaza su derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa, al honor y a la buena reputación, solicitando la empresa demandante que las demandas hagan valer su derecho de cobranza en la vía legal.

El Tribunal Constitucional considera que las cartas de requerimiento notarial que realiza la empresa demandada amenazan los derechos a la buena reputación y a la imagen de la empresa demandante, y que han sido recogidos como derechos

fundamentales por el Tribunal Constitucional para las personas jurídicas al pretender poner en conocimiento de las principales centrales de riesgo su situación si no cancela la deuda pendiente, para así imposibilitarle el acceso a créditos en el sistema financiero lo cual ocasionaría que la empresa demandante no cumpla sus fines sociales, por lo que el Tribunal Constitucional declara fundada la acción de amparo, disponiendo que las empresas demandadas se abstengan de continuar realizando prácticas de cobranza de la deuda que atenten contra los derechos constitucionales.

II.- LA PRESENTACIÓN DE LOS ASPECTOS RELEVANTES QUE SERÁN MATERIA DE ANÁLISIS

La decisión tomada por el Tribunal Constitucional sigue el siguiente orden argumentativo:

1) PRECISIÓN DEL PETITORIO DE LA DEMANDA:

La empresa Full Line S.A. interpone acción de amparo contra las empresas Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú S.A. con el objeto de que se abstengan de continuar realizando actos como la carta de requerimiento de pago que le enviaron en el que se adjunta la fotografía en la que aparecen personas vestidas de manera singular y llamativa portando carteles con frases denigrantes, con el propósito de divulgar información de la demandante, considerando ello que amenaza su derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho a la defensa, al honor y a la buena reputación solicitando que las empresas demandadas hagan valer su derecho de cobranzas en la vía legal.

2) DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

En el presente caso es importante:

Establecer si el requerimiento de pago mediante cartas notariales atenta o amenaza los derechos a la buena reputación y a la buena imagen de la persona.

Establecer si el poner en conocimiento de las principales centrales de riesgo existencia de una deuda de pago atentaría contra algún derecho constitucional.

Establecer si el cobro de una deuda que no se realice con las formalidades que establece la ley pero que cumple la finalidad a la que está destinada se vulneraría el derecho al debido proceso y al derecho de defensa. Es adecuado que la sociedad tenga conocimiento de aquellas personas que incumplen con pagar sus deudas, y se prevenga de los deudores morosos.

III.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LA DECISIÓN

El presente caso es un problema de interpretación en donde la idea de que la interpretación resulta siempre necesaria dado que la norma se presenta como su resultado más que como su presupuesto puede entenderse de diferentes formas y requiere ser matizada. Puede ser que la norma no adquiriera verdadera existencia hasta que se completa la interpretación o más exactamente se aplica, quizás en una línea cercana a la del realismo jurídico; o también puede significar que la norma constituye el presupuesto más de la tarea de comprensión, como puede serlo la tradición o la cultura jurídica en la que opera el intérprete, tesis que es asumida por los cultivadores de la hermenéutica.

De otro lado, debo manifestar que desde la perspectiva de la teoría del Derecho, la cuestión de fondo consiste en saber si en la normatividad jurídica, esto es la Constitución, las leyes gozan de realidad y eficacia propia y su comprensión o interpretación guarda algún tipo de vinculación con esa realidad. La interpretación es siempre necesaria, siendo la norma el resultado y no el presupuesto de dicha interpretación.

La caracterización elemental del razonamiento lógico se basa en principios axiomáticos y de coherencia interna y cuyos resultados son verdaderos o erróneos. La sentencia no solo se presenta como norma individual, sino además constituye el resultado de un proceso de elección entre posibilidades distintas que serán más o menos plausibles pero respecto de las que no procede predicar su error o exactitud lógica.

De hecho, cabe constatar que uno de los criterios más frecuentemente utilizados por el Tribunal Constitucional para enjuiciar leyes o decisiones de la justicia ordinaria es el de la razonabilidad o también el de la racionalidad. Los órganos que administran justicia se caracterizan por adoptar decisiones firmes y vinculantes que por cierto pueden ser erróneas, subjetivas o irracionales.

IV.- CUERPO DEL INFORME

Respecto al problema de interpretación en el caso planteado, se debe distinguir dos situaciones de comunicación: la comprensión directa de un lenguaje y la existencia de dudas que deben ser superadas precisamente por la interpretación *sensu stricto*. Puede pensarse que la distinción entre un concepto de interpretación limitado a las situaciones de dudas puede ser predicable no solo dentro de la interpretación *sensu largo*. Generalmente, una interpretación parte del sujeto que interpreta como del objetivo.

Los problemas que presentan las normas pueden resultar ambiguas y vagas; sin embargo el intérprete judicial no aplica nunca normas aisladas, sino más bien conjuntos normativos en los que se tiene en cuenta una pluralidad de normas y, en último término, el entero ordenamiento jurídico. Pues bien, cuando contemplamos un caso o una norma a la luz del sistema jurídico, pueden surgir cuatro clases de dificultades: lagunas, redundancias, presuposiciones o reenvíos y antinomias.

En el presente caso, materia de análisis, debemos precisar qué significan los conceptos de derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa, el derecho al honor y a la buena reputación y si el requerimiento de pago por cartas notariales afecta dichos derechos o constituyen amenaza.

La Tutela Jurisdiccional es el derecho que tiene toda persona para recurrir al órgano jurisdiccional para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses.

El derecho de defensa es una institución procesal que asegura la existencia de un debido proceso, en donde las partes pueden intervenir dentro de un proceso con sujeción al debido proceso.

El honor es el sentimiento de autoestima, es decir, la apreciación positiva que la persona hace de sí misma y de su actuación.

El honor y la reputación son derechos complementarios de la persona, y esenciales para que puedan vivir en sociedad.

Requerimiento de pago se entiende como aquel acto dirigido a un deudor con el objeto de que satisfaga su deuda o de que cumpla su obligación, bajo pena de proceder contra él, en la forma que la ley establece.

De los términos señalados se desprende que no afectaría ningún derecho constitucional el requerimiento de pago, teniendo en cuenta que el artículo 1219° inciso 2 del Código Civil faculta al acreedor a procurarse la prestación o hacerla procurar por otro, a costa del deudor.

El tema central del caso es si existió amenaza a la imagen y a la buena reputación de la empresa denunciante. Considero que no se daña ningún derecho que se consigna, por cuanto el acreedor está en su legítimo derecho de exigir el pago de su acreencia al deudor, la misma que es permitida por el Código Civil como una autotutela válida.

El Tribunal Constitucional señala en su fundamento 2 que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida exclusivamente por el Poder Judicial, indicando que una de las características de un Estado de Derecho es ofrecer jurisdicción a los particulares para la solución de los conflictos que surgen de las relaciones sociales. Es errónea la interpretación que hace el tribunal por cuanto el Poder Judicial no es el único que puede solucionar un conflicto de intereses como el cobro de una deuda, también existe la vía arbitral reconocida por la Constitución Política o

también por la conciliación extrajudicial ante los centros de conciliación donde las partes pueden poner fin a su conflicto de intereses. De otro lado cabe preguntarnos si la comunicación a la Central de Riesgo de Crédito afecta la buena imagen o la buena reputación de la empresa.

Considero que no se afecta dichos derechos, por cuanto es adecuado que la sociedad sepa quiénes no cumplen con su obligación a fin de prevenir de los deudores morosos.

En este caso se podría establecer que existen dos derechos: por un lado, el de la persona jurídica a mantener en reserva su deuda contraída y su morosidad en el pago; y, por otro lado, el derecho de la sociedad en su conjunto a tener conocimiento de aquellas personas morosas en sus pagos, que no son dignas de crédito y a garantizar a la sociedad para saber con quién se está contratando una obligación y no ser víctima de estafa.

Considero legítima la comunicación a las principales centrales de riesgo si es que no cancela la deuda pendiente, lo cual imposibilitaría el acceso a créditos en el sistema financiero y comercial.

De acuerdo a lo expuesto, estamos ante una colisión de principios: el derecho a la información y el derecho a la reserva, lo cual se resuelve en la dimensión del peso o importancia, estableciendo relaciones de precedencia condicionada a las circunstancias del caso concreto en la que prevalecerá un principio sobre el otro.

Para establecer estas relaciones de precedencia condicionada es necesario condicionar la optimización fáctica y jurídica de los principios en colisión.

Desde el punto de vista fáctico, consideramos que el derecho a la información al que tiene derecho toda persona de parte de la Central de Riesgo de Crédito de aquellos deudores morosos, es idónea porque permite tener conocimiento de la persona con quién se contrata y garantizar su crédito; teniendo presente que los derechos fundamentales no son absolutos, pueden ser restringidos por otros principios de mayor peso o importancia.

Asimismo, es legítimo que se inscriba en la Central de Riesgo de Crédito a toda persona morosa que incumple el pago de la deuda contraída, cumpliéndose de esta manera la optimización jurídica mediante una apropiada ponderación de principios colisionados, donde con relaciones de prevaecía condicionadas se dé el predominio a la seguridad de saber con quién contratar.

V.- LA RECONSTRUCCIÓN DEL CASO

El presente caso, materia de análisis, da lugar a la acción de amparo interpuesta por Full Line S.A. contra la empresas Hombrecitos de Color S.A. a fin de que se abstenga de realizar actos como enviar carta de requerimiento de pago cuyo propósito según la demandante es la divulgación de la información del demandante, indicando que se amenaza a su derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa, al honor y a la buena reputación. Al respecto, considero que el hecho de remitir cartas de requerimiento vía notarial o por otra vía no afecta ningún derecho constitucional, teniendo en cuenta que el artículo 1219° inciso 2 del Código Civil faculta al acreedor a procurarse la prestación o hacerla procurar por otro, a costa del deudor.

No se atenta contra el honor y la buena reputación de la persona deudoras comunicando a la Central de Riesgo de Crédito, todo lo contrario se pone en conocimiento de las personas que accedan a dicho registro; y menos se amenaza o atenta los derechos a la tutela jurisdiccional, de defensa, al honor y a la buena reputación el envío de una carta de requerimiento de pago. Este acto es una facultad que se le concede al acreedor para requerir judicial o extrajudicialmente el pago al deudor moroso; por lo que considero que el Tribunal Constitucional hace una interpretación errónea, al indicar que las cartas de requerimiento notariales amenazan los derechos a la buena reputación y a la imagen, lo cual no comparto, por cuanto es lícito y válido requerir al deudor por carta notarial para su pago, y no constituye ninguna amenaza al derecho a la tutela jurisdiccional, ni al derecho a la defensa, ni al honor, ni a la buena reputación, por lo que debió declararse infundada la acción de amparo.

SENTENCIA 2

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.º 0425–2003–AA/TC

- 1. Javier Luis Mendoza Alegre interpone acción de amparo contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Tacna de fecha 16/12/2002 que declaró improcedente la acción de amparo de autos. Además, contra la Sección de Policía Fiscal de Tacna por la presente afectación de sus derechos constitucionales a la propiedad por retención vehicular de su propiedad y haber sido detenido de manera irregular, y a que su vehículo sea restituido.*
- 2. La Segunda Fiscalía Mixta de Tacna contesta la demanda pidiendo que la demanda sea declarada infundada por falsa y tendenciosa.*
- 3. El demandante desiste de la acción de amparo en lo que respecta al Jefe de la Policía Fiscal de Tacna que aceptó dicha petición. El mismo juzgado declaró improcedente la demanda por considerar que el demandante es presunto autor del delito de contrabando, el vehículo materia del litis fue internado en los almacenes de Tacna y no se procedió tampoco a la devolución que fue solicitada.*
- 4. La Sala Civil de la Corte Superior de Tacna confirmó la demanda apelada aduciendo que existían indicios razonables de la comisión de un delito enmarcándose la intervención del Ministerio Público.*
- 5. El Tribunal Constitucional formula en cinco párrafos. En el primero, dice que la presunta afectación del derecho de propiedad sobre el vehículo se produjo a partir de la investigación policial por la presunta comisión del delito de contrabando. En el segundo, dice que la inmovilización del vehículo se encuentra plenamente justificado, dado que en torno a dicho bien gira la investigación fiscal y judicial iniciada contra el demandante accionante Mendoza Alegre por el presunto delito de contrabando. En el tercero, señala que la incautación del vehículo es con el fin de verificar los datos correspondientes a las piezas principales del vehículo para determinar que el vehículo fue ingresado por partes porque existen indicios razonables de ello, así*

como el año en que supuestamente fue fabricado, puesto que se declaró en el año 1994 cuando se presume que el año correcto es 1991. En el cuarto fundamento se sostiene que si bien es cierto que el proceso penal seguido contra el demandante ha quedado archivado, también lo es que en dicho proceso debe solicitarse la devolución del vehículo incautado. A tenor del Art. 221 del Código Procesal Civil constituye una declaración asimilada, no habiéndose acreditado que el demandante hubiese solicitado la devolución del vehículo con anterioridad a la fecha de expedición de la sentencia del Tribunal Constitucional; y, el quinto dice que el Colegiado (Tribunal Constitucional) que con fecha 7 de febrero del 2003 denunció penalmente al demandante por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento falso respecto de la determinación del año de fabricación del vehículo incautado.

En consecuencia, al no acreditarse la afectación de derecho alguno, el Tribunal Constitucional estima que la demanda debe ser desestimada y confirma la sentencia apelada.

Efectuado el análisis de los fundamentos de la sentencia, hemos encontrado que el fallo del Tribunal Constitucional se basa en los antecedentes del juicio que corre en el expediente N° 0425-2003-AA/TC, seguido en la ciudad de Tacna por Javier Mendoza Alegre, sin mayor sustentación que ampare su demanda contra las autoridades de esa ciudad, quienes al parecer han dado cumplimiento a las órdenes superiores. No existe el debido proceso en el presente caso porque los fundamentos del Tribunal Constitucional para denegar la pretensión del demandante no son consistentes desde el punto de vista procesal.

Por consiguiente, los argumentos del demandante adolecen de consistencia y al mismo tiempo los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional se basan solamente en las pruebas acumuladas en el expediente que corre en autos. A nuestro parecer, la sentencia que nos ocupa es una consecuencia de la apreciación de hechos sustentados en la Corte Superior de Tacna sin más pruebas preliminares acumuladas por el Juzgado Civil de Tacna y confirmado por la Corte Superior del Distrito Judicial

de Tacna que a nuestro parecer ha servido de sostén y base de dicho pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

SENTENCIA 3

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.º 2700–2006–PHC/TC

Los principios en conflicto que se exponen son los siguientes: el principio de la dignidad humana, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad y los principios de orden público, la moral, la seguridad de la población.

El razonamiento del Tribunal Constitucional está relacionado con la propuesta de Robert Alexy. Los estudiantes precisan que el proceso es a partir de un caso moral y es a partir de este caso que se pasa a las leyes y de las leyes a la argumentación jurídica y, por último, a la decisión del juez. Consideran que es un discurso práctico, general, caracterizado por ser limitado y a menudo presenta como válidas varias opciones donde se refieren a que la sociedad limita tal discurso recurriendo a las normas del sistema jurídico peruano. Ahora bien, estas normas son insuficientes; por tal razón, se refieren a la teoría de la argumentación jurídica o discurso jurídico, que estudia las condiciones que una decisión judicial o una ley pueda ser discutida racionalmente.

La argumentación jurídica está fundamentada por las siguientes razones expuestas:

1. Con relación al derecho fundamental de la libertad religiosa.
 - a. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
 - b. El derecho a la vida, a la libertad religiosa y a la integridad física y psicológica
 - c. El habeas corpus protege a la libertad física y demás.
 - d. Ante la afectación de los derechos fundamentales, pueden ser protegidos a través de un proceso de habeas corpus.
 - e. La libertad de conciencia, de reunión y de religión.

- f. El TC señaló que la actividad religiosa tiene un aspecto negativo que implica la no ingerencia para la práctica de las creencias y actividades. El aspecto positivo implica que el Estado debe generar las condiciones mínimas para ejercer potestades que comportan su derecho a la libertad religiosa.
- g. El derecho fundamental a profesar una determinada religión.
- h. La persona que se encuentra internada y procesada o sentenciada en un establecimiento penitenciario no puede ser impedida de su derecho fundamental a la libertad religiosa.

2. Con relación al derecho fundamental a la libertad de información

3. Con relación al beneficio penitenciario de la visita íntima

En conclusión, el Tribunal ha optimizado el principio de la dignidad de la persona humana y, además, ha desarrollado un razonamiento práctico, teniendo en cuenta la Constitución Política del Perú. Las razones expuestas determinan la libertad religiosa dentro de las normas que integran el sistema jurídico.

SENTENCIA 4

ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.º 2655-2002-AA/TC

A. ANÁLISIS DOCUMENTAL

ASPECTO FORMAL

El documento que se evalúa indica los siguientes datos:

- número de sentencia
- número de expediente
- lugar
- nombre del recurrente
- fecha de la sentencia donde indica la Segunda Sala del Tribunal Constitucional y la nómina de los tres magistrados que asisten a la reunión respectiva para pronunciar la sentencia que nos ocupa.

a. Son partes de la sentencia los siguientes rubros:

1. Asunto: indica de forma resumida el motivo del recurso extraordinario contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima de fecha 15 de agosto del 2003 que declara improcedente la acción de amparo.
2. Antecedentes: en cuatro párrafos se describe en forma sucinta desde la demanda contra Petróleos del Perú por concepto de pensión renovable. La secuencia y trámite de la demanda que en Primera Instancia fue declarada infundada y confirmada la apelada declarándola improcedente por la Tercera Sala Civil.
3. Fundamentos: falta de certeza sobre la pensión renovable y carencia de prueba suficientes a criterio del Tribunal Constitucional.
4. Falla: el tribunal falla confirmando en parte la apelada declaró infundada las excepciones propuestas y revocándola y declaró improcedente la demanda dejando a salvo el derecho recurrente para hacer valer su pretensión con arreglo a ley.
5. Se indica el nombre y apellido de los tres magistrados del Tribunal Constitucional.

B. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

- El recurrente es pensionista del Decreto Ley 20530 quien solicita que la demandada reajuste de forma periódica la pensión que recibe por ser renovable de acuerdo a ley. El Juzgado de Primera Instancia declara infundadas las excepciones propuestas y fundadas en parte la demanda a fin de que pague la demandada la pensión sin tope e improcedente pago de intereses. El demandante apela por no encontrar conforme la sentencia a su pretensión.
- La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la apelada en el extremo que declara infundadas las excepciones propuestas y revoca el extremo que declara fundada la demanda y reformándola la declara improcedente en todos sus extremos, por considerar que de los documentos

presentados no se acredita la disminución en el monto de la pensión que el recurrente percibe.

- El recurrente interpone recurso de amparo contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima que declara improcedente la acción de amparo de autos.
- La Sala Segunda del Tribunal Constitucional fundamenta su pronunciamiento en dos puntos. En el primero, sostiene que el recurrente se refiere al reajuste periódico de la pensión. Dice el Tribunal que no existe documento que permita tener la certeza que el recurrente goza de una pensión nivelable. En el segundo, dice que de las boletas que corre en autos se observa que al demandante se le ha venido incrementado el monto de su pensión, no existiendo documento alguno que acredite de manera cierta e indubitable que su pensión haya sido rebajada o que se le haya aplicado tope alguno. Por tanto, careciéndose de pruebas suficientes no es posible decidir a favor del demandante.
- Con estos fundamentos, el Tribunal Constitucional falla confirmando en parte la apelada y declara infundada las excepciones propuestas y revocándolas declaró improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para hacer valer su pretensión conforme a ley.

C. APRECIACIÓN DE LOS HECHOS

Reconocemos y valoramos positivamente los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara improcedente una demanda de amparo presentada por un ciudadano que ha cesado sujeto al régimen del Decreto Ley 20530; sin embargo, de la interpretación de los fundamentos de la sentencia se deduce que si no corre en autos la resolución de otorgamiento de pensión al recurrente ni otro documento que pruebe la certeza de pensión nivelable y, que careciendo de pruebas suficientes no cabe decidir a favor del demandante conforme solicita ; por lo que, este debe hacer valer su pretensión con arreglo a ley. En este caso, a nuestro parecer, el alto Tribunal Constitucional no debía haber resuelto el recurso de amparo remitiendo el caso a lo que disponga la ley, se entiende que en

este caso será el trámite administrativo a que se refiere la última parte de la sentencia.

3.2. Análisis lingüístico-discursivo de las sentencias

La coherencia es una propiedad semántica y pragmática que parte de las relaciones lógicas. La cohesión se refiere a los mecanismos gramaticales a través de los cuales se realiza la coherencia en la estructura externa o superficial del texto.

La sentencia ¹⁰1 tiene la siguiente estructura:

- El asunto: el tema que es objeto de análisis por el Tribunal Constitucional.
- Los antecedentes: todos los hechos que se han desarrollado durante el trámite del proceso, es decir, los actos procesales desarrollados por las partes y el juzgador.
- Los fundamentos: el sustento fáctico y el sustento jurídico que respalda la decisión que va a tomar el Tribunal Constitucional sobre el asunto que es materia de análisis.
- El fallo: la decisión que toma el Tribunal Constitucional sobre el asunto de fondo que se discute en el proceso.

Procederemos a continuación a realizar una descripción de las sentencias a partir de sus características generales.

SENTENCIA 1

- *En Lima, a los 10 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, **pronuncia** la siguiente sentencia.* (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

¹⁰ Esta estructura formal de las sentencias que son expedidas por el Tribunal Constitucional se distingue de la estructura formal que presentan las sentencias que son emitidas por el Poder Judicial.

Al referirse a la Sala Primera del Tribunal Constitucional, evidencia una personificación del objeto ideal (Sala Primera del Tribunal Constitucional).

En el segundo párrafo observamos lo siguiente:

ASUNTO

- ***Recurso extraordinario** interpuesto por Full Line S.A. contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, **de fojas 211, su fecha 25 de junio de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.** (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).*

En este párrafo se omite el determinante (El) recurso extraordinario. Se observa el uso de arcaísmo (fossilización) de fojas 211. Los cambios de los tiempos verbales es notorio se emplea el presente histórico y luego se pasa al pretérito. Alcaraz y Hughes (2002:3) señalan que “el uso del elemento arcaizante se ve también en el empleo del futuro imperfecto del subjuntivo: el que robare, o de pronombres poco usados: cualesquiera”. Estos datos se evidencian en los rasgos del español jurídico de los textos de la Unión Europea según acotan los autores.

La redundancia de la frase preposicional “de autos” resulta inadecuada porque crea ambigüedad en el lector no especializado. Da lugar a una imprecisión léxica. Otro detalle es el uso indebido de la coma imposibilita la aparición de conectores. Un aspecto importante para indagar es que en el campo jurídico puede utilizarse la coma para lograr una interpretación biunívoca. Así también podemos observar el uso de la coma que marca una coordinación o superposición de argumentos y conclusiones, pero sin explicitarla lo que provoca una menor transparencia del sentido del discurso en implicación por parte del interlocutor y, sin embargo, un mayor esfuerzo por parte del interlocutor para su comprensión y, sin duda, mayor porcentaje de interpretación por opacada en la dinámica discursiva utilizada.

Alcaraz y Hughes (2002:2) apuntan dos rasgos que caracterizan a los textos jurídicos españoles. El primer rasgo es la opacidad que conduce según dicen los autores al oscurantismo que es “la oposición sistemática a que se difunda la instrucción en las clases populares”.

Notamos una discordancia en (su fecha) que debe decir: con fecha. Además, identificamos una imprecisión léxica “Full Line S.A.” debe anotarse empresa Full Line S.A.

ANTECEDENTES

- *Con fecha 13 de julio de 2000, la **empresa recurrente** interpone acción de amparo contra la empresa Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú S.A., con el objeto de que se abstengan de **continuar realizando actos** como la carta de requerimiento de pago de fecha 11 de julio de 2000 y la **fotografía adjunta, en la que se aprecia a personas vestidas de manera singular y llamativa y portando carteles con frases** denigrantes, con el propósito de divulgar información de la demandante, pues considera que ello amenaza su derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa al honor y a la buena reputación. **En consecuencia**, solicita que **las demandadas** hagan valer su derecho de cobranza en la vía legal y solicitan el pago de costos y costas del proceso. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).*

Ahora bien, en el antecedente identificamos una anáfora “la empresa recurrente” en el ámbito jurídico es aquel que interpone un recurso impugnatorio. Por tanto, la palabra recurrente es una anáfora que alude a Empresa Full Line S.A. Un segundo aspecto de interés para este análisis es la vaguedad léxica. En el párrafo se resalta con negrita “**continuar realizando actos**”, pero no especifica a qué actos se refiere. Cuando se señala “la fotografía adjunta” en el párrafo no hay cohesión ni un orden lógico que sugerimos al decir: “Que lleva adjunta una fotografía”. Asimismo, debe existir coherencia cuando se refiere “a la fotografía adjunta, en la cual (...)”. Otro detalle es el enunciado “En la que se aprecia a personas vestidas de manera singular y **llamativa portando carteles**” en el cual se evidencia un error en el uso del gerundio y

el uso reiterado (polisíndeton) de la conjunción (y). La omisión (las personas que estaban vestidas) la elisión (que). Reiteramos en esta primera parte ciertas lagunas porque hay vacíos en la información.

Otra característica es la falta de cohesión porque no distribuye adecuadamente los constituyentes sintácticos de manera óptima y crea innecesariamente anáforas redundantes “con el propósito de **divulgar información** de la demandante”. Finalmente, cuando señala a “las demandadas” debe precisar las dos empresas en cuestión porque provoca una imprecisión.

- *Telefónica del Perú S.A.A. contesta la demanda señalando que la relación contractual **que tiene con la empresa Hombrecitos de Color S.A.** es de naturaleza civil, pues se trata de un contrato de locación de servicios, y que ello no significa que **tengan** alguna responsabilidad en la labor que **realiza la citada empresa** con relación a las estrategias y métodos de cobranza para hacer efectiva la acreencia que tienen a su favor. **Asimismo, propone** la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva.* (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

Cuando se refiere a la empresa Telefónica del Perú S.A., utiliza el verbo en singular (contesta) y más adelante lo pluraliza (tengan). Existe una falta de precisión al referirse a la empresa Hombrecitos de Color S.A. Primero lo registra como un colectivo que lo concuerda con el verbo y luego lo pluraliza. No especifica los fundamentos de hecho al utilizar el adverbio “asimismo”, en su lugar debe emplear el conector “por tanto”, debido a que se presenta un antecedente y una conclusión.

- *Hombrecitos de Color S.A. **contesta** la demanda señalando que es una empresa constituida de acuerdo a ley, cuyo objeto es la administración **de cartera de cobranza**, gestión de recuperación judicial y extrajudicial de las deudas y demás actividades afines, **añadiendo** que efectivamente **cursó cartas a la demandante** con la finalidad de que cumpliera con hacer efectivo el pago de la obligación pendiente a favor de Telefónica del Perú S.A.A. **Por último**, manifiesta que no ha enviado fotografía alguna a la*

empresa demandante. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

En este párrafo hay una imprecisión léxica en la frase preposicional “de cartera de cobranza” que significa administrar una cartera de cobranza. Si bien, hay un fenómeno de polisemia con la palabra *cartera* en el léxico común: utensilio semejante a las tapas de un libro, con varios compartimientos para llevar billetes. Cargo y funciones de un ministro. Conjunto de valores o efectos comerciales que conforman parte del activo de un comerciante o empresa. En el lenguaje jurídico se refiere a la relación de, registro de. También se puede identificar en la expresión siguiente: “*gestión de recuperación judicial y extrajudicial de las deudas y demás actividades afines, añadiendo que efectivamente cursó cartas a la demandante*”. El gerundio utilizado proyecta la idea que se refiere a otro enunciado. Identificamos una nominalización “*a la demandante*” con la finalidad (sust), de (prep.), que(conector)”. La falta de precisión en la redacción de la demanda y de la contestación de la demanda puede llevar confusión en el razonamiento jurídico del juez., lo que le llevaría a emitir una sentencia injusta. Otro aspecto es el argumento de la demandante no es cursar cartas. Hay otra imprecisión: no debe usarse el conector “**por último**” sino “**pero**”. No se ha establecido de dónde proviene los actos vulnerativos: la carta de requerimiento de pago o de la fotografía que se adjuntó.

- *El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en derecho Público de Lima, con fecha 31 de agosto de 2000, declaró fundada la excepción de la propuesta e improcedente la demanda por considerar que la fotografía original a la que se alude en la demanda no obra en autos, y que se alude en la demanda no obra en autos, y que la parte emplazada ha negado haberla remitido.* (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la controversia planteada requiere de la actuación de medios probatorios.

Toda demanda contiene un pedido concreto, pero ese pedido debe estar sustentado en los hechos que han ocurrido y en las normas que lo amparan. No hay coherencia ni cohesión. No están determinados con precisión el tópico, el tema y el foco. Existe una imprecisión en la emisión del enunciado. Un cierto número de datos importantes. No se precisa un cierto número de datos importantes en el texto. No se entiende por qué la empresa Telefónica es incluida como codemandada en el proceso y esto se debe por la falta de datos. La falta de definición de la emisión de los enunciados produce la falta de cohesión morfosintáctica y la falta de lógica semántica. Alcaraz y Hughes¹¹ (2002:3) señalan que sería necesario que el escritor legal utilizase los términos jurídicos inevitables y huir de todos aquellos tecnicismos legales innecesarios para que la sociedad pueda comprender la ley que, como se sabe, su desconocimiento no exime su cumplimiento. Revisemos cuando dice “no obra en autos”, el lector común no entiende el uso de arcaísmo que son fosilizaciones del siglo XVI, XVII. Los autores (2002:4) enfatizan algunas tendencias léxico-estilísticas más importantes del español jurídico como el gusto por lo altisonante y lo arcaizante. El uso inadecuado de la preposición “El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado **en** Derecho Público de Lima” debe decir: “de Derecho Público de Lima”. La ambigüedad en el texto es identificada cuando no aparece ninguna fotografía en el expediente, pero el juez deja entrever que se envió alguna copia de la fotografía en lugar de la original. Además, hay una imprecisión cuando dice “y que la parte **emplazada** ha negado haberla remitido” no se sabe a quién se refiere, es decir, a qué empresa alude.

En el último párrafo de esta parte, el enunciado “la recurrida confirmó la apelada” alude a la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima como una anáfora dando lugar a un uso inadecuado del término. Existe falta de referencia (apelada y recurrida). Recordemos que recurrente se refiere al litigante y recurrida es el juez o la Sala que expide la resolución. La falta de congruencia (sentencia de vista que se refiere a la Segunda Instancia). Si nos preguntamos Quién apeló, la respuesta es Full Line S.A.(no se precisa en el texto) y la apelada es la sentencia de la Primera Instancia.

¹¹ E. Alcaraz Varó y B. Hughes, Los rasgos generales del español jurídico. En: Apuntes del curso de español jurídico. El español jurídico. Ariel Derecho, Barcelona, 2002

Se reconoce que hay uso inadecuado de los tiempos verbales (interpone, contesta, declaró). Otra característica morfosintáctica es la locución preposicional “por considerar”. Hay un uso inadecuado de la conjunción “e” que debe reemplazarse por la estructura locucional “y por lo tanto”. Por último, la imprecisión y la vaguedad en el enunciado: “fundada la excepción de la propuesta improcedente” será aclarada si se precisa en respectivo modo: El Primer Juzgado en Derecho Público de Lima declaró fundada la excepción propuesta por la empresa.

FUNDAMENTOS

La explicación debió estar al inicio en la demanda y en la contestación. No olvidemos que es la parte considerativa. Son los fundamentos emitidos por el Tribunal Constitucional en sentencia que resuelve el recurso extraordinario interpuesto por la empresa Full Line S.A.

- *Conforme se aprecia de fojas 14 a 16, la empresa Hombrecitos de Color S.A. mediante cartas de fechas 20 de junio, 26 de junio y 11 de julio de 2000, requirieron a la demandante el pago de la suma de S/. 567.24, por no haber abonado el consumo correspondiente al servicio telefónico N° 421-7012, asimismo, en ellas proponían llegar a un acuerdo de refinanciación, advirtiendo que, en caso contrario, iniciarían las acciones legales correspondientes, solicitarían medidas cautelares y pondrían esta situación en conocimiento de las principales centrales de riesgo para el registro de la deuda, para así imposibilitar el acceso a créditos en las instituciones del sistema financiero y comercial en el territorio.* (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

La expresión fosilizada “de foja” con el uso incorrecto de la preposición (de) debe decir en las hojas o en las páginas 14 al 16. Igualmente, el uso incorrecto de la preposición “de fechas” debe decir: con fecha. La falta de concordancia entre el sujeto (empresa Hombrecitos de color S.A.) y el verbo (requirieron). Al referirse a la empresa demandante existe una imprecisión. El empleo del verbo vacío: proceder a la adjudicación, tomar parte, entre otras expresiones se evidencia en otra forma de

perífrasis verbal a través de la infinitivización verbal “por no haber abonado”. Si manifestamos que el demandante no abonó tenemos que precisar a qué servicio se refiere. Existe una imprecisión “proponían llegar a un acuerdo de refinanciación (de la deuda). La supresión de pronombres en un último párrafo: “para así imposibilitar (le) el acceso a (los) créditos en las instituciones del sistema financiero. El uso inadecuado del pronombre provoca vaguedad y una falta de cohesión “en ellas proponían llegar a un acuerdo de refinanciación”. Debe decir la empresa Hombrecitos de Color S.A. y concordar con el verbo. El uso inadecuado del sufijo derivativo refinanciación (-ción en lugar de -miento). Notamos la presencia de nominalizaciones a partir de verbos – ción, -miento: acusación, procedimiento. En el último párrafo, la información: “comercial en el territorio” es innecesaria y confusa. La locución adverbial (en caso contrario) hay una simplificación.

Evaluamos una incoherencia que separa la parte del todo “solicitaron medidas cautelares incrustado dentro del Proceso principal que es la demanda. El uso incorrecto de los tiempos verbales “pondrían” (plural). Otro aspecto es la redundancia comercial es análogo a financiera y además, debe decir en el país y no en el territorio.

- *De acuerdo con los artículos 138º y 139º, inciso 1), de la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida, exclusivamente, por el poder Judicial, pues una de las características de un Estado de **derecho** es ofrecer jurisdicción a los particulares para la solución de los conflictos que surgen en las relaciones sociales.* (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

Observamos un error al escribir el numeral 1) y debe anotarse el numeral en arábigo 1º. Además, no figura la cita textual entre comillas: “la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida, exclusivamente, por el poder judicial”. El párrafo inicia con la preposición (de): “de acuerdo con los artículos”.

El marcador discursivo expresa la topicalización (de acuerdo con los artículos) cumple con el propósito de enfatizar.

- *Tal como lo ha establecido este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente N° 2790-2002-AA/TC, si bien la empresa Hombrecitos de Color S.A. puede tener como giro de negocio el cobro de obligaciones a terceras personas, ello debe ejercerse dentro de un contexto de un estado democrático de derecho, con arreglo a ley y previa acreditación de las facultades correspondientes. En caso contrario, se vulnerarían los derechos al debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 139°, incisos 3) y 14), de la Constitución Política del Perú*". (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

En el tercer párrafo se inicia con el adjunto "tal como lo ha establecido". Hay una falta de precisión cuando se refiere al colegiado porque puede ser la Sala de Derecho Público o el Tribunal Constitucional. Uso del deíctico "este" alude al Tribunal Constitucional y debe ser precisar claramente. Otro detalle es el verbo recaer (recayó en el error es un arcaísmo en el lenguaje judicial debe ser reemplazada por contenida. El carácter condicional "si bien la empresa Hombrecitos de color S.A. puede tener como giro de negocio el cobro de obligaciones a terceras personas, ello debe ejercerse. El uso de locuciones como "giro de negocios" tiene un significado único, objeto de negocio, la actividad. Es un adjunto que anota un sintagma adverbial. Otro error es "el cobro de obligaciones a terceras personas deben decir: **de** terceras personas. Hay una vaguedad en la palabra "amenaza" y para ello tiene que deslindarse la oposición entre las palabras amenaza y vulneración. Según la DRAE, "amenaza" significa dicho o hecho con que se amenaza. Pl. Der. Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de una mal grave para él o su familia. Entendemos la palabra *amenaza* cuando alguien va atentar contra una persona o con sus bienes y *vulnerar* es cuando se ha producido el daño en la persona o en los bienes La palabra vulneración significa acción y efecto de vulnerar. Ahora bien, vulnerar significa transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. Dañar perjudicar: Con sus reticencias,

vulneró la honra de aquella dama. Entonces, cuando dice “se vulnerarían los derechos al debido proceso y a la defensa” es la transgresión limitando el derecho que tiene cada una de las partes de intervenir en el proceso con igualdad y con respecto a sus derechos constitucionales por cuanto, el debido proceso comprende el derecho a ser notificado de todas las resoluciones que se expidan dentro del proceso así como ejercer su derecho de defensa contestando la demanda, ofrecer medios probatorios, el derecho de impugnar las resoluciones judiciales que no estén de acuerdo . Otro aspecto es el error en anotar los incisos del artículo 139° que debe decir: 3.° y 14.° de la Constitución Política del Perú. La imprecisión aparece cuando dice: con arreglo ley debe decir: de acuerdo a la ley o de conformación con la ley. Otro error es el uso inadecuado de la conjunción copulativa “y previa acreditación de las facultades correspondientes” debe decir: siempre que haya acreditado tener las facultades correspondientes para dicho cobro. El uso del verbo vulnerarían es inapropiado, debe decir: estarían vulnerando sus derechos. Hay una falta de precisión porque se omite la explicación.

En este párrafo observamos la presencia del conector “lo cual” de manera apropiada porque hay un adjunto, pero cuando se refiere a la declaración asimilada la ausencia de un conector se hace evidente y debe decir: ya que la empresa celebró un contrato civil para que proceda la cobranza de deudas. Hay una imprecisión cuando indica la citada, pero no especifica de manera directa si se refiere a la empresa Hombrecitos de Color S.A. La supresión de palabras es marcada. Por ejemplo, en algunos párrafos, se menciona la empresa Telefónica y en otras solo se anota Telefónica S.A.

- *En el caso de autos, la empresa Hombrecitos de Color S.A. no ha acreditado contar con las facultades necesarias para que, en representación de Telefónica del Perú S.A., requiera el cobro de la deuda. Si bien la empresa Telefónica del Perú S.A.A. no ha efectuado directamente los actos que constituyen amenaza constitucional, conforme lo afirma en el escrito de la contestación de la demanda, lo cual, de conformidad con el artículo 221° del Código Procesal Civil, constituye declaración asimilada, ha celebrado con la citada empresa un contrato*

civil para que proceda a la cobranza de deudas; en tal sentido, asume las consecuencias de los actos realizados por la empresa Hombrecitos de Color S.A. en cumplimiento del referido contrato, motivo por el cual debe desestimarse la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

- *Por otro lado, está demostrado en autos, mediante las cartas de requerimiento notariales, que la empresa Hombrecitos de Color S.A. amenaza los derechos a la buena reputación y a la imagen de la empresa demandante, que han sido reconocidos como derechos fundamentales por este Tribunal constitucional para las personas jurídicas, en la sentencia N° 0905-2001-AA/TC, al pretender poner en conocimiento de las principales centrales de riesgo su situación si es que no cancela la deuda pendiente, para así imposibilitarle el acceso a créditos en el sistema financiero y comercial en el ámbito nacional, lo cual ocasionaría que la demandante no cumpla sus fines sociales.*

En este párrafo se presenta un antecedente y un consecuente: por otro lado, está demostrado en autos. Consideramos apropiado decir: Por otro lado, se ha demostrado en el proceso que la empresa Hombrecitos de Color S.A., mediante cartas notariales de requerimientos de pago, ha amenazado los derechos constitucionales a la buena reputación y a la imagen demandante, de los cuales (derecho) han sido reconocidos, como derechos fundamentales de toda persona jurídica, tal como consta en la sentencia N° 835-2002-AA/TC será expedida por este Tribunal Constitucional, puesto que la empresa de Hombrecitos de Color S.A. imposibilitó que la empresa demandante pudiera acceder a los créditos en el sistema financiero a nivel nacional, al intimidar a la empresa demandante con comunicar a los principales centrales de riesgo de la situación crediticia de dicha empresa si encuentra acreditado en autos que la empresa Hombrecitos de Color S.A. haya adjuntado a las cartas de requerimiento de pago la fotografía cuya copia obra a fojas 17-15. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el

Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

En este párrafo, observamos la falta de precisión en los datos y en el uso de ciertas palabras. En esta parte final del fundamento jurídico debe decir: no se ha logrado en el proceso que la empresa Hombrecitos haya adjuntado la fotografía cuya copia se inserta en las hojas 17 al 15, a las cartas del requerimiento de pago de la empresa recurrente; ya que, en todo caso dichas empresas demandadas hagan valer sus derechos en la vía correspondiente.

FALLO

- *Por los fundamentos expuestos, El Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere, **ha resuelto:***
- *Declarar INFUNDADA la excepción **de falta de legitimidad** para obrar del demandado.*
- ***Declarar FUNDADA la acción de amparo.***
- *Disponer que las **partes emplazadas** se abstengan de **continuar** realizando prácticas de cobranza de la deuda que atenten **contra los derechos constitucionales** y que hagan valer su derecho conforme a ley.*
- *Declarar FUNDADA la pretensión de pago de costos y costas del proceso, los que se **deben liquidar en ejecución de sentencia.***
(Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

En el fallo aparece la petitoria de la contestación y no hay precisión en reiterar quién es el demandado (Telefónica del Perú S.A.). Una cuestión accesoria es la falta de legitimidad, por tal motivo debe resaltar la cuestión principal: Declarar FUNDADA la acción de amparo que se considera como petitorio de la demanda. Cuando se refiere a las partes emplazadas debe decir: partes demandadas. Se sustituyen las palabras por palabras vagas e imprecisas como vemos que dice continuar y debe decir: seguir.

Finalmente, otra supresión es la expresión los derechos constitucionales **de la empresa recurrente.**

También observamos la supresión del artículo: liquidar (la) ejecución de (la) sentencia. De lo expuesto, podemos esquematizar el argumento de la siguiente manera:

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Protección al Derecho Constitucional al honor a la buena reputación y la imagen.
APOYO	Constitución Política del Perú artículo 200 inciso 2º Ley 2356 Código Procesal Civil
DATO	Jurisprudencia del fundamento N° 5
CONCLUSIÓN	Declarar FUNDADA la acción de amparo.

En este esquema argumental, observamos que la garantía actualiza el tópico “proteger el honor, a la buena reputación y la imagen. Esto es apoyado por los recursos existentes amparados en la Constitución Política del Perú.

SENTENCIA 2

EXP. N.º 0425–2003–AA/TC. TACNA .JAVIER LUIS MENDOZA ALEGRE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- *En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC)*

El encabezado es arcaizado (fossilizado) y proviene de los documentos judiciales antiguos. La identificación de una personificación del objeto ideal. Se asume como un espacio físico que se desarrolla en una sesión. Además, como también reconoce Alcaraz y Hughes (2002: 4), el vocabulario del español jurídico es con frecuencia altisonante, lo

que provoca en muchas ocasiones un lenguaje exagerado. Así, por ejemplo, el artículo 17 de la LEC establece: “El tribunal proveerá a esta petición ordenando la suspensión de las actuaciones y oirá **por diez días** a la otra parte”. Se trata de una frase según los autores de una frase equívoca, por lo que habría sido mejor decir “en el plazo máximo de diez días”.

Observamos que el ordinal precede al sustantivo, tendencia reiterativa en el español jurídico, pero en esta sentencia se identifica que en la Sala Segunda del Tribunal Constitucional está después del nombre. Otro detalle es el encabezado que inicia con el tiempo pretérito indefinido, pero se acepta el presente histórico por su utilización frecuente en la práctica judicial. Porto Dapena (2002:40) dice: “El presente indica simultaneidad del evento con respecto al momento del habla, pero este tiempo puede adquirir además un valor secundario de anterioridad”.

ASUNTO

- ***Recurso** extraordinario interpuesto por don Javier Luís Mendoza Alegre contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, **de fojas 404, su fecha** 16 de diciembre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo **de autos**. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC)*

El recurso extraordinario es un medio impugnatorio o recurso de agravio constitucional. En esta sentencia observamos la omisión del determinante (el) que contiene una pretensión. Otros detalles son: la fosilización de fojas, el uso del posesivo (su fecha) y la forma arcaizada e innecesaria “de autos”.

ANTECEDENTES

- ***El recurrente**, con fecha 8 de mayo de 2002, interpone acción de amparo contra la **Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna**, el Jefe de la Sección de la Policía Fiscal de Tacna y otros efectivos policiales, **por la presunta afectación de sus derechos constitucionales** a la propiedad, a la libertad de trabajo, a la*

libertad de contratación y otros, aduciendo que, con fecha 4 de mayo de 2002, fue intervenido por los demandados sin que medie orden judicial o investigación específica, siendo posteriormente detenido de manera irregular, procediéndose a la retención del vehículo de su propiedad, con placa de rodaje N.º RB-4102, por lo que solicita se le restituya la propiedad de éste. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC)

Al referirse al recurrente se evidencia una imprecisión en la anáfora, es decir, la correferencia interpone el recurso. Observamos un uso múltiple de adjetivos Segunda Fiscalía **Provincial Mixta** (conj.) de Tacna. Entre las características léxicas identificamos el caso de hiperónimos: sección, acto, expediente. El jefe (sección o dependencia) de la **Sección** (parte de un todo) de la **Policía Fiscal de Tacna** y otros efectivos policiales (concluye la enumeración de FN). Identificamos un problema de correferencia porque no dice porque se da la presunta afectación. Además, emplea una frase nominal. Existe imprecisión en la información como detallaremos a continuación: los derechos constitucionales no se precisa de quién es el derecho y la otra imprecisión es cuando se refiere a la libertad de contratación **y otros**. También enumera los derechos, pero hay una vaguedad al decir otros. Cuando dice aduciendo que (señala que el demandante ha sufrido y es quien genera la afectación) con fecha 4 de mayo de 2002 (es un adjunto). En el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra “intervenir” significa examinar y censurar las cuentas con autoridad suficiente para ello, controlar o disponer una cuenta bancaria por mandato o autorización legal. Dicho de una tercera persona. Dicho de una autoridad. Espiar por mandato o autorización legal, una comunicación privada. Fiscalizar la administración de una aduana. Dicho del gobierno de un país de régimen federal. Dicho de una o de varias potencias. Med. Hacer una operación quirúrgica. Intr. Tomar parte de un asunto. Interceder o mediar por alguien. Interponerse entre dos o más que riñen. Sobrevenir, ocurrir, acontecer. En el texto aparece el verbo en voz pasiva “fue intervenido” y el término polisémico puede generar dudas; en este caso, apunta más al significado de detenido. Ahora bien, la expresión **sin que medie** reemplaza la palabra mediar o existir, sin que exista una orden judicial. Hay una omisión del determinante (una) orden judicial o investigación específica. La palabra “posteriormente” establece una separación incorrecta entre

intervenir y detenido. Debe decir: y detenido de manera irregular. Hay una vaguedad porque no especifica si hay una orden judicial o flagrante delito. Además, utiliza los gerundios siendo y procediendo. Consideramos más acertado decir: fue intervenido y detenido. Hay un error en la utilización en las formas verbales y al encadenar los enunciados. Cuando dice: procediéndose a la retención del vehículo de su propiedad, con placa de rodaje N°RB-4102, notamos la FP que separa del núcleo y la inserción del FP “de su propiedad vehículo con placa” que es propiedad del demandante, parten de cuestiones de ordenamiento sintáctico. Otro error es cuando dice: por lo que (quién solicita) elide el que y se indica a él.. Finalmente, cuando dice se le restituya la propiedad de éste alude a la persona y crea cierta ambigüedad. Para evitar esto, es necesario determinar la propiedad sobre el objeto. Nos preguntamos cuál es el deíctico, ya que la correferencia está en el vehículo. Surge la ambigüedad porque no se sabe si detuvieron a la persona o al auto. Existe en el presente texto una estructura argumentativa deficiente y falta de congruencia entre la exposición de derechos con los hechos y consideramos que no debe basarse en supuestos porque no esclarece qué derechos se vulneraron.

- *La Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna contesta la demanda solicitando que sea declarada **infundada**, por falsa, temeraria y tendenciosa, pues su **intervención** y los actos practicados en su condición de **funcionario**, son legales y no arbitrarios. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC).*

Observamos errores en el uso de la coma después de infundada y funcionario. El hecho doloso no es explicado por un causal. Así también, su intervención (de quién) no es precisado. Además, la intervención debe ser reemplazada por la detención. Consideramos importante para evitar la imprecisión y la vaguedad porque la intervención que se refiere no sabemos si es la detención o investigación. No olvidemos que un problema de vaguedad se plantea y se resuelve como señala Pietro en el plano de la interpretación. Aspecto que veremos más adelante. Ahora bien, cuando se refiere a los actos practicados plantea una sinonimia de realizados en su condición de funcionario. Tenemos una omisión del conector por lo tanto son legales y no arbitrarios.

Finalmente, observamos que intervención es sinónimo de detención e investigación en el ámbito jurídico.

- *A fojas 164 corre el escrito de **desistimiento** de la acción de amparo presentado por el demandante, en lo que respecta al Jefe de la Sección de la Policía Fiscal de Tacna y demás efectivos policiales demandados, escrito que en sus alcances fue precisado a fojas 212 y siguientes. Dicha solicitud fue aceptada en la sentencia del Primer Juzgado Civil de Tacna. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC).*

Observamos el arcaísmo a fojas que se emplea en el ámbito jurídico, pero el error está (en hojas) plural y debe decir en la hoja 164, igualmente sucede en la hoja 212. La palabra “corre” es fosilizada del verbo correr. La ambigüedad puede evitarse al decir el cual fue precisado en sus contenidos. Cuando se refiere a dicha solicitud, surge la ambigüedad si se refiere a la demanda o al escrito.

El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 31 de julio de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante es presunto autor del delito de contrabando, razón por la cual el vehículo materia de litis fue internado en los almacenes de la Aduana de Tacna, pretendiendo el recurrente, a través del presente proceso, la devolución del vehículo que es fundamental para la investigación que se está realizando.

Al iniciar el párrafo ubica el **Primer Juzgado Civil** de Tacna como una persona jurídica (objeto ideal). Observamos que dice con fecha 31 de julio de 2002 y debe decir de fecha 31 de julio. El verbo declaró está en pretérito y ha utilizado anteriormente el presente (interpone, solicita). No es pertinente decir por considerar sino porque considera que el demandante es el presunto autor del delito de contrabando. Ahora bien, la materia de litis es una frase hecha que se refiere que el vehículo es objeto de litigio; está comprendido dentro del objeto del proceso. Además, el verbo en voz pasiva **fue internado** en los almacenes de la Aduana de Tacna hay una extensión semántica. En el Diccionario de la Real Academia Española, internado significa estado y régimen de

personas que viven internas en establecimientos diversos. Conjunto de alumnos internos. Establecimiento donde viven alumnos u otras personas internas. Condición de alumno interno de una facultad de Medicina. Al terminar el párrafo hay una cierta vaguedad cuando dice pretendiendo el recurrente, a través del presente proceso, la devolución del vehículo que es fundamental para la investigación que se está realizando. Debe decir ante lo cual el recurrente solicitó, mediante el proceso, la devolución del vehículo que es fundamental para la investigación que se está realizando. Finalmente, debe precisar qué información aportó el demandante.

- *La recurrida confirmó la apelada, aduciendo que, como se aprecia de autos, existían indicios razonables de la comisión de un delito, enmarcándose la intervención del Ministerio Público dentro de las funciones previstas en su Ley Orgánica. Asimismo, al haberse dispuesto el archivamiento de la denuncia formulada en su contra, es en dicho proceso en que debe solicitarse la devolución del vehículo incautado. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC).*

Una de las características discursivas es el uso de anáforas, de reformulaciones y de enumeraciones. En este caso observamos la anáfora la recurrida que en el ámbito jurídico se refiere a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna. Identificamos una vaguedad cuando dice: confirmó la apelada la imprecisión es notoria porque debe indicar el acto previo a la interposición de la sentencia del Primer Juzgado Civil de Tacna. El uso del hiperónimo autos implica la observación no la apreciación subjetiva. Debe decir como se observa en el proceso. Ahora bien, una característica léxica es la nominalización cuando dice existían indicios razonables de la comisión de un delito (nominalización: cometer un delito). Cuando dice: enmarcándose la intervención del Ministerio Público dentro de las funciones previstas en su Ley Orgánica quiere decir que justifica las ideas, por lo que esta señala que la intervención del Ministerio Público se realizó dentro de las funciones previstas en su Ley orgánica y que, por lo tanto, dicha intervención es perfectamente legal. Al utilizar el adverbio asimismo indica que la Sala Civil señaló que el demandante debe solicitar la devolución de su vehículo que fue incautado por la autoridad fiscal, dentro del proceso penal

seguido en su contra por el delito de contrabando, en el cual se dispuso el archivamiento de la denuncia. No se sabe si el juez archivó la sentencia y además, el párrafo omite información.

FUNDAMENTOS

- *La presunta afectación del derecho de propiedad del demandante, sobre el vehículo de placa de rodaje N.º RB-4102, se produjo a partir de la investigación policial seguida en su **contra**, por la presunta comisión del delito de contrabando. **Cabe señalar** que el derecho de propiedad alegado está protegido tanto por el inciso 16) del artículo 2º de la **Constitución**, como por el artículo 70º. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 045-2003-AA/TC)*

El dato es la presunta afectación del derecho de propiedad del demandante. Luego se explica si se vulneró y lo hace a partir de la coma después de la palabra **contra**. Ubicamos al demandante correferencia al narrar el hecho por la presunta comisión del delito de contrabando. Cabe señalar sirve de apoyo para unir los enunciados. La omisión de Política (Constitución Política).

- *De la revisión de autos se acredita que la **inmovilización** del vehículo se encuentra plenamente justificada, dado que **en torno a dicho bien** gira la investigación fiscal y judicial iniciada contra el accionante, por la presunta comisión del delito de contrabando. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. Nº 045-2003-AA/TC)*

Al inicio del párrafo se observa el hiperónimo: autos. Observamos el reemplazo de incautación por inmovilización. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la inmovilización significa acción y efecto de inmovilizar o inmovilizarse. Ahora bien, la palabra inmovilizar significa hacer que algo quede inmóvil. Com. Invertir un caudal en bienes de lenta o difícil realización. Der. Coartar la libre enajenación de bienes. Si bien, la palabra incautación significa acción y efecto de incautarse. Esta última palabra significa prnl. Dicho de una autoridad judicial o administrativa: Privar a alguien de

alguno de sus bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o infracción administrativa. Cuando hay condena firme se sustituye por la pena accesoria de comiso. En el ámbito jurídico se utiliza como un sinónimo relativo inmovilización en vez de incautación. Observamos que da razón a la fiscalía al señalar que se encuentra plenamente justificada. El conector **dado que** permite la transición de la unidad introductoria del tema a la unidad que lo especifica cuando dice que (dicho bien: vehículo) se encuentra en investigación por la presunta comisión del delito del contrabando. Ahora bien, cuando dice la investigación fiscal y judicial iniciada contra el accionante hay una imprecisión porque es importante saber en qué aspectos se encontraba comprendida para poder tipificar la falta o delito cometido.

- *La inmovilización o incautación del vehículo, aunque importa una restricción del derecho de propiedad alegado, no constituye una afectación irrazonable o arbitraria, sino que está sustentada en los hechos **vinculados con la investigación precitada, con el objeto de verificar** los datos correspondientes a las piezas principales del vehículo —**el número de serie del motor y chasis**—, y para determinar si el vehículo fue ingresado **por partes, puesto que** existían indicios razonables de ello (documentos de fojas 63 y 84 y siguientes), **así como el año** en que supuestamente fue fabricado, puesto que se declaró el año 1994, cuando se presumía que el año correcto es 1991. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC).*

La inmovilización e incautación son vistas nuevamente como sinónimos. Ahora bien, el derecho de propiedad alegado quiere decir invocado. La aparición de la coma después de precipitada se refiere a que los hechos vinculados con la investigación precitada se relacionan con los datos correspondientes a las piezas del vehículo. En el párrafo se observa la omisión del determinante (el) chasis. Se puede suprimir la preposición para (y para determinar). Observamos que cuando se refiere a que el vehículo por partes es importante señalar que fue de manera separada. Además, debe decir el ingreso ilegal del vehículo en partes a fin dar mayor precisión a los datos expuestos. Reitera el arcaísmo de fojas 63 y 64 que debe decir de fojas 63 y 64.

Finalmente, identificamos rasgos de imprecisión y vaguedad en los datos porque se había declarado que el vehículo supuestamente había sido fabricado en 1994, cuando, en realidad, se presumía que el año correcto era 1991.

- ***De otro lado**, si bien es cierto que el proceso penal seguido en contra del demandante ha quedado archivado, conforme lo expone el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público en su escrito **de** fecha 2 de abril de 2003 (cuadernillo del Tribunal Constitucional), **lo cual**, a tenor de lo previsto en el artículo 221° del Código Procesal Civil, **constituye una declaración asimilada**, también lo es que en dicho proceso es en donde debe solicitarse la devolución del bien incautado, no habiéndose acreditado en autos que **el demandante** hubiese solicitado su devolución con anterioridad a la fecha de expedición de la presente sentencia. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC).*

Inicia el párrafo con un marcador de continuidad **de otro lado**, pero hay una falta de precisión porque no indica el proceso penal por el delito de contrabando. Hay un gusto por lo altisonante y arcaizante por ejemplo, cuando se dice por cinco días. En este caso dice de fecha 2 de abril y debe decir con fecha. La imprecisión de información crea confusión. Sugerimos agregar al fundamento lo siguiente: teniendo en cuenta que dicha declaración del procurador público constituye una declaración asimilada según lo previsto en el Art. 221 del Código de Procesal Civil; en consecuencia, es evidente que el demandante debió solicitar la devolución del vehículo que fue incautado dentro de dicho proceso penal, lo que no ha ocurrido debido a que no se ha acreditado en el proceso que el demandante haya solicitado la devolución con anterioridad a la fecha de emisión de la presente sentencia. Observamos que el marcador lo cual es un apoyo discursivo. Observamos sustantivos derivados de las formas no personales del verbo como el demandante y el acusado.

- *Finalmente, **tampoco escapa a este Colegiado** que, con fecha 7 de febrero de 2003, se denunció penalmente al demandante por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de*

documento público falso, respecto de los hechos derivados justamente de la determinación del año de fabricación del vehículo incautado, proceso éste que podría tener incidencia en la devolución de dicho bien. En consecuencia, al no acreditarse la afectación de derecho alguno, la demanda debe ser desestimada. Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC)

Utiliza una marca de estructuración oracional de tipo temporal (finalmente) que viene a ser un adverbio de cierre. La frase hecha “tampoco escapa a este Colegiado” debe ser reemplazada por este Tribunal donde se identifica el deíctico (este). Además, observamos que es reiterativo denunció penalmente ante penalmente al demandante (alude a la denuncia penal) por la presunta Comisión del Delito contra la Fe Pública (denominación) y van sin comas. Otra característica es la omisión del determinante (el documento). Hay una falta de coherencia debido a que el demandante habría declarado una falsedad respecto al año de fabricación del vehículo incautado en el documento que presentó a la autoridad; por lo que este colegiado considera que se deberá tener en cuenta esta denuncia penal por el delito contra la fe pública al momento en que se decida si procede o no la devolución del vehículo a favor del demandante.

Emplea el conector que expresa conclusión (en consecuencia) lo que nos permite identificar que no explica cómo se debe desestimar la demanda. Lo pertinente sería decir en consecuencia, no se ha acreditado que la demanda (Fiscalía) haya afectado el derecho constitucional de propiedad del demandante, toda vez que no ha habido ningún acto de despojo indebido de la propiedad sobre el vehículo, sino mas bien un acto perfectamente regular de incautación del bien para los efectos de la investigación fiscal y judicial, por lo que la demanda debe ser desestimada.

FALLA

- **REVOCANDO** la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara **INFUNDADA**.
Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la

devolución de los actuados. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 0425–2003–AA/TC.

En la parte dispositiva, es decir, en el fallo emplea la palabra revocando que significa dejar sin efecto algo. Observamos que los sustantivos derivados de los verbos especialmente de participios : la recurrida que quiere decir la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Tacna que confirmó la sentencia emitida por el primer Juzgado Civil de Tacna que había declarado improcedente la demanda. Emplea de manera inapropiada el gerundio (confirmando).

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la libertad, propiedad, al trabajo y a la libertad de contratación.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2) de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.
DATO	Que no se ha afectado ningún derecho constitucional invocado por el demandante al no haberse acreditado dentro del proceso de amparo.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda de amparo al no haberse afectado ni vulnerado ningún derecho constitucional.

SENTENCIA 3

EXP. N° 2700-2006-PHC/TC .LIMA.VÍCTOR ALFREDO POLAY CAMPOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- *En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli y, **pronuncia** la siguiente sentencia. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)*

El español jurídico emplea frases arcaizantes para señalar la fecha. La elisión del verbo está y en su reemplazo utiliza una coma. Reitera la personificación del objeto ideal al referirse a la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Observamos que el verbo pronuncia está en presente de modo indicativo. Se puede omitir la conjunción copulativa (y).

I. ASUNTO

- ***Recurso de agravio constitucional** interpuesto por **don** Víctor Alfredo Polay Campos, contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, **de fojas 352, su fecha 29 de diciembre de 2005, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.** (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC).*

La omisión del determinante al iniciar el asunto. Observamos el uso del tratamiento de respeto don Víctor. El arcaísmo de fojas 352 es recurrente en el léxico jurídico. El uso del posesivo (su) fecha es reiterado. Debe decir con fecha 29 de diciembre de 2005. En el asunto, el verbo compuesto está en pretérito y hay cambios de los tiempos verbales. Ahora bien, si se declara infundada la demanda de hábeas corpus de autos puede omitirse “de autos” porque la demanda busca proteger la libertad individual.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

- *Con fecha 17 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Presidente del Comité Técnico del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao y el Jefe del Centro de Reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, por la presunta vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica; y a la resocialización, reeducación y rehabilitación como fines de la pena. En consecuencia, solicita que se disponga su traslado a un penal de máxima seguridad para civiles, que se encuentre a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPE). (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)*

El inicio de la demanda debe ir en el sintagma verbal, pero es un efecto del tópico seguido por enumeraciones. Es recomendable no cortar el antecedente con un punto tal vez puede utilizar un conector copulativo a fin de enlazar las dos ideas (en consecuencia).

La demanda se fundamenta en los siguientes argumentos:

- *El accionante se encuentra en un centro de reclusión militar pese a haber sido condenado, en un primer momento, por el supuesto delito de terrorismo en el fuero común. Asimismo, señala que, si bien en la actualidad su proceso se encuentra en trámite, su permanencia en la Base Naval vulnera el principio de igualdad de armas en el proceso, puesto que deberá responder en juicio por los enfrentamientos ocurridos entre la Marina de Guerra del Perú y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante MRTA).*

El sustantivo derivado de la forma no personal del verbo como el accionante que se refiere al demandante. Es una forma anafórica de señalar al Víctor Polay. El empleo de un marcador concesivo pese a señala un impedimento que puede ser superado. Este tema de marcadores del discurso lo trataremos más adelante. En el léxico jurídico el léxico común se refiere a un ámbito a una jurisdicción común. Además, indica el empleo de términos anafóricos al referirse al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

- *Finalmente, señala que lleva trece años recluido, sin condena, siendo privado de sus derechos a la libertad de culto, a ser asistido por un consejero espiritual, a la educación, a la libertad de creación intelectual, a la información, a la libertad de expresión y a los beneficios penitenciarios. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)*

Observamos la supresión del accionante en el párrafo que nos indicarían las condiciones de su reclusión y los años que lleva recluido. Además, en el antecedente los datos son imprecisos, debe decir sin haber sido condenado y habiéndosele privado de sus derechos. Una característica discursiva son los procedimientos de enumeración.

2. Investigación sumaria de hábeas corpus

- *Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria del demandante, quien se ratifica en el contenido de su demanda (fojas 18 a 22). Por su parte, los demandados coinciden en señalar que el tratamiento de los internos del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao está a cargo del INPE y que el demandante ha sido recluido en dicho establecimiento, junto a otros civiles, por ser considerado un reo “de alta peligrosidad”. Asimismo, niegan que esté siendo víctima de **algún tipo de afectación** a su integridad física o psicológica, más aún si el régimen de reclusión impuesto al recurrente se ha ido flexibilizando gradualmente. Finalmente, descartan la necesidad de que sea trasladado a otro establecimiento penitenciario puesto que el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao está adecuadamente preparado para prevenir cualquier tipo de enfrentamiento entre*

*los integrantes del MRTA y Sendero Luminoso (fojas 32 a 40, 193 a 206 y 213 a 214) .Asimismo, con fecha 27 de setiembre de 2005, la **Juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima** se dirigió a los ambientes del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de constatación de la celda en que permanece recluso el demandante (fojas 170). Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC.*

Hay una omisión en el párrafo el cual debe indicar que los demandados niegan que el demandante esté siendo víctima de algún tipo de afectación. Observamos el arcaísmo de fojas que debe decir: hojas. Observamos el empleo de unidades sintagmáticas: sustantivo + de + sustantivo (tipo de afectación, régimen de reclusión), sustantivo + sustantivo (establecimiento penitenciario), sustantivo + de + numeral + numeral + sustantivo + adjetivo + de + sustantivo (la juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima). Falta una mayor información de datos en este párrafo.

3. Resolución de primer grado

- *Con fecha 27 de octubre de 2005, el **Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima** declara infundada la demanda en el extremo en que alega la vulneración de los **derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la socialización y a la rehabilitación**. Asimismo, **declara fundada la demanda en el extremo relativo al INPE**, disponiendo que una vez culminado el proceso judicial se efectúe una clasificación y se traslade al demandante, de ser el caso, a otro establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Finalmente, declara improcedente la demanda respecto de aquellos emplazados que, a la fecha, no se encuentran ejerciendo el cargo por el cual fueron demandados. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC).*

Observamos el múltiple uso de adjetivos el Cuadragésimo Sexto **Juzgado Penal** de la Corte Superior de Justicia de Lima. La nominalización de verbos –ción, -miento: la vulneración, la acusación, el procedimiento, el tratamiento. La omisión de datos es recurrente cuando dice: “Declara fundada la demanda en el extremo relativo al INPE”,

(pedido de traslado). Además, cuando dice a la fecha, hay ausencia de información. El término improcedente en el Diccionario de la Real Academia Española (2005:851) significa adj. no conforme a derecho. Inadecuado, extemporáneo. En el ámbito jurídico significa anular la demanda teniendo en cuenta esta sentencia. También debe anotarse la falta de congruencia porque debe ser resuelto en autos y luego se pasa a la sentencia. La secuencia enumerativa no es suficiente para tener una clara resolución. Sugerimos reemplazar asimismo por sin embargo para dar mayor fuerza argumentativa. Cuando dice a la fecha, debe indicar la fecha en que se interpuso la demanda. El verbo debe estar en pretérito (plural): no se encontraban ejerciendo el cargo por el cual fueron demandados.

4. Resolución de segundo grado

- *Con fecha 29 de diciembre de 2005, la **Primera Sala Especializada** en lo Penal para Procesos de Reos en Cárcel, declaró infundada la demanda por considerar que no se ha acreditado al existencia de una efectiva **vulneración** a los derechos fundamentales invocados en la demanda, más aún si las actuaciones de los demandados se han ajustado a las normas reglamentarias que regulan la materia. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)*

Las unidades sintagmáticas numeral+sustantivo+adjetivo (Primera Sala Especializada). Observamos la formación de nominalizaciones -ción a partir del verbo: vulneración. Según Alcaraz y Hughes (2002:5), la redundancia expresiva léxica consiste en precisar el significado de una palabra haciéndola acompañar de otra cuyo sentido sea muy aproximado. En este párrafo, observamos el siguiente ejemplo: que las normas reglamentarias que regulan la materia.

III. FUNDAMENTOS

Precisión del petitorio de la demanda

- *Del análisis integral de lo actuado se desprende que **el demandante** pretende que el **Tribunal Constitucional** ordene su traslado a un penal de máxima seguridad para civiles y que esté a cargo del INPE. Considera que,*

al estar recluido en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (en adelante, CEREC), se afectan sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica; y a la resocialización, reeducación y rehabilitación como fines de la pena. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC).

Cuando se refiere al Tribunal Constitucional, alude a la personificación del objeto ideal. La falta de cohesión repercutirá en la decisión del juez. Por ejemplo, no se exponen los principales derechos que son afectados por tanto, no hay una correspondencia con el análisis integral de lo actuado.

Análisis constitucional del caso concreto

- *Previamente a resolver la cuestión de fondo, el Tribunal Constitucional estima pertinente señalar que el proceso constitucional de **hábeas corpus** no sólo protege la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende a otros derechos fundamentales. En efecto, su tutela comprende también la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan reclusas en establecimientos penales e incluso de personas que, bajo una especial relación de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC).*

El Tribunal Constitucional está personificado en el objeto ideal. Observamos la incorporación de la frase latina al Diccionario de la Lengua Española (2005:800), *hábeas corpus* (latín *habeas corpus* que tengas tu cuerpo (para exponer), primeras palabras del auto de comparecencia. Der. Derecho del ciudadano detenido o preso a comparecer inmediata y públicamente ante un juez o tribunal para que, oyéndolo, resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe alzarse o mantenerse. Es término del derecho de Inglaterra que se ha generalizado. Otro elemento característico del lenguaje jurídico es la fórmula fosilizada: a resolver la cuestión de fondo. Observamos la falta de

precisión que denota la palabra sujeción. Según el Diccionario de la Lengua Española (2005), la palabra sujeción significa acción de sujetar. Unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Ret. Figura que consiste en hacer el orador o el escritor preguntas o que él mismo responda. Anticipación o prolepsis, especialmente cuando se hace en forma de pregunta y respuesta. En el lenguaje jurídico, sujeción es una frase hecha: relación de sujeción, la interpretación operativa es la siguiente: vinculación que tiene el interno con la administración penitenciaria a través de un régimen especial.

- *Por ello, es legítimo que ante **la afectación** de tales derechos fundamentales o de aquellos derechos directamente conexos al de la libertad personal o ante **la lesión de derechos** diferentes al de la libertad, cuya **afectación** se genere como consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual, puedan ser protegidos a través del proceso de hábeas corpus, que la tipología elaborada por la doctrina ha denominado como **hábeas corpus** correctivo. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC).*

La recurrencia de la palabra afectación aparece a lo largo de esta sentencia. El DRAE (2005:36) registra la palabra afectación, acción de afectar. Falta de sencillez y naturalidad. Extravagancia presuntuosa en la manera de ser, de hablar, de actuar, de escribir, etc.

- El acto de afectación es un acto jurídico.

En este enunciado afectación produce un efecto jurídico, es decir, la persona que causa algún daño está obligado a reparar por mandato de la ley.

- Las cuestiones de interpretación se plantean en relación **con afectación** de bienes jurídicos.
- Por ello, es legítimo que **ante la afectación** de tales derechos fundamentales.

En este segundo enunciado se interpreta la norma aplicable al caso concreto en el caso de afectación de un bien. En el tercer enunciado es la vulneración de un derecho fundamental.

La palabra lesión, según el Diccionario de la Real Academia Española (2005:926) , significa daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad. Daño o perjuicio. Der. Daño que se causa en las ventas por no hacerlas en su justo precio. Der. Perjuicio sufrido con ocasión de otros contratos. pl. Der. Delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien. Veamos los siguientes ejemplos:

- Concreción y lesión de los bienes jurídicos.
- La lesión de derechos diferentes al de la libertad.
- Según el parte médico, el demandante sufrió una lesión grave.

Desde el ámbito jurídico en el Código Penal se amplía el campo léxico de lesión y aún más en la medicina legal. El último ejemplo se considera en la interpretación práctica jurídica que ocasionar un daño corresponde a los bienes y una lesión (leve o grave) atañe a la persona. Ahora bien, un daño se considera un delito de lesión si requiere atención médica por una incapacidad física (diez días). Es ambigua desde la legislación legal por lo que se hace necesario interpretarlo en un contexto jurídico y con el Código Penal. La lesión, en materia penal, será una falta cuando genera una incapacidad física de una persona no más de diez días según prescripción médica y será un delito cuando supere los diez días, cuando se cause la lesión con intención.

*Ahora bien, una primera cuestión que el demandante considera que atenta contra sus derechos fundamentales invocados está relacionada con el carácter –civil o militar– del establecimiento penitenciario en el cual se encuentra. Según afirma, está recluso en **un establecimiento penitenciario militar**, siendo que el sistema penitenciario debe estar bajo el control civil y no militar. El Tribunal Constitucional no comparte esta afirmación del demandante. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)*

Observamos la ampliación de significados dentro del lenguaje jurídico. En el Diccionario de la Real Academia Española, afectación significa acción de afectar. Falta de sencillez y naturalidad. Extravagancia presuntuosa en la manera de ser, de hablar, de actuar, etc. Desde la interpretación jurídica operativa del lenguaje jurídico significa daño. La redundancia léxica es un enfatizador de la fuerza argumentativa. La palabra lesión pasa de un campo léxico común al campo léxico jurídico. La frase hecha lesión de derecho significa dentro de la interpretación operativa del lenguaje jurídico que afecta a los derechos de la persona.

- (...) *el principio del régimen penitenciario tiene por objeto reeducar, rehabilitar y reincorporar al **penado** a la sociedad, recibir asistencia religiosa como un medio penitenciario y como un fin en sí mismo de **resocialización** a través de la fe, no constituye una violación constitucional a los valores del orden público y a la seguridad ciudadana. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)*

El uso del sustantivo derivado de la forma no personal del verbo a partir del empleo de participios: el acusado, el penado. Esta última palabra, en el Diccionario de la Real Academia Española (2005:1166), significa penoso, lleno de penas. Difícil, trabajoso. Se dice de una especie de vasija de vasija usada antiguamente en España para beber, la cual se hacía muy estrecha de boca a fin de que fuese dando en corta cantidad la bebida. Delincuente condenado a una pena. Este último significado coincide con la entrada que aparece en el Diccionario Jurídico Elemental (2002: 300) en significados generales, lleno de penas o desventuras. Dificultoso. Delincuente condenado por sentencia firme a una pena; recluso internado en un establecimiento penitenciario. El vocablo se refiere, por antonomasia, a quienes cumplen una pena privativa de libertad. Es frecuente la aparición de la palabra resocialización en las sentencias en el repertorio del lenguaje jurídico.

- *Dicho esto, es evidente que la persona que se encuentra **internada** – **procesada** o **sentenciada** - en un establecimiento penitenciario no puede ser impedida, **prima facie**, de ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa; siempre que de ello no deriven **afectaciones** a los derechos*

*fundamentales de los demás o no impliquen actos de intolerancia que pongan en riesgo otros **bienes constitucionales** como el orden público, la moral, la seguridad de la población, bienes que, según el artículo 44º de la Constitución le corresponde también proteger al Estado. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC).*

Como vemos, “internada”, “procesada”, “sentenciada” en el párrafo se refiere a sustantivos derivados de las formas no personales del verbo, especialmente de participios, que pertenecen a la interpretación práctica jurídica. Estos inicialmente son sustantivos que se adjetivan en los textos jurídicos. En el diccionario jurídico (2002: 322), el procesado es aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento por las pruebas e indicios existentes o supuestos contra él; y que, como presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo deberá resolver, de no declararlo culpable e imponerle la pena correspondiente.

En el Diccionario de la Real Academia Española no está registrada la palabra procesada. En cambio, aparece la palabra internada en el ámbito futbolístico como el jugador de avance rápido hacia el área contraria. El adjetivo “procesada” aparece en el Diccionario de la Real Academia Española (2005: 1247) se dice del escrito y letra del proceso. Dicho de una persona: que ha sido objeto de procesamiento. En el lenguaje jurídico significa la persona que se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario por orden de una resolución judicial. La persona procesada es aquella que está sometida a un juicio penal específicamente y la persona sentenciada es aquella que ha recibido una condena dentro de un proceso penal. La frase latina *prima facie* significa aparentemente, en principio. Apariencia de un derecho sin perjudicar el resultado.

- *En efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el **aseguramiento** de determinadas instituciones jurídicas y no **engendran derechos fundamentales a favor de las personas**. (...) Por otro lado, no cabe duda que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su **denegación, revocación o***

restricción del acceso a los mismos, debe obedecer a motivos objetivos y razonables. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)

En el Diccionario de la Real Academia Española (2005: 152), aseguramiento significa acción y efecto de asegurar. Seguro (salvoconducto). Der. Medidas provisionales adoptadas por el juez para conservar los bienes objeto de un proceso durante la duración de este. Veamos los siguientes ejemplos:

- Dictan medidas de aseguramiento contra la Corporación Chilena Vida.
- Debatirán el sistema de aseguramiento de las responsabilidades empresariales.

En el lenguaje jurídico se tiene que precisar en el contexto si se refiere al aseguramiento de la prueba o el aseguramiento de bienes litigiosos. Las acepciones en el DRAE no presentan contextos aclaratorios porque su campo de realización va desde previsión y conservación.

*En ese sentido, la visita íntima en nuestro ordenamiento jurídico-penitenciario y tal como dispone el artículo 58° del Código de Ejecución Penal es un beneficio penitenciario que “tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su **cónyuge o concubino**”. Su concesión, como todo beneficio penitenciario, está sujeto no sólo al cumplimiento de determinados requisitos previstos en el artículo 195° **in fine** del Reglamento del Código de Ejecución Penal, sino también a la valoración positiva que en este caso le corresponde analizar y resolver al Comité Técnico, tal como dispone el artículo 22° del Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS y no al Tribunal Constitucional. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2700-2006-PHC/TC)*

Como vemos, el uso de nombres genéricos a partir de una inclusión en un campo de parentesco: cónyuge, concubino. La utilización de un aforismo latino in fine que significa que lo citado se localiza al final de un artículo del Reglamento del Código de Ejecución Penal.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la vida a la dignidad a la integridad física y psicológica que se considera como derechos constitucionales conexos deben ser protegidos.
APOYO	Proceso de hábeas corpus previsto en el artículo 200 inciso 1° de la Constitución Política del Perú y el artículo 25 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.
DATO	La sentencia expedida ha determinado que sólo se ha afectado el derecho a la libertad religiosa al no recibir asistencia espiritual de un sacerdote.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda en lo referido al traslado del interno a otro establecimiento penitenciario y respaldar el respecto a la libertad religiosa del mismo, ordenando que el interno reciba la visita de un sacerdote católico.

SENTENCIA 4

EXP. N.º 2655-2002-AA/TC. LIMA. LUIS AUGUSTO SALA HERRERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

- *En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N°2655-2002-AA/TC).*

La personificación de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional como objeto ideal. El verbo está en presente y en 3º persona.

ASUNTO

- *Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Augusto Sala Herrera contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia*

de Lima, de fojas 274, su fecha 15 de agosto de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N°2655-2002-AA/TC)

Observamos la supresión del determinante (el) en la frase “recurso extraordinario” y la constitución de la unidad sintagmática sustantivo+adjetivo. Reitera en todas las sentencias la fosilización (de fojas 274) y su pluralización. El uso reiterado del posesivo (su) fecha y debe decir: con fecha.

En esta edición del DRAE (2005:169) se ha incorporado muchas acepciones polisémicas de la entrada léxica auto, pero sin ilustrar el sentido preciso de la acepción en el ámbito del derecho. La frecuente utilización de sintagmas en la constitución de unidades preposicionales: la acción de amparo de autos.

1. Auto. m. composición dramática de breves dimensiones y en la que, por lo común, intervienen personales bíblicos o alegóricos. 2. Der. Forma de resolución judicial, fundada, que decide cuestiones secundarias, previas, incidentales o de ejecución, para las que no se requiere sentencia. 3. desus. Escritura o documento. 4. ant. Acto o hecho. 5. pl. Der. Conjunto de actuaciones o piezas de un procedimiento judicial. ~ acordado. m. Der. Determinación que, en el antiguo derecho, tomaba por punto general algún consejo o tribunal supremo con asistencia de todas las salas. ~ de fe. m. Castigo público de los penitenciarios por el Tribunal de la Inquisición. . ~ definitivo. m. Der. El que impide la continuación del pleito o deja resuelta alguna de las cuestiones litigiosas, aunque sea dictado incidentalmente. . ~ interlocutorio. m. Der. El que decide asunto del procedimiento durante el juicio.

En el Diccionario Jurídico (2002: 47) no solamente, es sinónimo de expediente sino también de decreto judicial siendo acordado, apelable, de prisión, de procesamiento, de definitivo, etc. Veamos los siguientes ejemplos:

- La declara improcedente en todos sus extremos, por considerar que de los documentos que obran **en autos** no se acredita la disminución en el monto de la pensión del recurrente.

- Del estudio **de autos** se ha podido acreditar que la pretensión de fondo invocada por el demandante.
- Que, conforme se aprecia **de los autos**, frente a la Resolución 3456.

El último ejemplo evidencia la relación parasinónima autos y expediente. Implica una frase preposicional a fin de precisar la sucesión de posesión o pertenencia. Por ejemplo, cuando dice obran en autos significa que aparece en el expediente.

ANTECEDENTES

- **El recurrente** interpone demanda de amparo contra Petróleos del Perú, con objeto de que se le restituyan las pensiones renovables de la que venía gozando y, específicamente, el íntegro de los montos que percibía hasta el 30 de diciembre de 1995, y que a partir de esa fecha se le pague el íntegro de dichas pensiones, sin recorte alguno, así como los devengados e intereses legales.

Como vemos, el uso reiterado de recurrente alude a la persona que interpuso **el recurso**. La acción de recurrir ante el juez conlleva a presentar un recurso (demanda o petición) por consiguiente, en el lenguaje jurídico surgen temas derivativos generados a partir de esta acción legal (recurso, recurrido, recurrible y recurrente).

- *La **emplazada** propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del **demandado**, de falta de agotamiento de la vía administrativa, y de prescripción extintiva, y niega y contradice la demanda en todos sus extremos la demanda, alegando que el demandante no ha acreditado la violación de derecho constitucional alguno, porque de los propios medios probatorios se aprecia que se le está pagando su pensión mensualmente y sin retraso alguno, y tampoco la fijación de topes a su pensión, agregando que el pago de los reintegros no es posible a través de esta vía por carecer de etapa probatoria, y que todo reajuste debe efectuarse de acuerdo con las previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N° 2655-2002-AA/TC).*

Observamos que la palabra emplazada proviene de emplazamiento o citación, un tipo de requerimiento para comparecer ante el juez. Veamos los siguientes ejemplos:

- La emplazada propone las excepciones de falta de legitimidad.
- La juez emplazada contesta la demanda.
- La emplazada contesta la demanda.
- Resuelvo: emplazar a todas las personas jurídicas.

Una característica que hemos identificado anteriormente es el uso de sustantivos y adjetivos derivados de formas no personales del verbo emplazar. Según DRAE (2005:602) tr. Dar a alguien un tiempo determinado para la ejecución de algo. 2. Citar a alguien en determinado tiempo a algo. 4. Der. Citar al demandado con señalamiento del plazo dentro del cual necesitará comparecer en el juicio para ejercitar en él sus defensas, excepciones o reconvenções. Se puede deducir que existe un emplazador (hombre que emplaza) y la emplazada (la persona que recibe la acción de emplazar). Esta última palabra no está registrada en la DRAE, pero es utilizada en el lenguaje jurídico con frecuencia.

- *El Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de enero del 2002, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada, en parte, la demanda, ordenando que la demandada abone la pensión del recurrente sin tope, con el pago de los reintegros correspondientes, e improcedente el pago de intereses. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N°2655-2002-AA/TC).*

Identificamos el uso constante de unidades sintagmáticas múltiples: el Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado. (numeral + numeral + sustantivo + adjetivo). En la lengua jurídica la forma no personal del verbo demandar genera sustantivo y adjetivos que se reparten en un área semántica. Veamos los siguientes ejemplos:

- La pretensión de fondo invocada por el demandante.

- El demandante goza de pensión nivelable.
- La demandada abona la pensión del recurrente.
- Se declara fundada la demanda.
- El juez demanda la conciliación de las partes.

Observamos que el lenguaje jurídico tiende a pasar del verbo demandar a alguien algo. Como vemos, DRAE (2005:503) 4. Der. Entablar demanda. Surge la simplificación del sistema léxico demandanza (demanda, acción o derecho) que se indica en la DRAE en desuso. Otras formas registradas son: demandado, demandador y demandar. En el ámbito jurídico es una palabra polisémica que necesita delimitarse en un contexto para determinar e identificar el tipo de demanda. Si bien, esta palabra significa como señala la DRAE 9. Der. Petición que el litigante que inicia un proceso formula y justifica en el juicio. 10. Der. Escrito en que se ejercitan en juicio una o varias acciones ante el juez o el tribunal competente.

- *La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundadas las excepciones propuestas, y revoca el extremo que declara fundada la demanda, y, reformándola, la declara improcedente en todos sus extremos, por considerar que de los documentos que obran en autos no se acredita la disminución en el monto de la pensión del recurrente. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N°2655-2002-AA/TC).*

El sustantivo la recurrida deriva de la forma no personal del verbo recurrir. En la edición de la DRAE (2005: 1303) se tiene diversas acepciones a partir de la acción que concede la ley tanto de amparo, de apelación, de casación, de nulidad, de queja, de revisión entre otras. Recurrir significa acudir a un juez o autoridad con una demanda o petición. 4. Der. Entablar recurso contra una resolución. Esto da como resultado términos derivados como recurrente, recurrible, recurrido y recurso. Veamos lo que registra el DRAE recurrir como una acción que genera un tipo de respuesta.

Recurso. Acción y efecto de recurrir. 2. Medio de cualquier clase que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. 4. Memorial, solicitud, petición por

escrito. 5. Der. En un juicio o en otro procedimiento, acción que concede la ley al interesado para reclamar contra resoluciones, ora ante la autoridad que las dictó, ora ante alguna otra. 8. Expedientes, arbitrios para salir airoso de una empresa.

Finalmente, el recurso parte de una acción que concede la ley para realizar algún reclamo. Por ejemplo, el demandante presentó un recurso de amparo ante el fallo del Tribunal Constitucional.

FALLA

- *CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando, en parte, la apelada, declaró infundadas las excepciones propuestas y, revocándola, declaró IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para hacer valer su pretensión con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional expediente N°2655-2002-AA/TC).*

Cumple la función de sustantivo o adjetivo calificativo a partir de la forma no personal del verbo apelar.

El DRAE (2005:120-121) registra lo siguiente:

Apelar. Intr. Recurrir a alguien o algo en cuya autoridad, criterio o predisposición se confía para dirimir, resolver o favorecer una cuestión. 2. Der. Recurrir al juez o tribunal superior para que se revoque, enmiende o anule la sentencia que se supone injustamente dada por el inferior.

Apelado, da. Adj. Der. Dicho de un litigante: Que ha obtenido sentencia favorable contra la cual se apela.

Analicemos los siguientes ejemplos:

- El litigante favorecido por la sentencia **apelada**. (adj.)
- La **apelada** declaró infundadas las excepciones propuestas.(sust.)

La apelada o el apelado es el litigante favorecido por la sentencia. Se derivan palabras como apelación (acción de apelar), apelado (litigante vencedor) y apelante (el

que interpone la apelación). En el DRAE no figura el sustantivo apelado (a) solo el adjetivo a diferencia de la palabra demandado que es registrado en el diccionario. En el ámbito jurídico definen la apelada como la sentencia que ha sido impugnada mediante un determinado recurso.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	El derecho a la pensión bajo Régimen D.L. 20530
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2º de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 inciso 20 del Código Procesal Constitucional.
DATO	Que no se ha afectado el derecho a la pensión del recurrente que viene percibiendo con los incrementos en su monto.
CONCLUSIÓN	Declarar IMPROCEDENTE la demanda dejando a salvo el derecho del recurrente para hacer valer su pretensión con arreglo a ley..

Consideramos importante activar ciertos mecanismos para lograr la coherencia y cohesión del texto. Una de estos mecanismos es la recurrencia. Bernárdez (1982:102) señala: “Llamaremos repetición a la reaparición o recurrencia de un elemento del texto en el mismo texto”. Veamos el siguiente ejemplo:

El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 31 de julio de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante es presunto autor del delito de contrabando, razón por la cual el vehículo materia de litis fue internado en los almacenes de la Aduana de Tacna, pretendiendo el recurrente, a través del presente proceso, la devolución del vehículo que es fundamental para la investigación que se está realizando. (Exp. N° 835-2002-AA/TC)

La palabra litis se emplea como sinónimo de litigio o proceso judicial. Observamos que es un tipo de recurrencia léxica sinonímica. También podemos notar la

repetición léxica propiamente dicha que se da a través de una relación semántica: demanda, demandante y demandado.

Díaz (1999:34) “Se denomina sustitución léxica a la operación de sustituir o reemplazar algún elemento del texto por otro con el que se alude al mismo contenido referencial”.

La anáfora aparece cuando unas de las palabras remiten a otras que fueron mencionadas con anterioridad. Díaz señala que existen diversas referencias anafóricas: pronombres, formas correferenciales, sinónimos y expresiones adverbiales. Es un tipo de referencia endofórica y la anáfora aparece cuando unas palabras remiten a otras que fueron mencionadas con anterioridad.

A continuación tenemos el siguiente ejemplo:

La segunda cuestión que el demandante considera lesivo de sus derechos fundamentales lo que, al estar recluso conjuntamente con los miembros de Sendero Luminoso, no se le permite que se desarrolle como persona, dadas las profundas diferencias políticas e ideológicas que existen con aquellos. (Exp. N° 2700-2006-PHC/TC)

En el ejemplo, aquello hace referencia a los miembros de Sendero Luminoso.

El segundo tipo de referencia endofórica consiste en utilizar palabras que aluden a otras que serán expuestas posteriormente. La referencia catafórica es mencionada a través de un ejemplo:

En Lima, a los 23 días del mes de marzo 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzáles Ojeda y Vergara Gotelli pronuncia la siguiente sentencia: Recurso de agravio constitucional interpuesto (...) Exp. N° 2700-2006-PHC/TC.

Moreno Cabrera¹² (1985-1986:167) identifica la catáfora a partir de los siguientes ejemplos que propone:

- La serpiente estaba detrás de **él. Pedro**, sin embargo, no se asustó.
- **Esto** es lo que quiere. **Nadar** y **guardar la ropa**.

Es un caso de correferencia donde el autor concluye que “en ambos casos, el pronombre precede a su “antecedente”: aparece en una oración anterior a lo que contiene éste”. Esto nos indica que es un tipo de referencia inmediata. Díaz por su parte determina que solo las relaciones endofóricas están presentes en el discurso.

Otro mecanismo es la elipsis que consiste en omitir ciertas palabras cuyo significado se encuentra sobreentendido en el contexto. Bernárdez (1982:117) “La elipsis solo es posible cuando el elemento elidido es perfectamente identificable por el oyente (sea intratextual o extratextualmente)”.

A continuación presentamos el siguiente ejemplo:

*Ahora bien, una primera cuestión que **el demandante** considera que atenta contra sus derechos fundamentales invocados está relacionada con el carácter – civil o militar- del establecimiento penitenciario en el cual se encuentra. Según afirma, **está recluso** en un establecimiento penitenciario militar, siendo que el sistema penitenciario debe estar bajo el control civil y no militar. El Tribunal Constitucional no comparte esta afirmación del demandante. Exp. N° 2700-2006-PHC/TC.*

En este ejemplo el demandante es identificado desde el inicio de manera explícita y luego es nombrado a partir del antecedente.

¹² Estudio realizado por Juan Carlos Moreno Cabrera En: Tipología de la catáfora paratáctica: entre la sintaxis del discurso y la sintaxis de la oración. E.L.U.A. Estudios de Lingüística 3, 1985-1986. ISSN 0212-7636, pp 165-192

SENTENCIA 5

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Narvin Augusto Canales Rimarchi contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 44 del cuadernillo formado ante esa instancia, su fecha 11 de agosto de 2004, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo. EXP. N.º 4018-2004-AA/TC. LIMA

Observamos la supresión del determinante (el) recurso extraordinario como una rasgo característico en las sentencias del Tribunal Constitucional. Igualmente, se reitera el mismo formato al inicio del asunto con el uso del posesivo (su) fecha y de fojas, el arcaísmo (fojas: hojas) señalado anteriormente.

*El Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Piura contesta la demanda indicando que **admitió** no se **admitió** la **tacha del recurrente**, porque ésta no la formuló al contestar la demanda. Y admitió posteriormente la **tacha de la demandante** en el proceso de alimentos, por que ésta se formuló en la audiencia **única**, que es el **único** estadio procesal donde ella pudo hacerlo. EXP. N.º 4018-2004-AA/TC. LIMA*

La reiteración en las construcciones de unidades sintagmáticas extensas: determinante + sustantivo + contracción + numeral + sustantivo + preposición + sustantivo + adjetivo + preposición + sustantivo acompañado de preposiciones. Otra características que identificamos es el uso de la palabra *tacha*. El léxico que se registra en cuanto al lenguaje jurídico es un tanto limitado en los diccionarios alfabéticos convencionales. El Diccionario Jurídico (2002:376), “*tacha*” significa falta, defecto. Nota desfavorable. 1. Motivo legal para rechazar la declaración de un testigo, por la presunta parcialidad, favorable u hostil, que originan las relaciones o circunstancias entre el declarante y una de las partes. Se observa un significado similar en el Diccionario de la Lengua Española (2005:1441): motivo legal para desestimar en un pleito la declaración de un testigo. En este contexto las similitudes semánticas se van

establecer a partir del motivo. La aliteración (única, único) en una misma unidad enfatizando su particularidad.

A su vez, la Juez del Segundo Juzgado de Familia de Piura contesta la demanda, solicitando que ésta se declare infundada, tras considerar que la resolución judicial que se impugna ha sido expedida dentro de un proceso regular. EXP. N.º 4018-2004-AA/TC. LIMA.

Observamos el uso reiterado de las unidades sintagmáticas prolongadas determinante + sustantivo + preposición + numeral + sustantivo + preposición + sustantivo + preposición+ sustantivo. Notamos que el pronombre demostrativo ésta se utiliza como sustituto pleno en referencia a la demanda. Bernárdez (1982:111) afirma:”Por tanto, está perfectamente claro que pueden considerarse los pronombres demostrativos como preformas puras, es decir, como elementos destinados básicamente (o únicamente) a la sustitución”.

*Asimismo, refiere que al momento de contestar la demanda, el recurrente no sostuvo que su hijo estuviera viviendo con él; de modo que al alegarlo en segunda instancia, no podía valorar tal situación, habida cuenta que el artículo 374 del Código Procesal Civil solo autoriza que en los procesos de conocimiento y abreviado se presenten, con la apelación, nuevos medios de prueba; lo que no era el caso, puesto que el proceso de alimentos se tramita como **proceso sumarísimo**. EXP. N.º 4018-2004-AA/TC. LIMA.*

El proceso sumarísimo es una frase acuñada en el lenguaje jurídico para reconocer la gravedad o la urgencia de las causas. Es un significado transferido de juicio sumarísimo. El Diccionario Jurídico (2002:374) registra “sumarísimo” como superlativo de sumario; abreviadísimo, por los trámites acelerados. El Diccionario de Uso del Español Actual (2000: 1711) presenta: conjunto de actuaciones preparatorias de un juicio en las que se aportaron pruebas, datos y testimonios que posibilitan el fallo del tribunal. Así , tenemos: La juez ha abierto un sumario para investigar los vertidos tóxicos en este río. Se registra ese conjunto de actuaciones que son transferidas en un tiempo acelerado aunque el contexto no lo aclara del todo.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Derecho al debido proceso y el derecho a la defensa considerándose derechos constitucionales.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2° de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.
DATO	Que no se ha violado el derecho al debido proceso y de defensa porque en el amparo contra resoluciones judiciales al juez constitucional no evalúa los criterios que hayan podido tener los jueces ordinarios al resolver una causa determinada salvo que sea constitucionalmente legítima, adecuada, necesaria y proporcional.
CONCLUSIÓN	Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

SENTENCIA 6

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gracia María Francisca Aljovín de Losada, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 17 del cuaderno de apelación, de fecha 5 de marzo de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. EXP. N.º 0465-2003-AA/TC. LIMA.

Observamos la supresión del determinante al inicio del párrafo; el uso constante de unidades sintagmáticas: la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República que tienen personificación del objeto ideal; también el reiterado uso de arcaísmo: de fojas, de fecha. La acción de amparo de autos

es una frase hecha en el ámbito jurídico. La acción de amparo es un tipo de garantía constitucional que se apoya en el hábeas corpus. Su proyección semántica de acción parte de la nominalización. “la **acción** de amparo resultó improcedente”.El DRAE (Vigésima segunda edición) presenta trece significados diversos y locuciones. Esto deriva a la palabra accionar. No se registra en el DRAE la acción de amparo de autos, pero sí figura acción reivindicatoria, acción de nulidad, acción de condena, acción de pauliana, acción pública.

*Asimismo, alega la afectación de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que: a) no se **merituaron** pruebas importantes en el proceso de **reducción de alimentos**; b) hubo indebida y contradictoria motivación de las sentencias, afectándose con ello el principio de congruencia; c) hubo negligencia en la tramitación del proceso en la segunda instancia e irregularidades procesales dentro del proceso que evidenciaron **parcialización** de los jueces; y d) hubo **vulneración** al principio constitucional de cosa juzgada. EXP. N.º 0465-2003-AA/TC.LIMA.*

Notamos la presencia de la ambigüedad léxica “alimentos” en esta edición del DRAE (Vigésima segunda edición) registra los siguientes significados: m. Conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir. 2.Cada una de las sustancias que un ser vivo toma o recibe para su nutrición. 3. Cosa que sirve para mantener la existencia de algo que, como el fuego, necesita de pábulo. 4. Sostén, fomento, pábulo de cosas incorpóreas, como virtudes, vicios pasiones, sentimientos y afectos del alma. 5. pl. Der. Prestación debida entre parientes próximos cuando quien la recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades. En el lenguaje jurídico, alimentos significa: “Prestación debida entre parientes próximos cuando quien la recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades”. Notamos que no se percibe un criterio sistemático para presentar la secuencia de significados que no son aclarados mediante ejemplos. El significado jurídico de alimentos se construye a partir del principio de asistencia y se amplía a un conjunto de prestaciones que nacen de las propias necesidades de las personas. Los juristas consideran que son las necesidades de orden espiritual. Cuando decimos que es todo lo que necesita una persona en una situación determinada prevista por ley, nos referimos a una interpretación de los jueces.

La interpretación doctrinal, según los abogados, parte de un derecho de familia que consiste en satisfacer todas aquellas necesidades básicas. En este caso hay ambigüedad cuando se refiere a la reducción de alimentos porque los datos se muestran de manera general.

Otro aspecto que observamos es la nominalización cuyo proceso de formación de nombres a partir de una base que tiene otra categoría parcializar, parcialización, vulnerar, vulneración.

Observamos que meritar, merituadas, merituaron se emplea como un verbo no personal y participio. En el contexto jurídico penal se conjuga como un verbo en infinitivo -ar. No está registrado en el DRAE (Vigésima segunda edición). Ahora bien, mérito alude a esfuerzo, acción, valor o aprecio. Hay una transferencia del rasgo de valoración y aprecio de lo humano al objeto.

En el texto Vocabulario de uso judicial. Vocablos y expresiones de uso frecuente en la práctica judicial (1998:72), meritar significa proceso lógico de valoración y análisis de los elementos relevantes en el proceso judicial, de las pruebas presentadas, por parte del juez o tribunal y con la finalidad de emitir un pronunciamiento debidamente fundamentado.

FUNDAMENTOS

*El objeto de la presente demanda es que se declare nula la sentencia de vista Resolución N.º 6, **corriente** en el Expediente N.º 4076-99, sobre Exoneración o Reducción de Alimentos, expedida por el **Segundo Juzgado Especializado de Familia de Lima**, por considerarse que fue emitida en un proceso irregular, con violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la motivación de las resoluciones judiciales y **cosa juzgada**. EXP. N.º 0465-2003-AA/TC. LIMA*

Observamos unidades sintagmáticas múltiples: adjetivo + sustantivo + adjetivo + prep.+ sustantivo + prep. + sustantivo. La palabra corriente alude a correr en autos significa que las resoluciones, las actas y demás elementos se encuentran dentro del

expediente. El DRAE tiene 17 significados que ninguno de ellos se acerca al lenguaje jurídico. La cosa juzgada es una frase hecha utilizada en el ámbito jurídico. El DRAE cosa juzgada significa f. cosa que se da por resuelta e indiscutible y que es ocioso tratar.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales: derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la cosa juzgada.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200, inciso 2° de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.
DATO	Que no se ha afectado ningún derecho constitucional invocado por la demandante al no haberse acreditado dentro del proceso de amparo. No procede la acción de garantía contra las resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular.
CONCLUSIÓN	Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo al no haberse afectado ningún derecho constitucional.

SENTENCIA 7

ANTECEDENTES

2. Como es de verse, **de autos** se advierten situaciones controvertibles que no están debidamente esclarecidas. Consecuentemente, al no haberse acreditado suficientemente la pretensión, la demanda debe ser desestimada, aunque se deja a salvo el derecho del demandante **para hacerlo valer**, en todo caso, en la forma legal que corresponda. EXP. N.º 1317-2002-AA/TC. ANCASH

El uso de autos es una parasinonimia que se refiere a expediente en la mayoría de los casos. Identificamos una hiperonimia porque en lenguaje forense diferentes piezas que constituyen al conjunto de documentos que están incluidos en autos.

Suprime el determinante (los) de los autos. El uso de las formas no personales del verbo es frecuente en el lenguaje jurídico hacer, valer.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la propiedad.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2° de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional .
DATO	Que no se ha afectado ningún derecho constitucional invocado por el demandante al no haberse acreditado sobre la demolición del muro de adobe con medios probatorios suficientes.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda.

SENTENCIA 8

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, y alega que al 19 de diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia el Decreto Ley N.° 25967, el actor no reunía los requisitos para acceder a ningún tipo de pensión de jubilación bajo los alcances del Decreto Ley N.° 19990. EXP. N.° 0700-2004-AA/TC LAMBAYEQUE.

En este ejemplo reitera la personificación del objeto ideal la ONP. En el lenguaje jurídico se aprecia el uso indebido del gerundio: la ONP contesta la demanda (sust.) solicitando (gerundio –ando) No puede modificar al sustantivo no puede actuar como adjetivo.

El Primer Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 15 de julio de 2003, declaró infundada la demanda, por estimar que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.° 25967, el actor no cumplía el requisito de la edad previsto por el artículo 44°

del Decreto Ley N.º 19990 para acceder a una pensión de jubilación adelantada. EXP. N.º 0700-2004-AA/TC LAMBAYEQUE.

Observamos las unidades sintagmáticas: determinante + adjetivo + sustantivo + sustantivo + preposición + sustantivo. El DRAE (2005: 27), el actor significa demandante o acusador. Identificamos la repetición léxica sinonímica a lo largo de la sentencia.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la pensión de jubilación.
APOYO	Constitución Política del Perú (artículo 200 inciso 2º) y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional.
DATO	Que no se ha afectado ningún derecho constitucional invocado por el demandante porque al 31 de diciembre de 1992 que entró en vigencia el Decreto Ley N°25967 el demandante no reunía el requisito de edad para acceder a una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley N° 19990.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda de amparo.

SENTENCIA 9

*El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, con fecha 07 de diciembre de 2000, declara fundada la demanda, aduciendo que se ha acreditado que **el recurrente es sobrino de María Rosa Fernández Caja, quien requiere atención médica**; que el demandante ha acreditado haberle brindado los cuidados necesarios, y que, en ese sentido, la protección y defensa de sus derechos recaen en su persona, y lo contrario supone vulneración de sus derechos. EXP. N.º 1624-2002-AA/TC. LIMA.*

Identificamos las unidades sintagmáticas extensas: el primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público. La posición del pronombre “quien” no hace una referencia adecuada al recurrente provocando una vaguedad. Observamos que el ordenamiento sucesivo de las oraciones está forzado por enlaces inapropiados que quiebran la ilación del tema expuesto.

*La recurrida revoca la apelada declarándola infundada, aduciendo que las acciones de garantía no son declarativas de derechos y que están reservadas a los casos en que se violen o amenacen derechos con rango constitucional, siendo necesario para su procedencia que el accionante acredite la existencia de un derecho constitucional que haya sido **objeto de lesión** o puesto en peligro por terceros. EXP. N.º 1624-2002-AA/TC.LIMA.*

*El **objeto de la demanda** es que cese la amenaza al ejercicio del derecho constitucional del demandante de proteger a un familiar discapacitado, toda vez que mediante una denuncia por el delito de secuestro y **otros actos**, el demandado pretende impedir que defienda los intereses de su familiar. EXP. N.º 1624-2002-AA/TC.LIMA.*

Hay una imprecisión en el segundo párrafo pues no se sabe a qué actos se refiere. El objeto de la demanda y el objeto de la lesión son frases hechas en el lenguaje jurídico que no están registradas por el DRAE. Si bien, parte del significado de objeto 5. Materia o asunto de que se ocupa una ciencia o estudio. En el Diccionario Jurídico (2002: 276), figura objeto del derecho. Las personas, las cosas y las acciones, en toda su complejidad, constituyen el objeto del Derecho, o de las relaciones jurídicas.

*De la sentencia emitida por el **Decimotercer Juzgado Civil de Lima**, corriente a fojas 17, se colige que el demandado simuló la venta de los derechos y acciones de **doña María Rosa Fernández Caja** sobre el bien inmueble en el que habita, mediante un documento viciado por la falta de manifestación de voluntad de **ella**. EXP. N.º 1624-2002-AA/TC. LIMA.*

Las unidades sintagmáticas: determinante + numeral + sustantivo + adjetivo + preposición + sustantivo son recurrentes en las sentencias. Observamos que el numeral ordinal está apocopado decimotercero: decimotercer que es aceptado por la Real Academia Española. Como vemos, corriente a fojas, corriente en el expediente, correr en autos son frases hechas en el lenguaje jurídico. El ejemplo corriente a fojas estamos ante un galicismo sintáctico (el complemento de un sustantivo mediante otro sustantivo con la preposición a). Se reitera el uso del arcaísmo fojas: hojas. Identificamos una sustitución pronominal María Rosa Fernández Caja: ella.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Son derechos fundamentales el derecho de protección a un familiar discapacitado.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2° de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional.
DATO	Toda persona discapacitada debe gozar hasta el máximo grado de viabilidad de los mismos derechos que tienen las demás personas.
CONCLUSIÓN	Declarar FUNDADA la demanda de amparo al acreditarse la amenaza del derecho de protección del discapacitado.

SENTENCIA 10

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra el Gerente Departamental Ayacucho de EsSalud, don Julio Aguilar Límaco, para que se declare inaplicable la Carta de Despido N.º 975-GDAY-ESSALUD-2002, de fecha 20 de diciembre de 2002, y, por consiguiente, se la restituya en su puesto de enfermera. Refiere que en abril de 2002 fue contratada a plazo indeterminado para desempeñar el cargo de enfermera del Hospital II de EsSalud, por haber ganado el concurso público correspondiente; que en dicha carta se le imputó la comisión del

delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, durante el desarrollo del mencionado concurso público de méritos; que, sin embargo, esta imputación se sustenta en apreciaciones subjetivas; y que no se le cursó la carta de preaviso para que hiciera sus descargos. EXP. N.º 1804-2003-AA/TC. AYACUCHO.

En el antecedente se debe exponer claramente la información de los hechos en litigio. Este objetivo no se logra porque existe vaguedad parcial. La recurrente declara o manifiesta algo relevante. Después de participar en el concurso público fue contratada a plazo indeterminado en el cargo de enfermera del Hospital II de EsSalud de Ayacucho. Los datos que nos muestran son imprecisos no se sabe la ubicación geográfica del Hospital II. En el lenguaje jurídico, referir tiene una cierta connotación subjetiva. En el DRA (2005:1306), remitir significa 6. remitirse (atenerse a lo dicho o hecho) 7. aludir. Declarar significa Der. Manifestar ante el órgano competente hechos con relevancia jurídica. El testigo declaró ante el juez. En Glosario de términos jurídicos (2004:88), “declarar” significa una manifestación que se hace para comunicar un hecho o explicar un asunto.

Otro aspecto que observamos es el uso de la palabra imputar que es nominalizada: la imputación que quiere decir la acusación. La comisión del delito es una frase hecha empleada en el lenguaje jurídico que alude al delito cometido. Hay vaguedad en la información cuando se refiere a las apreciaciones subjetivas porque no se sabe a quién alude.

El emplazado contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando que en la carta de despido no se ha invocado causa alguna relacionada con la conducta o la capacidad de la recurrente, razón por la cual no era necesario cursarle la carta de preaviso; y que el despido de la demandante ha sido incausado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 34.º del Decreto Legislativo N.º 728. EXP. N.º 1804-2003-AA/TC.AYACUCHO.

Observamos en la sentencia el uso indebido del gerundio de manera reiterada. Además, se refiere a la demandante que ha sido incausada y no incausado. Los abogados lo entienden como sin causa conocida o sin causa. La palabra incausado no figura en el DRAE ni en los diccionarios jurídicos.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales: derecho al trabajo, derecho al debido proceso y el derecho a la defensa.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2° de la Constitución Política y el artículo 37° del Código Procesal Constitucional.
DATO	Que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de defensa al no cursarle a la recurrente la carta de preaviso.
CONCLUSIÓN	Declara FUNDADA la acción de amparo y se ordena la inmediata reincorporación de la demandante en el puesto de trabajo.

3.2.1 Uso de marcadores textuales

Existen diversas denominaciones para referirse al marcador discursivo. Al respecto, Zorraquino (1998: 26) dice: “Con marcador de discurso se apunta a un concepto “pragmático” o “enunciativo”: la integración de las unidades de predicación (las oraciones, las entidades equivalentes a ellas, o bien algunos de sus miembros) en el discurso”. Esta integración entre las unidades a nivel textual cobra importancia en nuestro estudio.

El párrafo anterior permite destacar dos aspectos importantes. En primer lugar, el carácter predominante del carácter pragmático de los marcadores y en segundo lugar, el predominio de carácter semántico- lógico de los conectores. El autor mencionado (1998:26) define el marcador del discurso desde una conceptualización pragmática.

Zorraquino (1998: 25) señala : ““En todos los casos se trata de entidades invariables, con rango externo a la función predicativa oracional –no son seleccionadas ni por el verbo ni por la combinación de la relación “sujeto-predicado”- y que reflejan un contenido secundario respecto del contenido de toda la oración o de algunos de sus miembros, pues, como señala oportunamente Alcina, “comentan, precisan o contrastan” dicho contenido o marcan un orden o una relación entre la oración y lo que le precede y le sigue al discurso”.

Cortés y Camacho (2005: 144) expresan: “El marcador textual relaciona bloques de palabras – unidades- de manera directa, pero, indirectamente, se convierte en vínculo del modo como el hablante formaliza con palabras esa serie de operaciones lógico-lingüísticas respecto al referente”.

Los marcadores del discurso tienen una realización interesante como Cortés y Camacho (2005: 144) lo remarcen: “Las instrucciones para un marcador proveen al oyente, se pueden clasificar en dos grandes grupos: marcadores textuales y marcadores interactivos”.

SENTENCIA 1

La Sala del Tribunal Constitucional declara infundada la acción de amparo interpuesta por la empresa Full Line S.A. Este fallo permite la protección del derecho constitucional al honor, a la buena reputación y a la imagen.

Analizamos los marcadores textuales identificados en la sentencia 1.

Asunto	
Antecedente	Pues, en consecuencia, asimismo, por último
Fundamento	En caso contrario, por último, pues, por otro lado
fallo	

Pues

Portolés (1993) expresa que el conector *pues* es una clase de reforzador dentro del subgrupo de justificativos (al fin y al cabo, después de todo, porque, pues). Por su parte, Fuentes (1996) afirma que este conector pertenece al grupo de temporales y ordenadores del discurso continuativo. Casado Velarde (1998) analiza los tipos de sentidos e identifica al conector *pues* como relacionante de causalidad. Zorraquino y Portolés (1999) resaltan su importancia en la estructura de la información y lo ubican en el grupo de los comentadores. Finalmente, Cortés y Camacho (2005:254) expresan: “Los comentadores, que presentan la secuencia que introducen como un nuevo

comentario, lo que la distingue del resto de las enunciadas; la parte del enunciado anterior se comprende como un comentario distinto – esto es, que responde a otro tema- o como una preparación al nuevo comentario introducido por el marcador”. Concluyen que son unidades que carecen de significado argumentativo.

Este conector es ambiguo porque tiene varias realizaciones en el texto. Se define como comentador, justificativo, continuativo y relacionante de causalidad.

En el siguiente ejemplo observamos la ubicación textual del conector *pues* que se ubica en la última oración del párrafo. Cumple con la función de ser un indicador de fuerza al que le sigue una aclaración o explicación. La información que brindan los jueces que redactan la sentencia es importante al final de cada párrafo. Consideramos que su ubicación es importante porque genera ciertos datos no aparecidos anteriormente. Lo Cascio (1998: 213) señala: “Reflexionando sobre la naturaleza semántica y el comportamiento de *pues* tal vez puede sostenerse que sirve para confirmar la verdad del enunciado matriz explicando sus fundamentos más que para proporcionar argumentos neutrales e independientes para la defensa de la tesis contenida en la frase matriz”.

*Telefónica del Perú S.A. contesta la demanda señalando que la relación contractual que tiene con la empresa Hombrecitos de Color S.A. es de naturaleza civil, **pues** se trata de un contrato de locación de servicio (...) Exp. 835-2002-AA/TC.*

Observamos que en los dos ejemplos le antecede una coma (,) como un elemento explicativo y aclarativo. La característica de este conector es que no aparece al inicio del párrafo.

*De acuerdo con los artículos 138° y 139°, inciso 1), de la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida, exclusivamente, por el poder Judicial, **pues** una de las características de un Estado de derecho es ofrecer jurisdicción a los particulares para la solución de los conflictos que surgen en las relaciones sociales. Exp. 835-2002-AA/TC.*

En consecuencia

Casado Velarde (1998) registra este conector como conector de consecuencia. Zorraquino y Portolés (1999) coinciden en ubicarlo como un conector consecutivo. Una característica de este conector es la presencia de un razonamiento previo que conlleva a un efecto. Hay un antecedente y un consecuente. La ubicación textual es en el segundo miembro y después del conector se usa la coma (,).

El caso de **ambigüedad** está dado sino cumple con las características mencionadas (A en consecuencia, B). Entonces, surge otra denominación como adverbio incidental de función reformulativa como en el caso del conector *consecuentemente*.

Observamos en esta sentencia que después de un largo razonamiento de los hechos se llega a la consecuencia que se expresa en la acción legal tomada por el recurrente.

(...) amenaza su derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa, al honor y a la buena reputación. En consecuencia, solicita que las demandadas hagan valer su derecho de cobranza en vía legal y solicitan el pago de costos y costas del proceso. Exp. 835-2002-AA/TC.

Asimismo

Zorraquino y Portolés (1999) clasifican el conector *asimismo* dentro del grupo de conectores aditivos, coinciden con Casado Velarde (1998) en esta clasificación. En cambio, Cortés y Camacho (2005: 208) ubican el conector como continuativo o enumerador.

Puede crear ambigüedad si lo consideramos como adverbio. El DRAE (2005:154) registra la palabra *asimismo* de la siguiente manera: adv. M. también (como afirmación de igualdad, semejanza, conformidad o relación). En el Diccionario de Uso del Español Actual (2000: 167) *asimismo* adv. También: Asimismo habló de otros temas. Observamos que no tiene coma y va al inicio del enunciado.

La palabra *asimismo* cumple la función de conector porque une o relaciona dos ideas del texto y se ubica en la última oración del párrafo y, además, le sigue una coma. En este párrafo agrega información adicional a partir de una unidad temática.

Telefónica del Perú S.A. contesta la demanda señalando que la relación contractual que tiene con la empresa Hombrecitos de Color S.A. es de naturaleza civil, pues se trata de un contrato de locación de servicios, y que ello no significa que tengan alguna responsabilidad en la labor que realiza la citada empresa con relación a las estrategias y método de cobranza para hacer efectiva la acreencia que tienen a su favor. Asimismo, propone la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva. Exp. N° 835-2002-AA/TC.

El segundo miembro muestra una fuerza argumentativa a través de una información relevante.

Por último

Portolés (1993) lo registra como un marcador de cierre del discurso. Igualmente, Fuentes (1996) ubica dentro de los relacionantes temporales y ordenadores discursivos a los ordenadores de cierre y entre ellos encontramos el conector “por último”. Casado Velarde (1998) coincide con esta clasificación.

En el ejemplo, observamos que este conector se ubica en la última oración del párrafo. Al conector le sigue una coma y cumple con su función de ordenador temporal en la secuencia de la exposición de los hechos; por tanto, carece de significado argumentativo.

*Hombrecitos de Color S.A. contesta la demanda señalando que es una empresa constituida de acuerdo a ley, cuyo objeto es la administración de cartera de cobranza, gestión de recuperación judicial y extrajudicial de las deudas y demás actividades afines, añadiendo que efectivamente cursó cartas a la demandante con la finalidad de que cumpliera con hacer efectivo el pago de la obligación pendiente a favor de Telefónica del Perú S.A.. **Por último**, manifiesta*

que no ha enviado fotografía alguna a la empresa demandante. Exp. N° 835-2002-AA/TC.

Por último, no se encuentra acreditado en autos que la empresa Hombrecitos de Color S.A. haya adjuntado a las cartas de requerimiento de pago la fotografía cuya copia obra a fojas 17-15. Exp. N° 835-2002-AA/TC.

En caso contrario

Este conector expresa un contraste u oposición entre las ideas. Se lo registra como marcador contraargumentativo. Cortés y Camacho (2005: 199) anotan: “Introduce una razón contraria a otra que puede inferir a partir de este”. Estos autores exponen la propuesta de Zorraquino y Portolés (1999: 4109) que lo plantean en tres tipos de marcadores contraargumentativos: “a. Conectores que permiten contraste o contradicción entre los miembros vinculados: en cambio, por el contrario, en contra; b. Conectores cuyo acto discursivo concreta el mismo tema que el miembro anterior: antes bien; c. Conectores que introducen conclusiones contrarias a las esperadas de un primer miembro: sin embargo, no obstante, ahora bien, pero, con todo; d. conectores que muestran un miembro discursivo que atenúa la fuerza argumentativa del miembro anterior (eso sí)”.

En este ejemplo, observamos la ubicación textual del conector *en caso contrario*. Este aparece en la última oración del párrafo seguida de una coma. Es un tipo de conector que expresa un contraste, pero si la exposición de los datos es insuficiente puede surgir la ambigüedad para identificar el tipo correspondiente. Nos pueden ayudar los elementos enfatizadores para orientar el tipo de conector.

Tal como lo ha establecido este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente N° 2790-2002-AA/TC, si bien la empresa Hombrecitos de Color S.A. puede tener como giro de negocio el cobro de obligaciones a terceras personas, ello debe ejercerse dentro de un contexto de un estado democrático de derecho, con arreglo a ley y previa acreditación de las facultades correspondientes. En caso contrario, se vulnerarían los derechos al debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 139°, incisos 3) y 14), de la Constitución Política del Perú. Exp. N° 835-2002-AA/TC.

En el ejemplo se plantea una posibilidad del giro o rubro de negocio de la empresa Hombrecitos de Color S.A.. Los jueces fijan un parámetro de acción, pero si se transgrede esa delimitación se contrapone con los artículos de la Constitución.

Por otro lado

En el ejemplo notamos que el ordenador va después de los elementos expuestos para luego añadir un comentario. Después del ordenador “por otro lado” hay una coma que refuerza la secuencia del razonamiento. Es importante la presencia de la coma después del ordenador porque es lo que va a permitir determinar si se trata de un articulador de ideas. Notamos que hay una continuidad en la exposición de la sentencia.

Por otro lado, está demostrado en autos, mediante las cartas de requerimiento notariales, que la empresa Hombrecitos de Color S.A. amenaza los derechos a la buena reputación y a la imagen de la empresa demandante, que han sido reconocidos como derechos fundamentales por este Tribunal Constitucional para las personas jurídicas, en la sentencia N° 0905-2001-AA/TC, al pretender poner en conocimiento de las principales centrales de riesgo su situación si es que no cancela la deuda pendiente, para así imposibilitarle el acceso a créditos en el sistema financiero y comercial en el ámbito nacional, lo cual ocasionaría que la demandante no cumplía sus fines sociales. Exp. N° 835-2002-AA/TC.

SENTENCIA 2

La Sala del Tribunal Constitucional declara infundada la demanda interpuesta por Javier Mendoza Alegre contra la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna, jefe de la Sección y efectivos policiales.

Analizamos los marcadores textuales identificados en la sentencia 2. Aplicaremos la clasificación propuesta por Cortés y Camacho (2005).

Asunto	
Antecedente	Pues, asimismo
Fundamento	pues, en consecuencia, asimismo
Fallo	

Pues

Es un tipo de reforzador de la idea que le antecede. En el plano textual su función de justificación estará marcada por la coma (,) que la antecede.

*La Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, por falsa, temeraria y tendenciosa, **pues** su intervención y los actos practicados en su condición de funcionario, son legales y no arbitrarios. Exp. N° 0425-2003-AA/TC*

Asimismo

Este conector, para que cumpla su función de continuativo, está ubicado en el segundo miembro del párrafo a fin de identificar que hay un elemento que le antecede. Otra característica es que está seguido de una coma. Podemos observar en algunos textos que utilizan un enfatizador (conjunción: y) para continuar con la exposición.

La recurrida confirmó la apelada, aduciendo que, como se aprecia de autos, existían indicios razonables de la comisión de un delito, enmarcándose la intervención del Ministerio Público dentro de las funciones previstas en su Ley Orgánica. **Asimismo**, al haberse dispuesto el archivamiento de la denuncia formulada en su contra, es en dicho proceso en que debe solicitarse la devolución del vehículo incautado. Exp. N° 0425-2003-AA/TC.

En consecuencia

Al conector *en consecuencia* siempre le sigue una coma. En este ejemplo el conector se ubica en la última oración del párrafo, lo que permite exponer el efecto.

*Finalmente, tampoco escapa a este Colegiado que, con fecha 7 de febrero de 2003, se denunció penalmente al demandante por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento público falso, respecto de los hechos derivados justamente de la determinación del año de fabricación del vehículo incautado, proceso éste que podría tener incidencia en la devolución de dicho bien. **En consecuencia**, al no acreditarse la afectación de derecho alguno, la demanda debe ser desestimada. Exp. N° 0425-2003-AA/TC.*

SENTENCIA 3

La Sala del Tribunal Constitucional declara infundada la demanda para trasladar al recurrente a otro establecimiento penitenciario. Identificamos los siguientes marcadores textuales en la sentencia 3.

Asunto	
Antecedente	en consecuencia, asimismo, finalmente, más aún
Fundamento	por tanto, no obstante, sin embargo, finalmente, por ende, por otro lado
Fallo	

En consecuencia

Veamos el siguiente ejemplo. El conector *en consecuencia* debe unir dos ideas claramente formuladas. Estamos frente a una vaguedad porque lo que le antecede al conector contiene una información insuficiente. No cumple con las condiciones para emplear un conector de consecuencia. Además, notamos que hay una redundancia con el conector por ello.

Observamos que los fundamentos de las sentencias están separados por párrafos que inician con un conector o marcador textual. La mayoría de sentencias del Tribunal Constitucional poseen esta característica de iniciar los párrafos con un conector. En el segundo ejemplo expresa que la unidad que lo contiene es consecuencia de lo expuesto en el antecedente. Se evidencia un antecedente y consecuente.

*El derecho fundamental a profesar una religión, **en consecuencia**, está reconocido en la Constitución pero, al igual que los demás derechos fundamentales, no como un derecho absoluto o sin límites. Por ello, negar la titularidad de dicho derecho sería inconstitucional, mas no regular las condiciones de su ejercicio; más aún si el demandante se encuentra recluso en un establecimiento penitenciario de alta seguridad. Por ello, atendiendo a que la Constitución establece como derecho fundamental de todas las personas – incluido los reclusos – a la libertad religiosa –la misma que se asienta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana – y que el principio del*

régimen penitenciario tiene por objeto reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad, recibir asistencia religiosa como un medio penitenciario y como un fin en sí mismo de resocialización a través de la fe, no constituye una violación constitucional a los valores del orden público y a la seguridad ciudadana. Exp. 2700-2006-PHC/TC.

*Con fecha 17 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Presidente del Comité Técnico del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao y el Jefe del Centro de Reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, por la presunta vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica; y a la resocialización, reeducación y rehabilitación como fines de la pena. **En consecuencia**, solicita que se disponga su traslado a un penal de máxima seguridad para civiles, que se encuentre a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPE). Exp. 2700-2006-PHC/TC.*

Asimismo

Este ejemplo muestra una continuidad que está supeditada a un aspecto temporal (en un primer momento) y que puede utilizarse con un enfatizador para detallar algún aspecto del caso. Después del conector se coloca una coma como identificación de pausa para evitar la ambigüedad con el adverbio *asimismo*.

*El accionante se encuentra en un centro de reclusión militar pese a haber sido condenado, en un primer momento, por el supuesto delito de terrorismo en el fuero común. **Asimismo**, señala que, si bien en la actualidad su proceso se encuentra en trámite, su permanencia en la Base Naval vulnera el principio de igualdad de armas en el proceso, puesto que deberá responder en juicio por los enfrentamientos ocurridos entre la Marina de Guerra del Perú y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante MRTA).). Exp. 2700-2006-PHC/TC.*

Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria del demandante, quien se ratifica en el contenido de su demanda (fojas 18 a 22). Por su parte, los demandados coinciden en señalar que el tratamiento de los internos

del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao está a cargo del INPE y que el demandante ha sido recluido en dicho establecimiento, junto a otros civiles, por ser considerado un reo “de alta peligrosidad”. Asimismo, niegan que esté siendo víctima de algún tipo de afectación a su integridad física o psicológica, más aún si el régimen de reclusión impuesto al recurrente se ha ido flexibilizando gradualmente. Exp. 2700-2006-PHC/TC.

Con fecha 27 de octubre de 2005, el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda en el extremo en que alega la vulneración de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la socialización y a la rehabilitación. Asimismo, declara fundada la demanda en el extremo relativo al INPE, disponiendo que una vez culminado el proceso judicial se efectúe una clasificación y se traslade al demandante, de ser el caso, a otro establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Finalmente, declara improcedente la demanda respecto de aquellos emplazados que, a la fecha, no se encuentran ejerciendo el cargo por el cual fueron demandados. Exp. 2700-2006-PHC/TC.

Más aún

Cortés y Camacho (2005: 209-210) expresan: “(...) como podemos ver en Fuentes (1987), Mederos (1988) o Acín (1998), por unir a dicha intensificación una estrategia de convicción especificativo- argumental”. Se le denomina también relacionante aditivo. Fuentes (1996) señala que los aditivos se caracterizan porque solo cumplen la función de conectar dos unidades. En el siguiente ejemplo, el marcador aditivo une dos unidades, pero necesita enfatizar que ha sido declarada infundada la demanda. Para ello, agrega el marcador aditivo + si.

Con fecha 29 de diciembre de 2005, la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos de Reos en Cárcel, declaró infundada la demanda por considerar que no se ha acreditado la existencia de una efectiva vulneración a los derechos fundamentales invocados en la demanda, **más aún** si las actuaciones de los demandados se han ajustado a las normas reglamentarias que regulan la materia.

Finalmente

Es un marcador de cierre, pero también puede cumplir la función de adverbio de orden. Puede provocar ambigüedad si se confunde con el adverbio de orden. En el DRAE (2005:714) se registra la palabra *finalmente* adv. M. Últimamente, en conclusión. Veamos los siguientes ejemplos donde actúa como adverbio:

- Finalmente renunció.
- Leyó finalmente la demanda.

En el siguiente ejemplo es un marcador de cierre y la coma se coloca después del ordenador. Se caracteriza porque indica la culminación de la secuencia discursiva. Se ubica el marcador “finalmente” en la última oración de la exposición de cada estructura argumentativa de la sentencia.

*Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria del demandante, quien se ratifica en el contenido de su demanda (fojas 18 a 22). Por su parte, los demandados coinciden en señalar que el tratamiento de los internos del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao está a cargo del INPE y que el demandante ha sido recluido en dicho establecimiento, junto a otros civiles, por ser considerado un reo “de alta peligrosidad”. Asimismo, niegan que esté siendo víctima de algún tipo de afectación a su integridad física o psicológica, más aún si el régimen de reclusión impuesto al recurrente se ha ido flexibilizando gradualmente. **Finalmente**, descartan la necesidad de que sea trasladado a otro establecimiento penitenciario puesto que el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao está adecuadamente preparado para prevenir cualquier tipo de enfrentamiento entre los integrantes del MRTA y Sendero Luminoso (fojas 32 a 40, 193 a 206 y 213 a 214). Exp. 2700-2006-PHC/TC.*

***Finalmente**, señala que lleva trece años recluido, sin condena, siendo privado de sus derechos a la libertad de culto, a ser asistido por un consejero espiritual, a la educación, a la libertad de creación intelectual, a la información, a la libertad de expresión y a los beneficios penitenciarios. Exp. 2700-2006-PHC/TC.*

*Con fecha 27 de octubre de 2005, el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda en el extremo en que alega la vulneración de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica, a la socialización y a la rehabilitación. Asimismo, declara fundada la demanda en el extremo relativo al INPE, disponiendo que una vez culminado el proceso judicial se efectúe una clasificación y se traslade al demandante, de ser el caso, a otro establecimiento penitenciario de máxima seguridad. **Finalmente**, declara improcedente la demanda respecto de aquellos emplazados que, a la fecha, no se encuentran ejerciendo el cargo por el cual fueron demandados. Exp. 2700-2006-PHC/TC.*

Por ende

Expresa una consecuencia y por lo general se inicia con una proposición que explica un efecto. Se caracteriza por continuar la conexión discursiva. La ubicación textual puede ser al inicio de la oración como intraoracional. Vemos en el siguiente ejemplo que utiliza un elemento enfatizador y, *por ende* para comentar el mismo tópico: sobre el derecho fundamental a la libertad de información. Se refiere a que las personas internadas en un establecimiento penitenciario no pierden sus derechos fundamentales.

*Sin embargo, es igualmente verdad que los derechos fundamentales no son absolutos y, **por ende**, pueden ser restringidos con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que el derecho a la libertad de información puede ser restringido, razonablemente, cuando se trate de garantizar la seguridad personal del interno o la seguridad del establecimiento penitenciario. Esto, sin embargo, no se configura en el caso del demandante, pues, como él mismo lo afirma (fojas 33), tiene acceso a libros y periódicos para lectura y a determinados medios de comunicación (radio, televisión). Motivo por el cual, se aprecia que la autoridad penitenciaria está respetando su derecho a la libertad de información. Exp. 2700-2006-PHC/TC.*

Del Documento Nacional de Identidad de fojas 1, así como de la cuestionada resolución, se aprecia que a la entrada en vigencia del Decreto Ley

*N.º 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992, el actor sólo contaba con 51 años de edad y 39 años de aportaciones y, **por ende**, aún no había satisfecho el requisito de edad para acceder a una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley N.º 19990. Exp. N.º 0700-2004-AA/TC.*

Por tanto

Zorraquino y Portolés (1999: 4081) registran al conector “por tanto” como consecutivo. Lo Cascio (1991: 204) considera que el conector conclusivo *por tanto* introduce la tesis o conclusión. La ubicación textual varía en este conector. Fuentes (1987) reitera la frecuencia de uso y las distintas posiciones de este conector que no son fijas. Vemos en las sentencias que su uso es constante y por lo general se emplean en la última oración del párrafo. Generalmente, va acompañado de un enfatizador (lo), pero en este caso le antecede “en este extremo” que evidencia un refuerzo con el conector “por tanto” de la decisión de los jueces ante lo expuesto (consecuente). Puede provocar ambigüedad si alude a cantidad: por tanto comer, le aumentó el colesterol.

*En el caso específico, el demandante se encuentra comprendido dentro de los alcances de los artículos 1º y 2º del Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS, según el cual el CEREC alberga a los jefes o dirigentes principales de las organizaciones delictivas que se encuentren procesados o sentenciados por delitos de terrorismo, traición a la patria, contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad y por razones fundadas de seguridad nacional; lo que no obsta para que se señale que el régimen penitenciario del CEREC se fundamente en la convivencia pacífica, el trabajo y el desarrollo de actividades culturales y educativas, y la seguridad dentro del respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución. En este extremo, **por tanto**, tampoco este Tribunal encuentra que se hayan afectado los derechos invocados por el demandante. Exp. 2700-2006-PHC/TC.*

Por otro lado

Es un conector aditivo que cumple con la función de agregar información. Puede utilizarse un reforzador para relacionar de la información que se expone en la sentencia.

Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas. (...) Por otro lado, no cabe duda que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción del acceso a los mismos, debe obedecer a motivos objetivos y razonables. Exp. 2700-2006-PHC/TC.

No obstante

Lo Cascio (1991: 203) explica que el conector *no obstante* introduce una contraopinión. El autor lo ubica como un indicador de fuerza. Coincide con Cortés y Camacho (2005) al registrarlo como un contraargumento discursivo.

Negrori ¹³ (2005) sigue la misma línea de análisis de Flamenco García y Zorraquino Portolés. La autora señala: “La oposición señalada por *no obstante* tiende a ser menos fuerte y global: el locutor restringe su oposición a la argumentación normativa en por lo tanto, que el primer segmento podría evocar, a solo algunos aspectos”. Esta autora resalta el trabajo de Zorraquino y Portolés (1999) quienes: señalan acertadamente que si bien el significado de *no obstante* es próximo al de *sin embargo* – lo que favorece, señalan, su utilización como variante estilísticas -, sus instrucciones no son idénticas a las de este último conector. Veamos el siguiente ejemplo: En el primer ejemplo, el marcador comentador (pues) antecede al indicador contraargumentativo “*no obstante*” a fin de resaltar la conclusión contraria. El demandante declara el impedimento de la libertad religiosa. Se añade un comentador junto al marcador discursivo.

*La tercera cuestión tiene que ver con la supuesta afectación del derecho a la libertad religiosa. El demandante señala que durante trece años se le ha impedido ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa, pues **no obstante** haber solicitado en múltiples oportunidades la asistencia de un consejero espiritual, dicha solicitud le ha sido denegada. Por su parte, en su declaración de descargo,*

¹³ García Negrori, María Marta busca mostrar la configuración polifónico- argumentativa de dos conectores. “Sin embargo y no obstante. Tránsito argumentativo y polifonía. En: Actas del VI Congreso Latinoamericano de Estudios del Discurso. Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2005

de fecha 04 de octubre de 2005 (fojas 193), los emplazados no han desvirtuado lo alegado por el demandante. Exp. 2700-2006-PHC/TC.

Sin embargo

Este marcador textual incorpora una conclusión diferente que el primer elemento. Lo Cascio (1998) señala que “sin embargo” introduce una contraopinión y se caracteriza por su alternancia.

En el siguiente ejemplo observamos que al inicio aparece el marcador textual *sin embargo* y luego se repite antes de finalizar el párrafo. En los dos casos le sigue una coma al marcador textual. Negrori (2005) considera que el marcador sin embargo es polemizador y puede ser trasladado a la sentencia. Si identificamos la estructura de cada bloque argumental, podemos inferir a partir de los datos expuestos los marcadores discursivos.

Sin embargo, es igualmente verdad que los derechos fundamentales no son absolutos y, por ende, pueden ser restringidos con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que el derecho a la libertad de información puede ser restringido, razonablemente, cuando se trate de garantizar la seguridad personal del interno o la seguridad del establecimiento penitenciario. Esto, sin embargo, no se configura en el caso del demandante, pues, como él mismo lo afirma (fojas 33), tiene acceso a libros y periódicos para lectura y a determinados medios de comunicación (radio, televisión). Motivo por el cual, se aprecia que la autoridad penitenciaria está respetando su derecho a la libertad de información. Exp. 2700-2006-PHC/TC.

En este ejemplo puede identificarse el carácter polémico del reajuste de pensiones que se expone en X y no es admitido en el consecuente. El esquema propuesto por Negrori (2005: 7) coincide con esta sentencia. La autora expresa: “El primer punto de vista X es descalificado e invalidado en la continuidad discursiva sin embargo Y”.

Sin embargo

Del estudio de autos se ha podido acreditar que la pretensión de fondo invocada por el demandante, en su calidad de pensionista del Decreto Ley N.º 20530, se refiere al reajuste periódico de las pensiones, esto es, la pensión renovable. Sin embargo, no corre en autos la resolución de otorgamiento de pensión al recurrente, ni documento alguno que permita a este Colegiado tener la certeza de que el demandante goza de pensión nivelable. EXP. N° 2655-2002-AA/TC.

SENTENCIA 4

La Sala del Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por Luis Sala Herrera contra Petróleos del Perú. A continuación analizamos los marcadores textuales:

Asunto	
Antecedente	En parte
Fundamento	Sin embargo, por lo tanto, esto es
Fallo	

En parte

Es un disgresor en la secuencia discursiva porque introduce un nuevo comentario. La palabra en parte equivale a decir no enteramente. El uso, en este ejemplo, crea confusión porque da entender que queda declarada fundada, en parte, la demanda., es decir, no en su totalidad. Cumplirá el rol de disgresor si agrega un nuevo comentario y se le anota entre comas.

*El Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de enero del 2002, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada, **en parte**, la demanda, ordenando que la demandada abone la pensión del recurrente sin tope, con el pago de los reintegros correspondientes, e improcedente el pago de intereses. EXP. N° 2655-2002-AA/TC.*

Esto es

Es un indicador de fuerza argumentativa. Este marcador da énfasis a la unidad discursiva porque permite aclarar una idea. No tiene una ubicación fija, debe aparecer entre comas, sino puede crear ambigüedad al cumplir otro propósito.

*Del estudio de autos se ha podido acreditar que la pretensión de fondo invocada por el demandante, en su calidad de pensionista del Decreto Ley N.º 20530, se refiere al reajuste periódico de las pensiones, **esto es**, la pensión renovable. Sin embargo, no corre en autos la resolución de otorgamiento de pensión al recurrente, ni documento alguno que permita a este Colegiado tener la certeza de que el demandante goza de pensión nivelable. EXP. N° 2655-2002-AA/TC.*

SENTENCIA 5

El Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda de amparo contra la Juez del segundo juzgado de Familia de Piura y el Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Piura.

Los marcadores textuales de esta sentencia son los siguientes:

Asunto	
Antecedente	No obstante, asimismo, puesto que
Fundamento	Mediante la cual, salvo que, en ese sentido
Fallo	

En ese sentido

La presencia del conector *en ese sentido* aparece como consecutivo al final de la sentencia. No esclarece la idea claramente expresada por los jueces emplazados. A pesar, de la presencia del condicional en referencia a la pensión de alimentos y a la justificación a través del conector *porque* que busca justificar y al mismo tiempo marca otras posibilidades de acuerdo a las circunstancias. Consideramos que la

intención de los jueces es poner en consideración el monto de la pensión de alimentos que deberá fijarse según las necesidades del menor de acuerdo al Código Civil.

En ese sentido, si el recurrente considera que la pensión decretada por los jueces emplazados es excesiva, porque, entre otras cosas, ahora es él quien tiene bajo su cuidado a su menor hijo, en vez de procurar la reducción de esa pensión de alimentos en el seno del proceso constitucional de amparo, éste tiene el derecho de solicitar la misma pretensión en la vía correspondiente, como las dos instancias judiciales previas lo han advertido. EXP. N° 4018-2004-AA/TC. LIMA.

SENTENCIA 6

El Tribunal Constitucional declara improcedente la acción de amparo interpuesta por Gracia Francisca Aljovín contra la Jueza del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Lima.

Los marcadores textuales más representativos son:

Asunto	
Antecedente	A fin de que, asimismo, pues, por el contrario
Fundamento	A pesar de que, en tal sentido
Fallo	

Por el contrario

El conector **por el contrario** es contraargumentativo y se caracteriza por oponer o contrastar dos partes del discurso. La ubicación de este marcador permite proyectar una fuerza argumentativa del enfatizador y (*que*) para marcar el contraste.

La ubicación textual de este marcador en antecedentes es intraoracional. Identificamos que va entre comas lo que permite introducir una información nueva.

*Señala que el estado de necesidad del demandante no fue acreditado con pruebas ni documento alguno, y que, **por el contrario**, su patrimonio se ha*

incrementado al haber fallecido su padre un mes después de haberse admitido la demanda. EXP. N° 0465-2003-AA/TC. LIMA.

Luís Cortés y María Matilde Camacho (2005: 197) ubican a este marcador como contraargumentativo. Estos autores señalan “La idea preponderante nunca será la de la unidad encabezada por el marcador concesivo”. En este caso cumple con lo planteado por los autores porque con fuerza aparece en el segundo miembro que su patrimonio se ha incrementado.

SENTENCIA 7

El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda.

A continuación, anotamos algunos marcadores textuales:

Asunto	
Antecedente	Más aún
Fundamento	Además, aunque, consecuentemente.
Fallo	

Además

El marcador *además* cumple en este caso una función aditiva que es reforzada por la conjunción y lo que permite una intensificación discursiva. Este marcador se ubica como un inciso en fundamentos donde advierte que no ha sido contestada la demanda por lo tanto, no podrá ser dilucidada por el Tribunal Constitucional. Esta información nueva permite asignar al último elemento discursivo mayor fuerza argumentativa.

- a. Que el recurrente no ha acreditado con medios probatorios suficientes la demolición de la que habría sido objeto. En efecto, salvo la notificación que corre a fojas 2, en autos no obra documento alguno emitido por la emplazada, situación que, **además**, y al no haber sido contestada la demanda, no puede ser dilucidada por el Tribunal Constitucional.

- b. Que, a tenor de lo expuesto por el propio demandante a fojas 10 de autos, la emplazada le comunicó que había sido estafado por el transfiriente del inmueble que ocupaba y que carecía, de una Licencia de Construcción conforme a derecho. EXP. N° 1317-2002-AA/ TC. ANCASH.

SENTENCIA 8

El Tribunal constitucional declara fundada la demanda.

Los marcadores textuales son los siguientes:

Asunto	
Antecedente	Pues, en consecuencia
Fundamento	Esto es, por ende, consecuentemente
Fallo	

Consecuentemente

Se dice que en el grupo de conectores el marcador *consecuentemente* es una variante del marcador por consiguiente. Se caracteriza porque posee una antecedente y un consecuente. La fuerza argumentativa del conector desencadena una conclusión. La ubicación textual al inicio del párrafo seguida de una coma da al marcador esta condición de consecuencia. En este caso al no haberse acreditado que el decreto se haya aplicado retroactivamente la demanda perdió sustento. Observamos que la coma cumple un valor dentro del elemento discursivo. Lo que permite inferir un sentido claro de conclusión.

Consecuentemente, y al no haberse acreditado que el Decreto Ley N.º 25967 se haya aplicado retroactivamente para calcular la pensión del recurrente, la demanda pierde sustento. EXP. N° 1624-2002-AA/TC.

SENTENCIA 9

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda.

Los marcadores textuales son los siguientes:

Asunto	
Antecedente	En ese sentido, asimismo
Fundamento	Por consiguiente, así como
Fallo	

Por consiguiente

El marcador *por consiguiente* es considerado por Luís Cortés y María Matilde Camacho (2005) como un marcador argumentativo de consecuencia. La ubicación textual de este marcador es al inicio de párrafo final de fundamentos. La coma señala la consecuencia de una demanda posiblemente desestimada. Observamos que guía la inferencia teniendo en cuenta el significado consecutivo de los hechos que conlleva a una decisión o fallo.

1. *Por consiguiente, habiéndose acreditado la amenaza del derecho a la protección del discapacitado consagrado en el artículo 7° de la Constitución, la presente demanda deberá ser estimada. EXP. N° 1624-2002-AA/TC.*

SENTENCIA 10

El Tribunal Constitucional declara fundada la acción de amparo.

Los marcadores textuales son los siguientes:

Asunto	
Antecedente	Por consiguiente, sin embargo
Fundamento	Por lo tanto, debido a que, sin embargo
Fallo	

Por lo tanto

La ubicación textual del marcador *por lo tanto* es intraoracional. Este marcador va entre comas y cumple de acuerdo al contexto el rol de marcador

consecutivo y no de relacionante de causalidad. En este contexto el sentido está marcado por la consecuencia al vulnerar sus derechos constitucionales al trabajo.

1. *Se aprecia de la Carta de Despido N.º 975-GDAY-ESSALUD-2002 (a fojas 9) que, invocándose el artículo 31.º del Decreto Legislativo N.º 128, aprobado por el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, se despidió a la demandante por la comisión de faltas graves y el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, en el concurso público de méritos en el que participó; sin embargo, el emplazado no ha seguido el procedimiento preestablecido en la ley, puesto que no cumplió con cursarle la carta de preaviso concediéndole no menos de seis días para que efectuara sus descargos, como lo manda el mencionado dispositivo legal; **por lo tanto**, se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de defensa. EXP. N° 1804-2003-AA/TC. AYACUCHO.*

3.2.2 Uso de las categorías discursivas: tópico, foco, tema y rema

Las categorías discursivas tema y rema permiten dar cuenta de una coherencia interna en la estructura argumental de las sentencias. La coherencia textual está organizada por una información conocida (tema) y una información nueva (rema).

Según Vilarnovo (1990:232), para que un texto logre una coherencia textual parte de la teoría de la coherencia textual formulada por Danés (1970). El texto tiene dos momentos en su construcción:

- La constitución del discurso
- El discurso constituido

Vilarnovo (1990) concluye: “Por tanto, no hay ningún problema para que se entienda por tópico del discurso el rema, porque en el discurso ya constituido tema y rema coinciden”. Antonio Vilarnovo (1990:232).¹⁴

¹⁴ Vilarnovo, Antonio (1990) “Coherencia textual: ¿Coherencia interna o coherencia externa?”, en E.L.U.A Estudios de Lingüística. ISSN 0212-7636, N°6, 1990, pp.229-239. 15 de diciembre de 2008, 13:30 h http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6572/1/ELUA_06_12.pdf

Analizaremos la coherencia por medio del texto mismo. La finalidad será articular el tema y el rema para la construcción del esquema argumentativo de la sentencia.

La constitución del discurso está conformada por la progresión de tema lineal, la progresión del tema constante y la progresión del tema derivado.

SENTENCIA 1 EXP. N° 835-2002-AA/TC.

1.- Progresión de tema lineal

La empresa Full Line S.A. interpone acción de amparo contra las empresas Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú S.A.

TEMA: la empresa Full Line S.A.

REMA: interpone acción de amparo contra las empresas Hombrecitos de Color S.A. Y Telefónica del Perú S.A.

En esta progresión hay un intercambio de roles tema-rema lo que permite la construcción global del texto.

Las empresas Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica contestan la demanda a la empresa Full Line S.A.

TEMA: Las empresas Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú

REMA: contestan la demanda a la empresa Full Line S.A.

2. Progresión del tema constante

La empresa Hombrecitos de Color S.A. no ha acreditado contar con las facultades necesarias para que, en representación de Telefónica del Perú S.A. , requiera el cobro de la deuda. Si bien la empresa Telefónica del Perú S.A. no ha efectuado que constituyen amenaza constitucional, conforme lo afirma en el escrito de la contestación de la demanda(...) . EXP. N° 835-2002-AA/TC.

Observamos que se repite el mismo tema de la frase al mismo tiempo que se agrega información no conocida. Por tal razón, la progresión del texto se orienta a un contexto pragmático donde la empresa cumple un rol de persona objeto. Además, los

enunciados explícitos e implícitos tienen que ver con el contexto. Todo ello nos conduce a la reconstrucción del texto a través de la jerarquización de las ideas.

3. Progresión de tema derivado

La progresión parte de lo inductivo –deductivo y viceversa para la construcción del texto. Hay macroestructuras que permiten la relación entre texto y tema. Todos los subtemas con sus respectivos remas deben responder a una unidad temática.

TEMA CENTRAL: Probabilidades de amenaza a la imagen y a la buena reputación de la empresa denunciante

Subtema 1 : La empresa Full Line S.A. interpone acción de amparo contra las empresas Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú S.A.

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara fundada la acción de amparo interpuesta por Full Line S.A.
Tópico	Por Full Line S.A.
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	Declara fundada la acción de amparo

SENTENCIA 1 EXP. N° 835-2002-AA/TC.

SENTENCIA 2 EXP. N° 0425-2003-AA/TC

La sentencia presenta la siguiente progresión textual:

1. Progresión lineal

El recurrente interpone acción de amparo contra la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna.

TEMA: el recurrente

REMA: interpone acción de amparo contra la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna.

La Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna contesta la demanda.

TEMA: La Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna

REMA: contesta la demanda

2. Progresión del tema constante

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundadas las excepciones propuestas, y revoca el extremo que declara fundada la demanda, y, reformándola, la declara improcedente en todos sus extremos, por considerar que de los documentos que obran en autos no se acredita la disminución del monto de la pensión del recurrente. EXP. N° 0425-2003-AA/TC

Identificamos que se repite el mismo tema de la frase a lo largo de toda la exposición de los antecedentes. Un mismo tema se va incorporando sucesivamente diversas ideas e informaciones. Observamos un contexto pragmático donde se emplean tecnicismos jurídicos.

3. Progresión del tema derivado

TEMA CENTRAL: El demandante es presunto autor de delito de contrabando.

Subtema 1 : El recurrente interpone acción de amparo contra la sentencia de la Segunda Fiscalía provincial Mixta de Tacna.

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de amparo interpuesta por Javier Mendoza alegre.
Tópico	Con fecha 4 de mayo de 2002
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	declara infundada la demanda de amparo interpuesta por Javier Mendoza Alegre.

SENTENCIA 2 EXP. N° 0425-2003-AA/TC

SENTENCIA 3

La sentencia presenta la siguiente progresión textual:

1. Progresión lineal

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Presidente del Comité Técnico del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao y el Jefe del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao. EXP. N° 2700-2006-PHC/TC.

TEMA : el recurrente

REMA : interpone demanda de hábeas corpus contra el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Presidente del Comité Técnico del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao y el Jefe del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao.

3. Progresión de tema constante

El recurrente señala que lleva trece años recluso sin condena, siendo privado de sus derechos a la libertad de culto, a ser asistido por un consejero espiritual, a la educación, a la libertad de creación individual, a la información, a la libertad de expresión y a los beneficios penitenciarios. EXP. N° 2700-2006-PHC/TC.

Notamos que a un mismo subtema de privación se le van asignando ideas diferentes, pero que guardan relación con el subtema del párrafo.

4. Progresión del tema derivado

TEMA CENTRAL: Presunta vulneración de los derechos fundamentales de los sentenciados por terrorismo.

Subtema 1: El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Ministro de Justicia.

Subtema 2 : El recurrente solicita su traslado a un penal de máxima seguridad para civiles.

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda en lo referido al traslado del interno a otro establecimiento penitenciario.
Tópico	En lo referido
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	fundada la demanda en lo referido al traslado del interno a otro establecimiento penitenciario

SENTENCIA 3 EXP. N° 2700-2006-PHC/TC

SENTENCIA 4 EXP. N°2655-2002-AA/TC

La sentencia tiene la siguiente constitución:

1. Progresión del tema lineal

El recurrente interpone la demanda de amparo contra Petróleos del Perú.

TEMA : el recurrente

REMA : interpone la demanda de amparo contra Petróleos del Perú.

La emplazada propone las excepciones de la falta de legitimidad para obrar del demandado.

TEMA : la emplazada

REMA : propone las excepciones de la falta de legitimidad para obrar del demandado.

Identificamos una sucesión ordenada de la información conocida y la información nueva.

2. Progresión de tema constante

El demandante no ha acreditado la violación de derecho constitucional alguno, porque de los propios medios probatorios (demandante) se aprecia que se le está pagando su pensión mensualmente. EXP. N° 2655-2002-AA/TC.

Notamos la repetición del mismo tema de frase / el demandante.

4. Progresión del tema derivado

TEMA CENTRAL: Presunta vulneración de sus derechos laborales para tener una pensión renovable.

Subtema 1 : El recurrente solicita que la demanda reajuste de forma periódica las pensiones renovables.

SENTENCIA 4 EXP. N°2655-2002-AA/TC

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para hacer valer su pretensión con arreglo a ley.
Tópico	Dejando a salvo.
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	Declara improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para hacer valer su pretensión con arreglo a ley.

SENTENCIA 4 EXP. N°2655-2002-AA/TC

CAPÍTULO IV: GENERALIZACIÓN DE LA ARGUMENTACIÓN EN LOS TEXTOS JURÍDICOS

4.1 Generalización lingüística

Formalizaremos los resultados del análisis efectuado en el capítulo anterior para dar cuenta del uso de las palabras que conllevan a una configuración del sentido del discurso en las sentencias.

4.1.1 Ambigüedad

La ambigüedad tiene su realización en las palabras polisémicas. El campo léxico va de acorde con las características del texto jurídico. Los tecnicismos en contextos no determinados provocan ambigüedad léxica.

Veamos los siguientes ejemplos:

- Concreción y lesión de los bienes jurídicos.
- La lesión de derechos diferentes al de la libertad.
- Según el parte médico, el demandante sufrió una lesión grave.

En este caso las redes léxicas dan información del contenido referencial del texto. La palabra lesión es ambigua desde la legislación legal por lo que se hace necesario interpretarlo en un contexto jurídico y con el Código Penal. La lesión, en materia penal, será una falta cuando genera una incapacidad física de una persona no más de diez días según prescripción médica y será un delito cuando supere los diez días, cuando se cause la lesión con intención. En el ámbito léxico jurídico se presenta este tipo de ambigüedad de modo frecuente. Un tipo de ambigüedad léxica son las palabras de autos y alimentos que pasa de un léxico común al léxico jurídico. Otros términos utilizados por los jueces son los participios (internada y procesada). La palabra internada se aplica tanto para el objeto como a la persona indistintamente. Observemos el siguiente ejemplo:

- La procesada fue internada. .
- El auto fue internado en el depósito policial.
- Los internos provocaron un motín.

Los aforismos latinos pueden provocar ambigüedad porque se le atribuye diversos significativos. El caso de *in fine* es utilizado en el léxico jurídico y el litigante o el lector común puede tener confusión al momento de comprender o interpretar la sentencia.

a. La ambigüedad y su incidencia en la producción y redacción de sentencias

La ambigüedad se manifiesta en las palabras polisémicas provocando imprecisiones comunicativas. Su incidencia en la producción y redacción de sentencias parte de las características propias de las resoluciones judiciales. Entre los ejemplos más representativos tenemos:

- de cartera de cobranza
- la lesión de los derechos
- internada, procesada
- alimentos

Consideramos que el criterio creador del juez parte de una interpretación descriptiva y normativa que se evidencia en la sentencia. Es decir, hay dos que asume el juez en el proceso. El criterio de hecho y el criterio de derecho. Estos criterios se ejecutan a partir de la motivación que generan las resoluciones judiciales. Un aspecto importante es la coherencia lógica-textual del tema que permite una secuencia articulada de los argumentos contundentes y precisos.

La construcción de la resolución judicial está sujeta al afinamiento de la destreza comunicativa que permite reforzar la competencia normativa. El uso normativo de cada categoría lexical es importante en el estilo de redacción de las sentencias. Hay un predominio en estas sentencias por la ambigüedad léxica que parte del uso de palabras arcaicas.

Esta ambigüedad puede ser deliberada o no. Todo dependerá de la intencionalidad y el propósito comunicativo del emisor.

b. La ambigüedad y su incidencia en la comprensión e interpretación de sentencias

La ambigüedad es generada por una sintaxis arcaizante y enrevesada lo que provoca opacidad. Debemos tener en cuenta que los niveles de competencia lingüística de los lectores son diferentes. El proceso de descodificación lingüística debe basarse en una información contextual y en la experiencia del individuo. Observemos algunos ejemplos identificados en las sentencias:

- La recurrida confirmó la apelada.
- No aparece ninguna fotografía en el expediente, pero el juez deja entrever que se envió alguna copia de la fotografía en lugar de la original.

La situación y el contexto permiten evitar la ambigüedad. Es importante señalar que la ambigüedad léxica es frecuente en los problemas de comprensión.

RASGO PROTOTÍPICO DE ESPECIFICIDAD DEL CAMPO

- La redundancia de la frase preposicional con términos fosilizados (de fojas). La redundancia en el uso de FP de autos.

*Recurso extraordinario interpuesto por don Javier Luis Mendoza Alegre contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, **de fojas 404**, su fecha 16 de diciembre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo **de autos**. (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 045-2003-AA/TC).*

- Los conectores que son adverbios pueden provocar ambigüedad. La palabra *asimismo* puede actuar como adverbio o función de ordenador. En este caso la comprensión es confusa porque la palabra *asimismo* en este contexto es irrelevante porque necesita un conector consecutivo que sirva de topicalizador.

*Telefónica del Perú S.A.A. contesta la demanda señalando que la relación contractual **que tiene con la empresa Hombrecitos de Color S.A.** es de*

*naturaleza civil, pues se trata de un contrato de locación de servicios, y que ello no significa que **tengan** alguna responsabilidad en la labor que **realiza la citada empresa** con relación a las estrategias y métodos de cobranza para hacer efectiva la acreencia que tienen a su favor. Asimismo, propone la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva.* (Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line S.A. expediente N° 835-2002-AA/TC).

- Tecnolecto: Este léxico jurídico surge como necesidad para comunicar e informar. Las sentencias presentan ciertas palabras de uso frecuente en el campo léxico jurídico: a resolver la cuestión de fondo, Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima (múltiples adjetivos), de fojas, de autos, corre en autos. Esta información léxica es uno de los aspectos más importantes en la reconstrucción de la estructura del texto. La definición del procesado y sus diversas instancias.
- La palabra foliar significa numerar las hojas de un expediente. La creación de la jerga judicial.
- El uso de extensiones semánticas: fue internado en los almacenes de la Aduana de Tacna.
- El uso de locuciones: giro de negocios, corre de autos.

4.1.2 Vaguedad

- a. La vaguedad y su incidencia en la producción y redacción de sentencias

Observamos en algunas sentencias una falta de precisión y de claridad. Esto se debe en primer lugar, a la supresión de información relevante para la comprensión del texto. En segundo lugar, la producción intencional “ostensión” permite a través de la codificación transmitir el mensaje con un propósito comunicativo a diferentes receptores con diversos niveles de competencia lingüística.

En este caso es fundamental el criterio creador del juez quien regula el sentido de la norma y su alcance. Veamos siguientes ejemplos de vaguedad del lenguaje:

- Ha celebrado con la citada empresa (...) no específica de manera directa si se refiere a la empresa Hombrecitos de Color.
- El uso de palabras indefinidas puede provocar vaguedad si evidenciamos una laguna jurídica.
- El vehículo había sido fabricado en 1994, cuando, en realidad, se presuponía que el año correcto era 1991.

En este último ejemplo la falta de precisión y claridad presupone un sentido diferente que quiere darle el juez a la sentencia. Además, la falta de datos (lagunas) contribuye a crear huecos o vacíos en la información.

Finalmente, la pretensión es dar cuenta de un fallo o decisión de suma importancia para el procesado. Se debe tener en cuenta en la decisión la descripción ordenada de los hechos relevantes como también la fundamentación jurídica de la pretensión.

b. La vaguedad y su incidencia en la comprensión e interpretación de sentencias

Esta se presenta en los siguientes casos:

- La omisión de determinantes en las construcciones sintagmáticas
- El uso de elementos fosilizados: de fojas
- El uso del presente histórico y luego pasa al pretérito.
- La falta de concordancia : sujeto y verbo
- La imprecisión léxica de la frase: de cartera de cobranza
- Imprecisión en el uso de los conectores
- Imprecisión en los datos expuestos en el fundamento de las sentencias.
- Uso inadecuado del sufijo derivativo: refinanciación
- Imprecisión en la información: comercial en el territorio. Las secuencias oracionales son extensas cuyo propósito es informar con tono sentencioso una decisión judicial.
- Uso inadecuado de los verbos: vulnerarían es inapropiado, debe decir estarían vulnerando sus derechos.

- La vaguedad en las palabras amenaza y vulneración.
- El inadecuado uso del gerundio produce confusión y falta de claridad.

Consideramos que el uso de las palabras empleadas en las diferentes sentencias marca una configuración de sentido en el discurso jurídico. Las estrategias argumentativas estarán vinculadas con las palabras o giro que se utilizarán a lo largo de la sentencia. Los aspectos léxicos y gramaticales serán enfocados en relación con las categorías pragmáticas jurisdiccional (sentencias, autos, providencias). Es importante reconocer tanto la función informativa como apelativa. La finalidad de persuadir y refutar también se hace evidente en las sentencias. El estilo de redacción de las sentencias llega al extremo de ser incomprensible para el lector común por sus frases hechas y giros idiomáticos del lenguaje jurídico. Y así, junto a las características señaladas también añadimos que es altisonante.

Un aspecto interesante es cuando un término no puede precisarse y necesita un conocimiento previo para comprenderlo. La palabra *habitualmente*, *posteriormente* son casos de ejemplo tipo. La palabra *posteriormente* establece una separación incorrecta entre *intervenir* y *detenido*. No precisa si hay una orden judicial o un fragante delito. Esto significa que, la interpretación de cada oración debe corresponder a lo expresado por el emisor a través de las premisas expresas e implícitas.

Finalmente, es importante tener en cuenta el tipo de destinatario para que pueda descubrir las premisas faltantes a través de un proceso de inferencia a partir de su experiencia acumulada.

4.1.3 Conectores argumentativos

Los conectores presentan las siguientes características:

- Utiliza los conectores contraargumentativos, consecutivos y de contraste en mayor frecuencia.
- Usa operadores argumentativos. La existencia de reforzadores e intensificador en la exposición de la sentencia.
- Emplea reformuladores de tipo rectificatorio y explicativo.

- La ubicación en el texto de los marcadores en el texto es importante para identificar el elemento topicalizador.
- Conectores que son adverbios pueden provocar ambigüedad.

a. Presencia de marcadores textuales en la dinámica discursiva

Las sentencias seleccionadas del Tribunal Constitucional cumplen con las reglas de formación de un texto. En primer lugar, la regla de repetición permite la cohesión en cada párrafo. Esto permite dar continuidad al tema. Los subtemas en algunos casos no están claramente definidos en la sentencia. En segundo lugar, la regla de progresión temática es aplicada a cada sentencia a partir de un esquema argumentativo. Consideramos importante un esquema argumental donde se respete el principio de congruencia y se realice una valoración de los hechos relevantes de manera jerárquica. En tercer lugar, la progresión textual está orientada al tema lineal y en menor medida a la progresión de tema constante y al tema derivado.

FUNDAMENTOS

1. Conforme se aprecia de fojas 14 a 16, la empresa Hombrecitos de Color S.A. mediante cartas de fechas 20 de junio, 26 de junio y 11 de julio de 2000, requirieron a la demandante el pago de la suma de S/. 567.24, por no haber abonado el consumo correspondiente al servicio telefónico N° 421-7012, asimismo, en ellas proponían llegar a un acuerdo de refinanciación, advirtiéndole que, en caso contrario, iniciarían las acciones legales correspondientes, solicitarían medidas cautelares y pondrían esta situación en conocimiento de las principales centrales de riesgo para el registro de la deuda, para así imposibilitar el acceso a créditos en las instituciones del sistema financiero y comercial en el territorio. EXP.N° 835-2002-AA/TC.

La explicación debió estar al inicio de la demanda y en la contestación. Los marcadores discursivos más utilizados son conector, comentador, operador y en menor medida modelador (posteriormente, finalmente, rápidamente).

El conector contraargumentativo de contraste es utilizado con frecuencia. Establece un tipo de dinámica compuesta a través del conector “en caso contrario”. La variable discursiva cumple la función de conclusión.

SENTENCIA 1 EXP. N° 835-2002-AA/TC

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara fundada la acción de amparo interpuesta por Full Line S.A.
Tópico	Por Full Line S.A.
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	Declara fundada la acción de amparo

Este argumento es coherente. La garantía facilita el dato para que se llegue a una conclusión. Esto nos permite visualizar los encadenamientos de argumentos.

Garantía	Protección al Derecho Constitucional al honor y a la buena reputación
Apoyo	Constitución Política del Perú Artículo 200 inciso 2° Ley 2356
Dato	Giro de negocio en el cobro de obligaciones a terceras personas con arreglo a ley.
Conclusión	<i>En caso contrario</i> , se vulnerarían los derechos al debido proceso y a la defensa.

Esto nos permite comprender que el cobro de obligación a terceras personas es ejecutable siempre y cuando no se vulnere los derechos constitucionales que ampara a toda persona.

Ahora bien, es posible notar que la secuencia expositiva incluye lo descriptivo y deliberativo. La parte resolutive está sustentada por la parte cognitiva que se organiza a partir del conocimiento de los hechos (datos) y la normativa (ley).

Identificamos dos características la distancia social y el pensamiento ideológico. La distancia social es marcada por una jerarquía. El Tribunal Constitucional como máxima autoridad jurídica y el demandante. Existe una relación asimétrica emisor-

receptor. El pensamiento ideológico está supeditado por la experiencia que tiene el juez a partir del juicio de consciencia y de la doctrina del derecho. Por tanto, la absolución o la condena de un sujeto parte de una actividad entendida como acción jurídica que se manifiesta en un acto jurídico.

Alexy (2007: 97) resalta, asimismo, que la concepción de Austin señala que los actos de habla como condenas, advertencias y consejos pueden ser examinados en consideración a los hechos, pero en el enjuiciamiento de las proposiciones descriptivas son necesarias otras consideraciones incluyendo a los hechos.

Otro aspecto es la preponderancia de la máxima de calidad y pertinencia. A través de los marcadores, el emisor (el Tribunal Constitucional), por un lado comunica e informa los datos de manera verídica (calidad). El principio de relevancia es evidente porque se centra en un tema específico: el cobro de obligaciones por terceras personas.

SENTENCIA 2 EXP. N° 0425-2003-AA/TC

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara infundada la demanda de amparo interpuesta por Javier Mendoza Alegre.
Tópico	Con fecha 4 de mayo de 2002
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	Declara infundada la demanda de amparo interpuesta por Javier Mendoza Alegre.

Herrero (2006:80) expresa: “Un texto bien organizado debe combinar los elementos estables (temas), compartidos ya por los interlocutores, y los elementos nuevos (remas) que hacen avanzar la información. La manera de dosificar y de organizar lo ya conocido con las informaciones nuevas va constituyendo la progresión informativa y señalando al mismo tiempo el tipo de comprensión que implica o exige el texto”. La sentencia guarda una relación lógica de las ideas. La estructura argumental está sujeta a los argumentos expuestos con un razonamiento concreto para cada párrafo.

Tenemos por ejemplo:

Garantía: De revisión de autos acredita la inmovilización del vehículo.

Apoyo : Existe una investigación final y judicial.

Dato: Como señalan diversos documentos que acompañan el expediente.

Conclusión: Hay una presunta comisión del delito de contrabando.

Identificamos una relación asimétrica entre emisor- receptor. Notamos que en el acto participan sujetos sociales con diferentes niveles de competencia comunicativa y lingüística que poseen un pensamiento ideológico. Las ideas de van Dijk (2005:54) marcan este aspecto al considerar a las ideologías sistemas sociales. “Las ideologías son, en sí mismas, tanto sistemas sociales, ya que son compartidas por grupos, como representaciones mentales”. Dentro del contexto peruano el Código Procesal Constitucional protege los derechos constitucionales. Estos son parte del razonamiento de cada argumento expuesto.

Austin (2007: 98) comparte la importancia del acto de habla en su investigación cuando afirma: “el hablar un lenguaje es una actividad guiada por reglas” que permitirán la construcción del performativo a partir de las relaciones jurídicas existentes entre el juez y el procesado.

Tordesillas (2004:344) enfoca su atención al plano locutivo a fin de observar las variables discursivas explícitas e implícitas que constituyen uno de los planos en la configuración semántica de la dinámica discursiva.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la libertad, propiedad, al trabajo y a la libertad de contratación.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2) de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.

DATO	Que no se ha afectado ningún derecho constitucional invocado por el demandante al no haberse acreditado dentro del proceso de amparo.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda de amparo al no haberse afectado ni vulnerado ningún derecho constitucional.

El conocimiento del contexto jurídico involucra no solamente al juez sino también a la otra parte del litigio. Por tanto, el recurrente tiene derecho a apelar hasta la instancia superior a fin de que se resuelva el caso.

SENTENCIA 3 EXP. N° 2700-2006-PHC/TC

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda en lo referido al traslado del interno a otro establecimiento penitenciario.
Tópico	En lo referido
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	Fundada la demanda en lo referido al traslado del interno a otro establecimiento penitenciario

Herrero (2006:79) explica “en un texto, el rema hace avanzar la comunicación y el tema contribuye a mantener la cohesión y la estabilidad”. La progresión textual de la sentencia posee premisas que tienen razonamientos claramente estructurados. Observamos una articulación natural entre tema y rema.

El esquema argumental puede ser explicado desde la perspectiva de Ducrot (1984) al señalar los elementos constitutivos: enunciador, locutor y sujeto hablante.

Este Colegiado no comparte las afirmaciones del demandante. Conforme dispone el artículo 63° del Código de Ejecución Penal”. Exp. N° 2700-2006-PHC/TC.

Identificamos en la exposición de un enunciador que asume el rol de “compartir”. El locutor coincide con el enunciador. En tal sentido, el esquema argumental está constituido por enunciados encadenados donde la fuerza argumentativa es importante para continuar con la intención comunicativa que se persigue.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la vida a la dignidad a la integridad física y psicológica que se considera como derechos constitucionales conexos deben ser protegidos.
APOYO	Proceso de hábeas corpus previsto en el artículo 200 inciso 1° de la Constitución Política del Perú y el artículo 25 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.
DATO	La sentencia expedida ha determinado que sólo se ha afectado el derecho a la libertad religiosa al no recibir asistencia espiritual de un sacerdote.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda en lo referido al traslado del interno a otro establecimiento penitenciario y respaldar el respecto a la libertad religiosa del mismo, ordenando que el interno reciba la visita de un sacerdote católico.

SENTENCIA 4 EXP. N°2655-2002-AA/TC

Enunciado	El Tribunal Constitucional declara improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para hacer valer su pretensión con arreglo a ley .
Tópico	Dejando a salvo.
Tema	El Tribunal Constitucional
Rema	Declara improcedente la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para hacer valer su pretensión con arreglo a ley.

La sentencia expone una serie de encadenamientos entre la información nueva y la información conocida. El derecho a la pensión bajo el Régimen D.L. 20530 necesita un conjunto de razonamientos que deben confrontarse con la realidad de las partes.

Los beneficios laborales deben corresponder con los principios y normas legales. Cada caso tiene un contexto determinado. Es un campo donde se argumenta con autoridad jurídica.

ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

GARANTÍA	El derecho a la pensión bajo Régimen D.L. 20530
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2° de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 inciso 20 del Código Procesal Constitucional.
DATO	Que no se ha afectado el derecho a la pensión del recurrente que viene percibiendo con los incrementos en su monto.
CONCLUSIÓN	Declarar IMPROCEDENTE la demanda dejando a salvo el derecho del recurrente para hacer valer su pretensión con arreglo a ley.

Van Dijk (2005: 59) señala: “cómo las ideologías pueden a su vez adquiridas y reproducidas por los grupos y sus miembros, en particular por medio de la comprensión, la distribución, la abstracción y la generalización del discurso”. En tal sentido, el autor plantea que el discurso es contextual y las ideas que se exponen dan ese dinamismo de apertura a la confrontación en un contexto determinado que genera todo un proceso en la comprensión del discurso.

- Las estrategias argumentativas en el discurso jurídico

Las estrategias argumentativas son seleccionadas de acuerdo con la intención o el propósito del emisor (locutor). Bango de la Campa y María Luisa Donayre

(2006:171) señalan: “La descripción lingüística de los enunciados deberá dar cuenta de su función argumentativa, de su inscripción en una determinada dinámica discursiva que le da sentido. Igualmente, las relaciones entre enunciados deberán analizarse desde dinámicas discursivas que la configuran”. En otras palabras, la dinámica discursiva permite la articulación de enunciados que cumplen una determinada función discursiva que se evidencia en una estrategia que asume el locutor para lograr su propósito e intención comunicativa.

Las principales estrategias argumentativas utilizadas en las sentencias son:

- Estrategias basadas en el argumento de autoridad

Esta estrategia muestra la norma y las leyes que se ampara el juez para fundamentar su fallo. Ducrot (1986) denomina citación de autoridad. Veamos los siguientes ejemplos:

Si bien las condiciones de su reclusión se flexibilizaron una vez concluido el gobierno de Alberto Fujimori –en que fue sometido a un régimen de crueldad de acuerdo a lo señalado por la Cruz Roja Internacional–, el reducido número de reclusos del penal le impide entablar relaciones normales con otras personas y revertir, en cierta forma, el daño psicológico ocasionado durante el tiempo en que fue sometido al régimen de silencio e inactividad total. Exp. N° 2700-2006-PHC/TC.

En este caso emplea un argumento de autoridad ab ejemplo y recurre a la cita de la jurisprudencia.

- *De acuerdo con los artículos 138° y 139°, inciso 1), de la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida, exclusivamente, por el poder Judicial, pues una de las características de un Estado de derecho es ofrecer jurisdicción a los particulares para la solución de los conflictos que surgen en las relaciones sociales. Fundamentos. EXP. N° 835-2002-AA/TC.*
- *La presunta afectación del derecho de propiedad del demandante, sobre el vehículo de Placa de Rodaje N.° RB-4102, se produjo a partir de la*

investigación policial seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de contrabando. Cabe señalar que el derecho de propiedad alegado está protegido tanto por el inciso 16) del artículo 2º de la Constitución, como por el artículo 70º. Fundamentos. EXP. N° 0425-2003-AA/TC.

- Estrategias basadas en la atenuación

Observamos que denota una acción producida por el juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal. La atenuación implica el contexto donde se produce la comunicación. En este caso el insuficiente manejo de datos produce la vaguedad.

- *Asimismo, con fecha 27 de setiembre de 2005, la Juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima se dirigió a los ambientes del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de constatación de la celda en que permanece recluso el demandante (fojas 170). EXP. N° 2700-2006-OH/TC.*
- *Como es de verse, de autos se advierten situaciones controvertibles que no están debidamente esclarecidas. Consecuentemente, al no haberse acreditado suficientemente la pretensión, la demanda debe ser desestimada, **aunque** se deja a salvo el derecho del demandante para hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda. EXP. N° 1317-2002-AA/TC.*

Se dirige a un interlocutor con el propósito de demostrar los hechos. Observamos que apunta al campo pragmático donde se delimita un contexto y una intencionalidad.

- Estrategia basada en la refutación

En esta estrategia se invalida la concesión. Podemos identificar las siguientes características:

- El uso de un lenguaje directo y preciso
- El conocimiento del tema y de los hechos

Veamos el siguiente ejemplo:

Ahora bien, una primera cuestión que el demandante considera que atenta contra sus derechos fundamentales invocados está relacionada con el carácter –civil o militar– del establecimiento penitenciario en el cual se encuentra. Según afirma, está recluso en un establecimiento penitenciario militar, siendo que el sistema penitenciario debe estar bajo el control civil y no militar. El Tribunal Constitucional no comparte esta afirmación del demandante. EXP. N° 2700-2006-PHC/TC .LIMA.

En este caso el Tribunal Constitucional no comparte la afirmación expuesta por el demandante. Ubicamos una exposición de argumentos contrarios que se defienden con un criterio apoyado en la norma y principios.

- Estrategia basada en la nominalización

La nominalización es frecuente en el lenguaje jurídico. En la estructura lógica del enunciado: premisa + argumento + conclusión; notamos que el enunciador emplea como estrategia discursiva la nominalización. Veamos algunos ejemplos:

- los fundamentos expuestos (fundamentar)
- dictar una resolución (resolver)
- la legitimidad (-idad)
- el desistimiento (- miento)
- el archivamiento (-miento)
- la inmovilización (-ción)
- la ejecución (-ción)
- la afectación (-ción)

- Identificación de los principios

Los principios están regidos por el propósito comunicativo de aplicar la igualdad ante la ley, el principio del debido proceso según la tipificación de la falta que conlleva al principio de tipicidad donde las leyes señalan el tipo de delito cometido. Otro principio es de pertinencia que identificamos en la macroestructura de cada sentencia.

4.1.4 Estructura argumentativa

El estudio de la argumentación en términos jurídicos y lingüísticos son importantes teniendo en cuenta lo siguiente:

- La incidencia de una estructura argumentativa en la producción y redacción de las sentencias

Los niveles de representación semántica del texto están constituidos por la macroestructura, la microestructura y la superestructura. La macroestructura nos muestra el significado global del texto. Este nivel de estructura requiere una red de relaciones explícitas e implícitas que parten de una competencia lingüística y comunicativa.

Los elementos constituyentes de la estructura argumentativa son: argumento, conclusión y base argumentativa. Estos elementos son ubicados en la superestructura argumentativa (orden jerárquico de las partes del texto regulado por las macroproposiciones). La organización textual parte de su tipología y es orientado por el propósito e intención del emisor en un contexto y situación determinada (estructura pragmática).

La estructura argumentativa enfoca dos aspectos:

- la enunciación
- la estructura del argumento

La enunciación está constituida por el sujeto hablante, locutor, anunciador y el destinatario. Veamos el siguiente ejemplo:

- Sujeto hablante: los Jueces en Tribunal Constitucional
- Locutor: coinciden en algunos párrafos con el sujeto hablante. Hay una personificación del objeto ideal.

Este Colegiado no comparte las afirmaciones del demandante

- Enunciador: es el protagonista y es quien concede la participación del recurrente en la dinámica discursiva.

Telefónica del Perú S.A. contesta la demanda señalando la relación contractual.

- Destinatarios: especializado (abogado) y no especializado (el recurrente).

El esquema argumentativo que propone Santibáñez (2002: 78) se basa en la propuesta de Toulmin (1958) y Ribano, E (1999). Aplicamos dos tipos de esquemas argumentativos, tanto de Santibáñez como de van Dijk (1996). La propuesta de Díaz (1986:63) complementa lo aportado por los autores anteriores.

La estructura argumentativa tiene tres campos obligatorios: el punto de vista o conclusión, la fundamentación y el garante. Veamos el siguiente ejemplo:

- Conclusión: por lo tanto, se declara fundada la acción de amparo (petitorio de la demanda)
- Fundamentación: razones que la sustentan
F1: El cobro de obligaciones debe ejercer dentro de un contexto de un Estado Democrático de Derecho.
- Garante: principio de la legalidad.

Finalmente podemos indicar que la estructura argumentativa de la sentencias cumplen con una estructura básica: argumento, conclusión y base argumentativa.

- Incidencia de una estructura argumentativa en la comprensión e interpretación de la sentencia

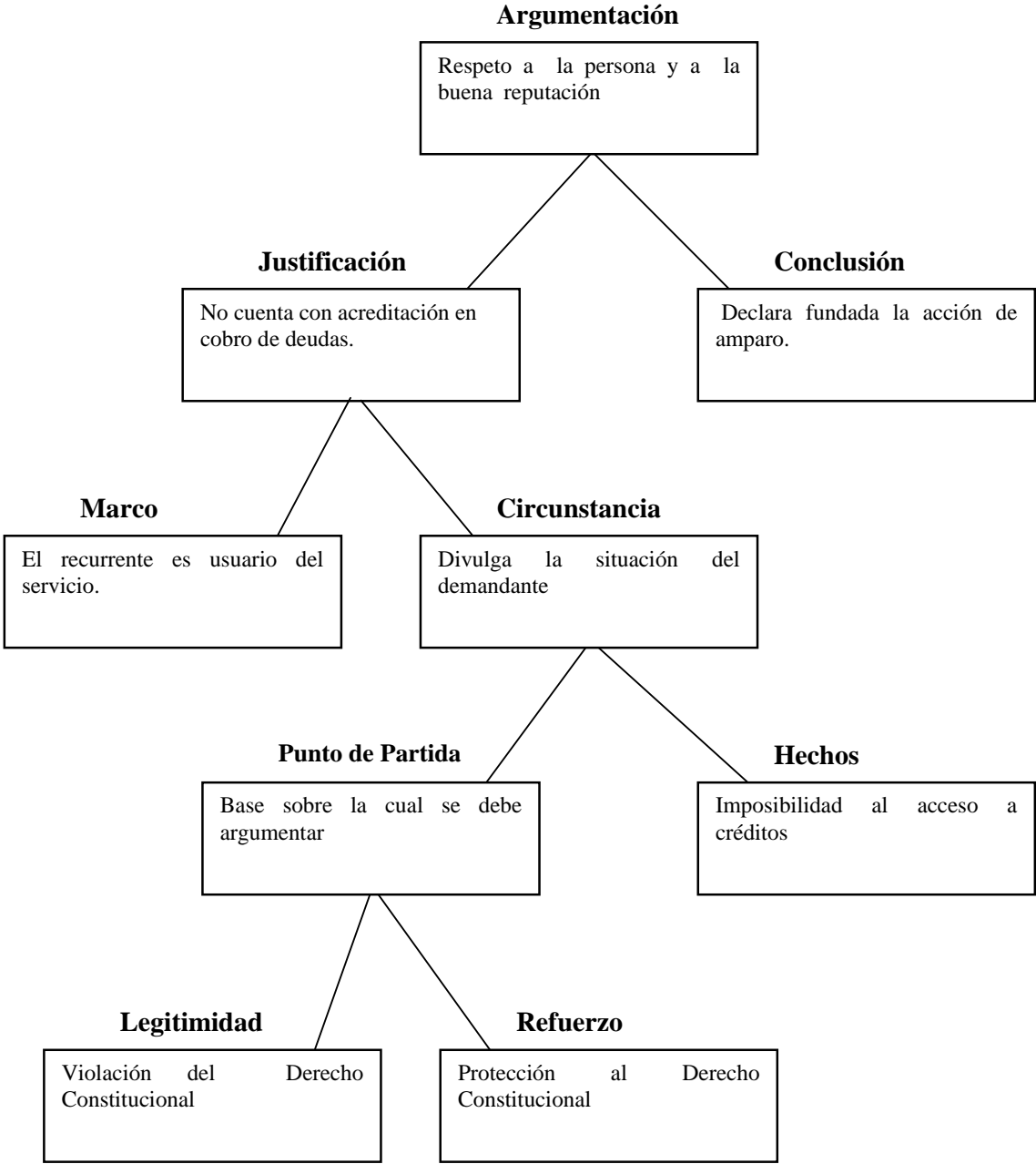
La estructura argumentativa orienta la intención y el propósito del emisor. La eficiencia de la argumentación permite la descodificación del mensaje a partir de un proceso de inferencia.

Identificamos en las sentencias analizadas que no se presenta colisiones, redundancia de normas, incompatibilidad de reglas ni lagunas jurídicas.

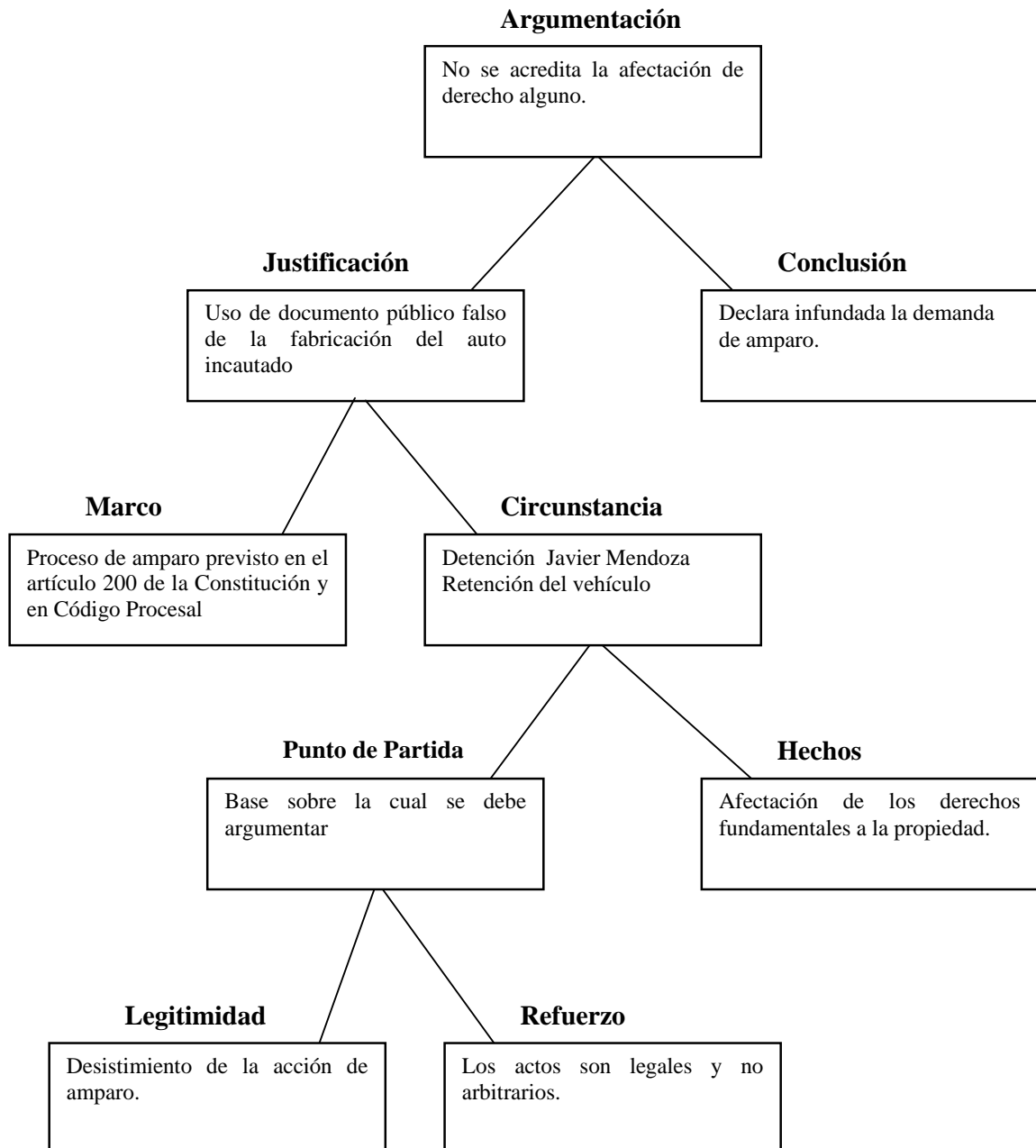
En base a la propuesta de Teun van Dijk (1996), se presentan a continuación los diagramas de la estructura de cuatro sentencias.

Esquema jerárquico de la argumentación

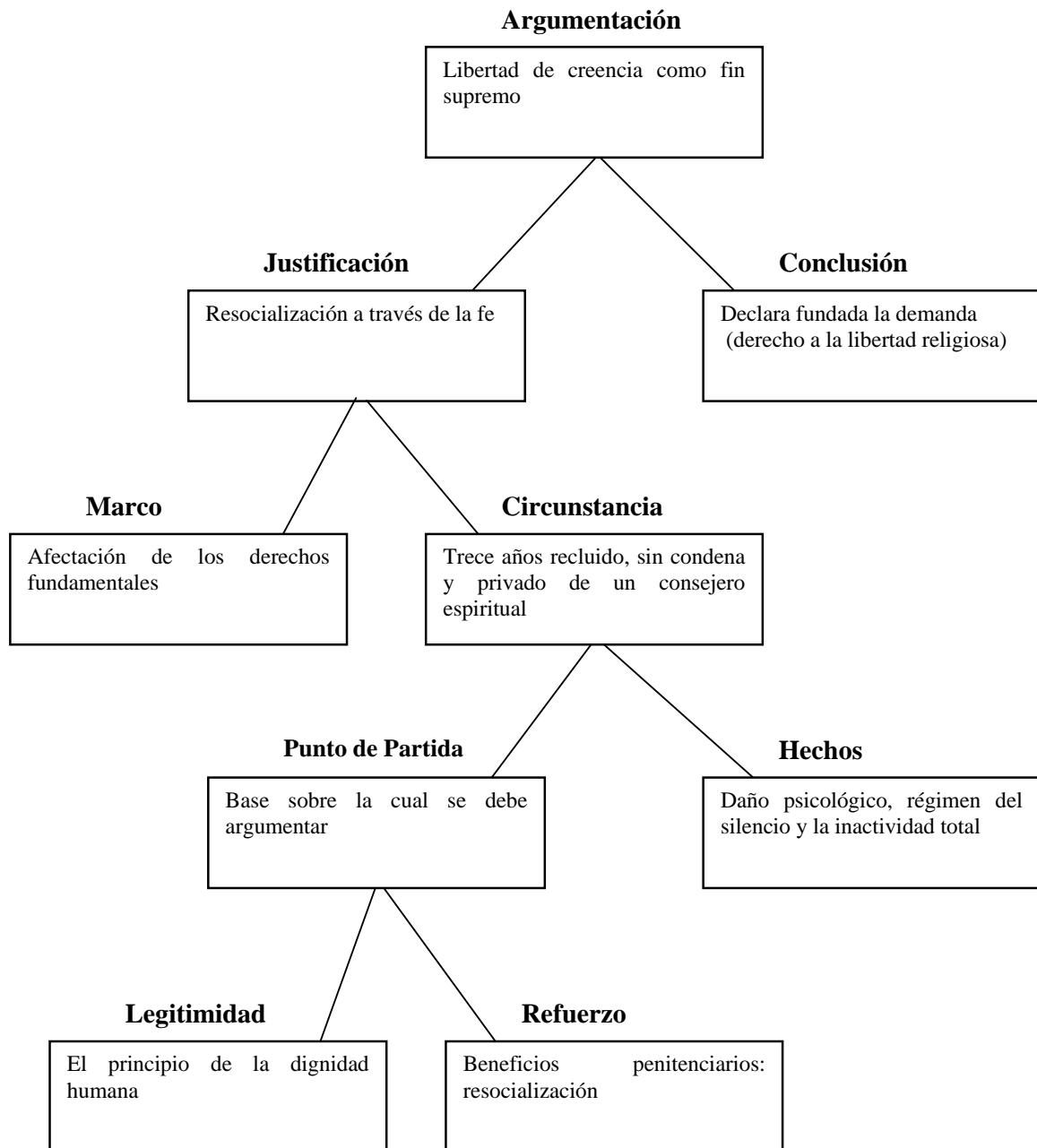
SENTENCIA 1



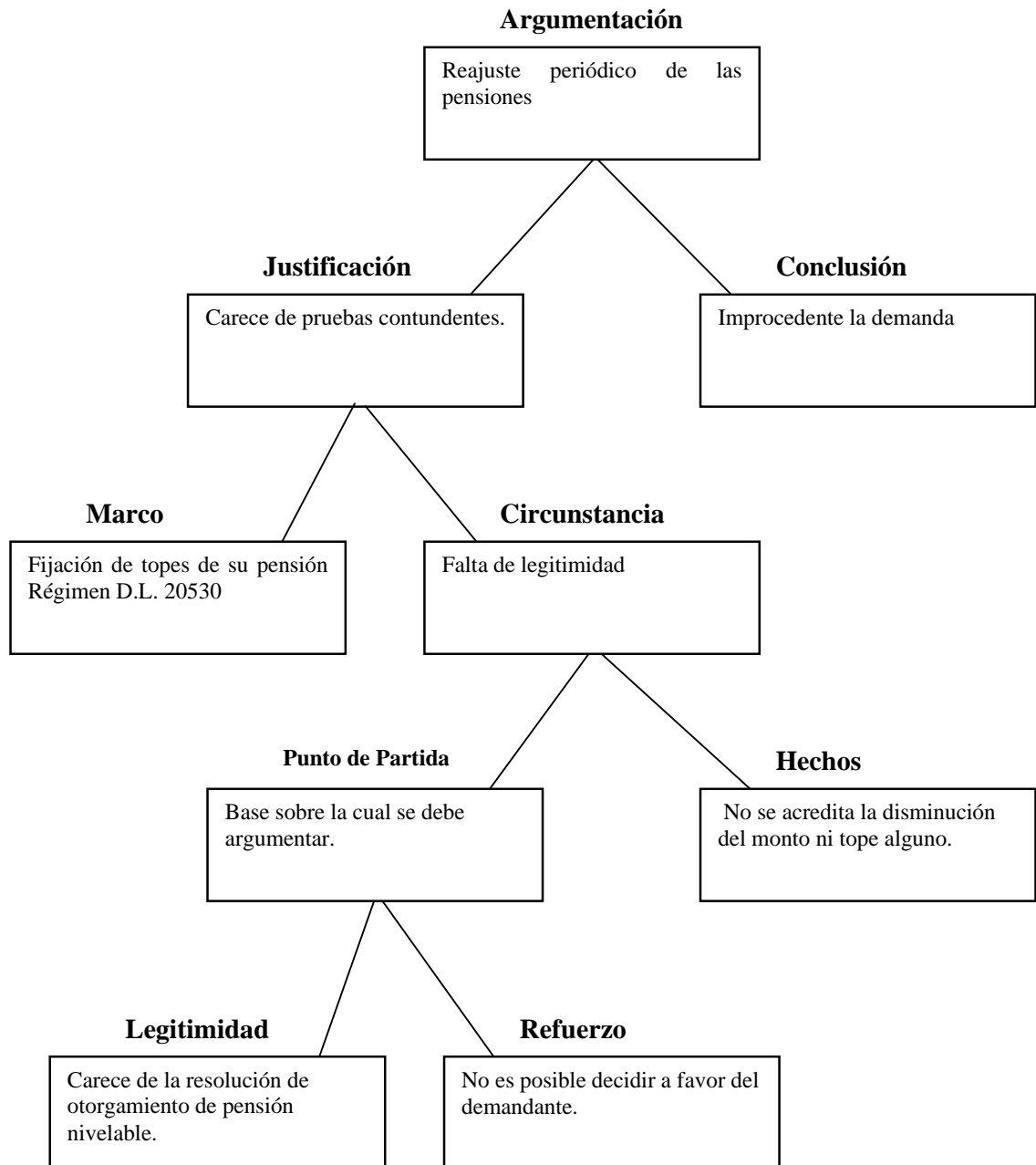
SENTENCIA 2



SENTENCIA 3



SENTENCIA 4



1. ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

Sentencia 1º

GARANTÍA	Protección al Derecho Constitucional al honor a la buena reputación y la imagen.
APOYO	Constitución Política del Perú artículo 200 inciso 2º Ley 2356 Código Procesal Civil
DATO	Jurisprudencia del fundamento N° 5
CONCLUSIÓN	Declarar FUNDADA la acción de amparo.

2. ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

Sentencia 2º

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la libertad, propiedad, al trabajo y a la libertad de contratación.
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2) de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.
DATO	Que no se ha afectado ningún derecho constitucional invocado por el demandante al no haberse acreditado dentro del proceso de amparo.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda de amparo al no haberse afectado ni vulnerado ningún derecho constitucional.

3. ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

Sentencia 3º

GARANTÍA	Los derechos fundamentales a la vida a la dignidad a la integridad física y psicológica que se considera como derechos constitucionales conexos deben ser protegidos.
APOYO	Proceso de hábeas corpus previsto en el artículo 200 inciso 1º de la Constitución Política del Perú y el artículo 25 del Código Procesal Constitucional que protege los derechos constitucionales.
DATO	La sentencia expedida ha determinado que sólo se ha afectado el derecho a la libertad religiosa al no recibir asistencia espiritual de un sacerdote.
CONCLUSIÓN	Declarar INFUNDADA la demanda en lo referido al traslado del interno a otro establecimiento penitenciario y respaldar el respecto a la libertad religiosa del mismo, ordenando que el interno reciba la visita de un sacerdote católico.

4. ARGUMENTO PRINCIPAL. ESQUEMA ARGUMENTAL

Sentencia 1º

GARANTÍA	El derecho a la pensión bajo Régimen D.L. 20530
APOYO	Proceso de amparo previsto en el artículo 200 inciso 2º de la Constitución Política del Perú y el artículo 37 inciso 20 del Código Procesal Constitucional.
DATO	Que no se ha afectado el derecho a la pensión del recurrente que viene percibiendo con los incrementos en su monto.
CONCLUSIÓN	Declarar IMPROCEDENTE la demanda dejando a salvo el derecho del recurrente para hacer valer su pretensión con arreglo a ley.

4.2 Generalización jurídica

SENTENCIA EXP. 835-2002 – AA/TC

Los criterios de hecho y los criterios de derecho son fundamentales en el razonamiento jurídico. En esta primera sentencia el juez valora y pondera el principio en colisión para ello, es necesario aplicar el test de proporcionalidad.

- **Adecuación**

Es adecuada la forma de realizar la cobranza de la deuda mediante cartas de requerimiento indicando las acciones que se aplicarán por incumplimiento de pago.

- **Otras medidas**

Los jueces pueden utilizar otras medidas siempre y cuando no afecten los derechos constitucionales. El juez debe aplicar la ponderación. Podemos determinar que se establecen relaciones de precedencia condicionada de acuerdo a las circunstancias del caso concreto donde prevalece uno de los principios. Lo que se denomina una jerarquía axiológica.

- **El fenómeno jurídico**

En este caso el Tribunal Constitucional ha dado mayor jerarquía al derecho de una buena reputación y a la imagen de la empresa demandante siendo estos principios constitucionales recogidos en la Constitución Política del Perú.

EXP. N° 0425-2003-AA/TC

En el presente caso podemos identificar los siguientes aspectos al expedir la sentencia:

- El derecho a la propiedad, a la libertad de trabajo y a la libertad de contratación.
- El demandante ha cometido un acto ilícito que es materia de investigación.

El juez debe aplicar la ponderación. Advertimos que existe una colisión de principios y aplicando la ponderación se establece una jerarquía axiológica entre principios.

En este caso el Tribunal ha dado mayor jerarquía a la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de uso de documento público falso aplicando en este caso el test de proporcionalidad teniendo en cuenta la idoneidad indispensable y la ponderación.

EXP 2700- 2006-PHC/TC

Podemos identificar los siguientes aspectos:

- Derecho a la libertad de culto
- Derecho a la educación
- Derecho a la libertad de creación intelectual
- Derecho a la información
- Derecho a la libertad de expresión
- Derecho a los beneficios penitenciarios

El juez toma en cuenta la prevención de la seguridad a los reos de alta peligrosidad. La aplicación del principio de ponderación al presentarse una colisión de principios debe nuevamente prevalecer la de mayor jerarquía que sea necesaria o indispensable tal medida que restrinja menos los derechos constitucionales. El Tribunal Constitucional ha dado mayor jerarquía a la prevención de la seguridad interna.

EXP. N° 2655- 2002- 2655-2002-AA/TC

Observamos que la precisión normativa contiene consecuencias claras aplicando la validez de la norma. La aplicación de esta norma es contemplada teniendo en cuenta la especialidad, la jerarquía y la temporalidad.

El Tribunal Constitucional ha tomado en cuenta la condición del pensionista inscrito en el D.L. 20530, por lo que es aplicable dicha norma. Se constata que no existe en autos algún documento que acredite que su pensión haya sido rebajada.

4.2.1 Ambigüedad

Se ha detectado ambigüedad respecto al uso de ciertos términos. No es un término preciso, ni unívoco. Existen problemas de comprensión semántica cuyo contenido debe ser precisado.

4.2.2 Vaguedad

Los datos en la sentencia en muchos casos son insuficientes. Debe expresar las razones de cada decisión judicial para que el proceso de inferencia sea efectivo y no supeditado de interpretación subjetivas.

4.2.3 Lagunas

Las lagunas de derecho no se han detectado porque existen normas jurídicas debidamente aplicadas a la pretensión demandada.

4.2.3 Redundancias

La reiteración de ciertas normas para el mejor entendimiento del recurrente. Es importante tener en cuenta un contenido normativo para la construcción de las sentencias.

4.3 Propuesta de investigación

Propuesta para la mejora de la enseñanza de la argumentación jurídica desde la perspectiva lingüística

- **Pertinencia de la propuesta**

Esta propuesta permitirá optimizar el estilo de redacción de los textos jurídicos.

- **Descripción de la problemática**

La Defensoría del Pueblo en su informe 109, del 2006, advirtió que la terminología incomprensible limitaba el acceso a la justicia. La falta de claridad y naturalidad en las resoluciones judiciales interfieren en la comprensión e interpretación de los textos jurídicos.

- **Importancia**

Es necesario ahondar en el estudio de la argumentación jurídica y lingüística señalando la incidencia en la producción y redacción de las sentencias, así como en la comprensión e interpretación de la misma. La importancia de un estudio interdisciplinario contribuirá a explicar la naturaleza lingüística del derecho.

- **Proyección**

Elaboración de módulos autoinstructivos de acuerdo a los contenidos del curso de español para fines específicos.

- **Objetivo general**

Reforzar las competencias lingüísticas y pragmáticas necesarias para la comprensión, producción e interpretación de los argumentos judiciales.

- **Objetivos específicos**

Perfeccionar las técnicas discursivas para ofrecer una información clara al lector común.

Hacer uso de recursos lingüísticos y retóricos para conseguir diferentes propósitos comunicativos de acuerdo a la estructura argumentativa de las resoluciones judiciales.

UNIDAD I : RESOLUCIONES JUDICIALES

Objetivos

- Propender al uso idiomático de las normas explicitadas en la gramática normativa.
- Comprender la organización textual de las resoluciones judiciales.
- Reconocer el propósito comunicativo de cada texto jurídico.
- Registrar el léxico jurídico de acuerdo a cada resolución judicial: sentencia, autos y decretos.

Funciones comunicativas

- Ser capaz de entender la macroestructura de las resoluciones judiciales.
- Ser capaz de reconocer el propósito comunicativo de los textos jurídicos.

Contenido discursivo

- Elementos de constitución del discurso: la progresión de tema lineal, la progresión del tema constante y la progresión del tema derivado.
- Indicadores o marcas del discurso que muestran un tema y subtemas.

Contenido normativo

- La ortografía de la letra
- La ortografía de la sílaba

Contenido gramatical

- Oraciones compuestas coordinadas
- Oraciones compuestas subordinadas

Contenido léxico y sociocultural

- Latinismos, helenismos y arabismo en lenguaje jurídico

Contenido pragmático

- Elementos de enunciación en las resoluciones judiciales: sujeto hablante, locutor y enunciador

UNIDAD II : ESTRUCTURA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Objetivos

- Reconocer la macroestructura de la resolución judicial.
- Identificar la intención comunicativa de la parte expositiva, considerativa y resolutive.
- Propender al uso idiomático de las normas explicitadas en la gramática normativa.

Funciones comunicativas

- Ser capaz de elaborar una estructura básica de resolución judicial.

Contenido discursivo

- Estructuradores de información: ordenadores, comentadores y digresores
- Conectores: aditivos, consecutivos y contraargumentativos
- Reformuladores: explicativo, rectificativo, recapitulativo, de distanciamiento

Contenido normativo

- Ortografía de la frase
- El sustantivo
- El adjetivo

Contenido gramatical

- Nominalización

Contenido léxico y socio-cultural

- Campo semántico y léxico
- Anglicismo y galicismo en el español jurídico

Contenido pragmático

- El texto monologal y el texto no monologal

UNIDAD III: MICROESTRUCTURAS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

Objetivos

- Analizar la superestructura y microestructura de las resoluciones judiciales.
- Aplicar la normativa morfosintáctica en el uso de los nombres, determinantes, verbos y preposiciones.
- Utilizar los marcadores del discurso según el esquema textual escogido.

Funciones comunicativas

- Ser capaz de elaborar estructuras argumentativas de manera clara y convincente.

Contenido discursivo

- Operadores argumentativos: refuerzo argumentativo y concreción
- Relaciones referenciales endofóricas: anáfora y catáfora
- Relaciones referenciales exofóricas: deixis

Contenido normativo

- Sintaxis normativa. Concordancia

Contenido gramatical

- El verbo: estructura, clases. Tiempo presente histórico
- Formas no personales del verbo
- Usos de infinitivos, gerundios y participios
- Verbos copulativos y predicativos
- Complementos del predicativo y atributo
- Verbos de atenuación y de evidencialidad

Contenido léxico y socio-cultural

- Arcaísmos del lenguaje jurídico. Sintaxis arcaizantes.
- Fórmulas fraseológicas y léxicas. Perífrasis verbal y de obligación

Contenido pragmático

- Locuciones verbales y preposicionales en el lenguaje jurídico

UNIDAD IV: EXPONER LAS RESOLUCIONES JUDICIALES**Objetivos**

- Redactar resoluciones judiciales teniendo en cuenta la organización del contenido para su eficiente transmisión.
- Propender al uso idiomático de las normas explicitadas en la gramática normativa.

Funciones comunicativas

- Ser capaz de fundamentar una decisión judicial teniendo en cuenta los criterios de hecho y derecho.

Contenido discursivo

- Síntesis de ideas.
- Adecuación, aceptabilidad, intencionalidad, informatividad, situación comunicativa e intertextualidad

Contenido normativo

- Sintaxis normativa: conjugación
- Sintaxis normativa: preposición, conjunción, relativo

Contenido gramatical

- El adverbio. Funciones sintácticas

Contenido léxico y socio-cultural

- Ambigüedad en el uso de adverbios y conectores

Contenido pragmático

- Expone y argumenta con claridad y precisión las resoluciones judiciales

Conclusiones

- 1.- La argumentación es un aspecto importante en los textos jurídicos y puede ser abordada por la Lingüística del texto, la semántica y la interpretación jurídica.
- 2.- Los estudios en el campo jurídico deben respaldarse con un análisis textual tanto para la estructura de la sentencia como para la organización de los marcadores argumentativos.
- 3.- En el proceso de elaboración de la sentencia, los elementos constitutivos (el asunto, los antecedentes, los fundamentos y el fallo) deben guardar relación con el esquema argumentativo.
- 4.- Los mecanismos de cohesión observados en las sentencias seleccionadas son la anáfora, la redundancia y, en menor frecuencia, la catáfora.
- 5.- Los recursos léxicos más utilizados son la nominalización, los tecnicismos, la recurrencia de unidades sintagmáticas múltiples, los cambios de los tiempos verbales del presente histórico al pretérito, reiterado uso de la personificación del objeto ideal.
- 6.- Los marcadores textuales están distribuidos en las sentencias, por lo general, al inicio de cada párrafo. El significado de los marcadores es importante dentro de la secuencia discursiva. Hay marcadores que tienen un carácter polisémico lo que deriva en un tipo de ambigüedad léxica.
- 7.- El análisis textual de las sentencias consignadas comprende el aspecto semántico que implica la precisión del significado de las palabras para expresar la voluntad de interpretar la ley.

8.- Desde punto de vista interdisciplinario permite determinar estrategias discursivas como el léxico y la fuerza argumentativa. Los aspectos gramaticales tienen incidencia en la comprensión general de la argumentación. El bajo nivel de la competencia normativa dificulta la comprensión oportuna y precisa del sentido de la sentencia. La aplicación de contenidos diversificados permiten reforzar en la enseñanza del español con fines específicos para la producción, la comprensión e interpretación de la argumentación jurídica son: contenido discursivo, contenido normativo, contenido gramatical, contenido léxico, sociocultural y contenido pragmático.

9.- Teniendo en cuenta el análisis de las normas, la interpretación jurídica permite al juez la aplicabilidad de los principios.

10.- El estudio se encuentra en relación con dos elementos básicos de la afirmación y de la negación en mérito a los cuales se ha determinado la ambigüedad o vaguedad de las sentencias como queda en cada caso debidamente puntualizado para los efectos de la correcta aplicación de la semántica jurídica.

11.- La palabra en los textos jurídicos tienen un significado, pero es interpretado en diferentes sentidos. La ambigüedad surge cuando el contexto no es determinado y existe insuficiente datos.

12.- La estructura argumentativa de las sentencias orientan la dinámica discursiva y la construcción del sentido de la misma.

13.- Las estrategias argumentativas utilizadas en las sentencias son el argumento de autoridad, la atenuación, la refutación y la nominalización.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIBROS

- ALCARAZ VARÓ, E. [y] B. HUGHES (2002) *El español jurídico*. Barcelona, Ariel.
- ALEXYY, R. (2007) *Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso como teoría de la fundamentación jurídica*. Lima, Palestra Editores.
- ASCOMBRE, Jean – Claude [y] DUCROT, Oswald (1994) *La argumentación de la lengua*. Madrid, Editorial Gredos.
- ATIENZA, Manuel (2006) *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*. Lima, Palestra Editores.
- BERNÁNDEZ, Enrique (1982) *Introducción a lingüística del texto*. Madrid, Espase Calpe S.A.
- CABANELLAS, G (2002) *Diccionario jurídico elemental*. (10ª. Ed.) Lima, Editorial Heliasta.
- CASADO Velarde, Manuel (1998) “Lingüística del texto y marcadores del discurso”. En: María A. Martín Zorraquino y E. Montolío (eds). *Los Marcadores del discurso. Teoría y análisis*, pp. 55-70, Madrid, Arco Libros.
- CORTÉS, Luís y Camacho, María Matilde (2005). *Unidades de segmentación y marcadores del discurso*. Madrid, Arco Libros.

- DE ARNOUR, Elvira (2004) *Homenaje a Oswald Ducrot*. Buenos Aires, Eudeba.
- DE BEAUGRANDE, R. y DRESSLER, W (1997) *Introducción a la lingüística del texto*. Barcelona, Ariel.
- DE ZUBIRÍA Samper, J. (2006). *Las competencias argumentativas: La visión desde la ecuación*. Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio.
- DÍAZ, Á. (1986) *La argumentación escrita*. Cali, Editorial Universidad de Antioquia.
- Diccionario Real Academia Española (1992). *Diccionario de la lengua española*. (21 a.ed.). Lima: Espasa Calpe.
- *Diccionario de Uso del Español Actual* (2002). Madrid, Editorial SM.
- DUCROT, Oswald (1986). *El decir y lo dicho*. Barcelona, Editorial Paidós.
- ESCANDEL Vidal, M. (2004). *Fundamentos de semántica composicional*. Barcelona, Ariel.
- FUENTES, Catalina (1996). *La sintaxis de los relacionantes supranacionales*. Madrid, Arco.
- GARCÍA, A. [y] GASCÓN, M. (2005). *La argumentación en el derecho*. Lima. Palestra Editores.
- GARCÍA Izquierdo, Isabel (1998). *Mecanismos de cohesión textual. Los conectores ilativos en español*. Castelló en la plana: Publicacions, Universitat Jaume, Colección Verbum.
- GARCÍA Negroni, María [y] TORDESILLAS Colado, Marta (2001). *La enunciación en la lengua: de la deixis a la polifonía*. Madrid, Editorial Gredos.

- GUTIÉRREZ, G. (1998) *Vocabulario de uso judicial. Vocablo y expresiones de uso frecuente en la práctica judicial* Lima, Gaceta Jurídica.
- HALLIDAY, M. “Estructuras y función del lenguaje”. En: *John Lyons, Nuevos horizontes en lingüística*, Madrid, Alianza, 1977.
- HERRERO Cecilia, Juan (2006). *Teorías de pragmática, de análisis textual y del análisis del discurso*. Murcia, Editorial Universidad de Castilla la Mancha.
- JESÚS DE BUSTOS TOVAR, José, Silvia Iglesias (eds.) (2000). *Lengua, discurso, texto: I Simposio Internacional de Análisis del Discurso*. Volumen I, Madrid, Universidad Complutense de Madrid..
- LO CASCIO, Vincenzo (1991). *Gramática de la argumentación*. Madrid, Alianza Editorial.
- MARTIN Zorraquino, María y PORTOLÉS, J. (1999). “Los Marcadores del Discurso”. En: I. Bosque y V. Demonte (eds.), *Gramática Descriptiva de la Lengua Española*.
- MEDEROS, H. (1988). *Procedimientos de cohesión en el español actual*, Santa Cruz de Tenerife. Cabildo Insular.
- MEYER, Michel. (1982) *Logique, langage et argumentation*, París, Hachette.
- MONTOLÍO DURÁN, E. (1998) “La teoría de la relevancia y el estudio de los marcadores discursivos”. En: Martín Zorraquino, M. A. y Montolío Durán, E. (eds.) *Los marcadores del discurso: teoría y análisis*. Madrid. Arco-Libros, págs. 93-120.
- NARVAJA de Arnoux, Elvira [y] García Negroni, María Marta (2004). *Homenaje a Oswald Ducrot*. Buenos Aires, Eudeba.
- NÚÑEZ, Rafael y DE TESO, Enrique (1996) *Semántica y pragmática del texto común. Producción y comentarios de textos*. Madrid, Editorial Cátedra.

- PERELMAN, Ch. [y] OLBRECHETS – TYTECA, L. (1989) *Tratado de la argumentación: La nueva retórica*. Madrid, Cremos.
- PORTO Dapena, José Álvaro (2002). *Complementos argumentales del verbo: Directo, indirecto, suplemento y agente*. Madrid, Arco Libros.
- PUIG, Luisa (1991). *Discurso y argumentación: Un análisis semántico y pragmático*. Ciudad de México D.F. Universidad Autónoma de México.
- RENKENA, Jan (1999). *Introducción a los estudios sobre el discurso*. Barcelona, Gedisa
- REYES, Graciela (2003). *Manual de redacción. Cómo escribir bien en español*. Madrid, Arco Libros.
- RIVANO, Emilio (1999). *De la Argumentación*. Santiago, Bravo y Allendes Editores.
- SÁNCHEZ Fernández, Luís M. (1999). *Argumentación jurídica y teoría del derecho: la crítica actual del positivismo jurídico*. Arequipa, El Alva.
- SÁNCHEZ Fernández, Luís M. (2004). *Argumentación jurídica: Un modelo y varias discusiones sobre los problemas del razonamiento judicial*. Lima, Editores Jurista.
- SANTIBÁÑEZ Yáñez, Cristián (2002) *Teorías de la Argumentación. Ejemplo y análisis*. Talcahuano, Cosmigonon Ediciones.
- TOULMIN, Stephen (2007). *Los usos de la argumentación*. Barcelona, Ediciones Península.
- VAN DIJK, Teun A. (1996) *La ciencia del texto*. Barcelona, Paidós.

- VAN DIJK, T. (Comp.) (2005). *El discurso como interacción social. Estudios sobre el discurso II Una introducción multidisciplinaria*. Barcelona, editorial Gedisa.
- VAN EEMEREN, Frans, et. al. (2006). *Argumentación: análisis, evaluación, presentación*. Buenos Aires, Editorial Biblos.

JURISPRUDENCIA

- *Sentencia del Tribunal Constitucional en el proceso de amparo interpuesto por la empresa Full Line. EXP. N° 835-2002-AA/TC*. [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html .
- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0425-2003- AA/TC. TACNA. Javier Mendoza Alegre*. . [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html .
- *Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2700-2006-PH/TC. LIMA. Víctor Polay Campos*. . [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html .
- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 2655-2002-AA/TC. LIMA. Luís Augusto Sala Herrera*. [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html .
- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 4018-2004-AA/TC.LIMA. Narvin Augusto Canales Rimarchi*. . [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html .

- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0465-2003-AA/TC. LIMA. Gracias María Francisca Aljovin de Lozada.* [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html .
- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 1317-2002-AA/TC. ANCASH. Venancio de Paz Quito.* [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html .
- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 0700-2004- AA/TC. LAMBAYEQUE. Baltazar de los Reyes Silva.* [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html
- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 1624-2002- AA/TT. LIMA. Salvador Fernández Servat.* [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html.
- *Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N° 1804-2003-AA/TC. AYACUCHO. Juana Teodora Vega.* [en línea]. Perú Tribunal Constitucional del Perú. Recuperado el 16 de agosto del 2008: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/tot_publicados.html

TRABAJO NO PUBLICADO Y PRESENTADO EN UN EVENTO

- TORDESILLAS, Marta (2007). *Notas personales de investigación, proporcionadas por la autora quien las preparó con motivo del Congreso de Lingüística* auspiciado por la Universidad Ricardo Palma , celebrado en Lima, Perú, bajo el título de Lingüística General: semántica argumentativa y enunciativa, pág. 81.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

- BARBIERI, Javier H. (2004). “De los tópicos a la sentencia”. En: Jorge Guillermo Portela, Francisco Puy Muñoz (coord.), *La argumentación jurídica: problemas de concepto método y aplicación*. Santiago de Compostela. Editorial Universidad de Santiago de Compostela. ISBN 84-9750-365-1, pp.141-168.
- GARCÍA Negroni, María (2005). “Sin embargo y no obstante trasgresión argumentativa y polifonía”. En: *Actas del sexto congreso latinoamericano de estudios del discurso*. Santiago. Pontificia Universidad Católica de Chile.
- MARCHANTE, María Pilar. (2004). *Los marcadores contraargumentativos aplicados a la enseñanza del español como lengua extranjera. Una propuesta didáctica*. Revista Interlingüística, Nº15, 2, pp. 841-850.
- PORTOLÉS, J. (1993) *La distinción entre los conectores y otros marcadores del discurso en español*, Verba, 20 págs. 141 -170.
- TORDESILLAS, Marta (1993). “Conectores y operadores: una diferencia de dinámica argumentativa”. En: *Revista de filosofía Francesa nº 3*, pp. 233-244. Madrid, U.C.M.
- VILARNOVO, Antonio (1990) “Coherencia textual: ¿Coherencia interna o coherencia externa?”. En *E.L.U.A Estudios de Lingüística*. ISSN 0212-7636, Nº6, 1990, pp.229-239. 15 de diciembre de 2008, 13:30 h. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/6572/1/ELUA_06_12.pdf

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

- BANGO DE LA CAMPA, Flor María y María Luisa Donayre (2006). “La concesión como estrategia argumentativa”. En: *Actas del XXXV Simposio internacional de la Sociedad Española de Lingüística*, editadas por Milka

Villayandre Llamazares, León, Universidad de León, Dpto. de Filología Hispánica y clásica, 2006. [en línea]. ISB: 84-690-3383-2. Recuperado de: <http://www3.unileon.es/dp/dfh/SEL/actas.htm>. [2008, 10 setiembre].

- FRÍAS Conde, Xavier (2001). “Introducción a la pragmática”. En: *Revista Philologica Románica*. [en línea]. Recuperado de <http://www.romaniaminor.net/ianua/sup/sup05.pdf> . [2008, 21 de julio].
- GUASTINI, Riccardo (1997). “Problemas de interpretación”. En: *Isonomía: Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. N° 7, pp.121 -131. [en línea]. Recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04704174522681695209079/Isonomia07/isonomia07_03.pdf. [2008, 18 de octubre].

TESIS

- DE LA FUENTE GARCÍA, M. (2006). *La argumentación en el discurso periodístico sobre la inmigración*. Universidad de León. [en línea]. España. Edilnet Recuperado de http://www.dissoc.org/recursos/tesis/Tesis_Garcia.pdf[2008, 10 de noviembre].

ANEXO

SENTENCIA 1

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE AMPARO INTERPUESTO POR LA EMPRESA FULL LINE S.A.

EXP. No. 835-2002-AA/TC

FULL LINE S.A.

En Lima, a los 10 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Full Line S.A. contra la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 211, su fecha 25 de junio de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de julio de 2000, la empresa recurrente interpone acción de amparo contra la empresa Hombrecitos de Color S.A. y Telefónica del Perú S.A., con el objeto de que se abstengan de continuar realizando actos como la carta de requerimiento de pago de fecha 11 de julio de 2000 y la fotografía adjunta, en la que se aprecia a personas vestidas de manera singular y llamativa y portando carteles con frases denigrantes, con el propósito de divulgar información de la demandante, pues considera que ello amenaza su derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa al honor y a la buena reputación. En consecuencia, solicita que las demandadas hagan valer su derecho de cobranza en la vía legal y solicitan el pago de costos y costas del proceso.

Telefónica del Perú S.A.A. contesta la demanda señalando que la relación contractual que tiene con la empresa Hombrecitos de Color S.A. es de naturaleza civil, pues se trata de un contrato de locación de servicios, y que ello no significa que tengan alguna responsabilidad en la labor que realiza la citada empresa con relación a las

estrategias y métodos de cobranza para hacer efectiva la acreencia que tienen a su favor. Asimismo, propone la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva.

Hombrecitos de Color S.A. contesta la demanda señalando que es una empresa constituida de acuerdo a ley, cuyo objeto es la administración de cartera de cobranza, gestión de recuperación judicial y extrajudicial de las deudas y demás actividades afines, añadiendo que efectivamente curso cartas a la demandante con la finalidad de que cumpliera con hacer efectivo el pago de la obligación pendiente a favor de Telefónica del Perú S.A.A. Por último, manifiesta que no ha enviado fotografía alguna a la empresa demandante.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en derecho Público de Lima, con fecha 31 de agosto de 2000, declaró fundada la excepción de la propuesta e improcedente la demanda por considerar que la fotografía original a la que se alude en la demanda no obra en autos, y que se alude en la demanda no obra en autos, y que la parte emplazada ha negado haberla remitido.

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que la controversia planteada requiere de la actuación de medios probatorios.

FUNDAMENTOS

2. Conforme se aprecia de fojas 14 a 16, la empresa Hombrecitos de Color S.A. mediante cartas de fechas 20 de junio, 26 de junio y 11 de julio de 2000, requirieron a la demandante el pago de la suma de S/. 567.24, por no haber abonado el consumo correspondiente al servicio telefónico N° 421-7012, asimismo, en ellas proponían llegar a un acuerdo de refinanciación, advirtiendo que, en caso contrario, iniciarían las acciones legales correspondientes, solicitarían medidas cautelares y pondrían esta situación en conocimiento de las principales centrales de riesgo para el registro de la deuda, para así imposibilitar el acceso a créditos en las instituciones del sistema financiero y comercial en el territorio.

3. De acuerdo con los artículos 138° y 139°, inciso 1), de la Constitución, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y es ejercida, exclusivamente, por el poder Judicial, pues una de las características de un Estado de derecho es ofrecer jurisdicción a los particulares para la solución de los conflictos que surgen en las relaciones sociales.
4. Tal como lo ha establecido este Colegiado en la sentencia recaída en el expediente N° 2790-2002-AA/TC, si bien la empresa Hombrecitos de Color S.A. puede tener como giro de negocio el cobro de obligaciones a terceras personas, ello debe ejercerse dentro de un contexto de un estado democrático de derecho, con arreglo a ley y previa acreditación de las facultades correspondientes. En caso contrario, se vulnerarían los derechos al debido proceso y a la defensa, consagrados en el artículo 139°, incisos 3) y 14), de la Constitución Política del Perú.
5. En el caso de autos, la empresa Hombrecitos de Color S.A. no ha acreditado contar con las facultades necesarias para que, en representación de Telefónica del Perú S.A.A., requiera el cobro de la deuda. Si bien la empresa Telefónica del Perú S.A.A. no ha efectuado directamente los actos que constituyen amenaza constitucional, conforme lo afirma en el escrito de la contestación de la demanda, lo cual, de conformidad con el artículo 221° del Código Procesal Civil, constituye declaración asimilada, ha celebrado con la citada empresa un contrato civil para que proceda a la cobranza de deudas; en tal sentido, asume las consecuencias de los actos realizados por la empresa Hombrecitos de Color S.A. en cumplimiento del referido contrato, motivo por el cual debe desestimarse la excepción de falta de legitimidad para obrar pasiva.
6. Por otro lado, está demostrado en autos, mediante las cartas de requerimiento notariales, que la empresa Hombrecitos de Color S.A. amenaza los derechos a la buena reputación y a la imagen de la empresa demandante, que han sido reconocidos como derechos fundamentales por este Tribunal constitucional para las personas jurídicas, en la sentencia N° 0905-2001-AA/TC, al pretender poner en conocimiento de las principales centrales de riesgo su situación si es que no

cancela la deuda pendiente, para así imposibilitarle el acceso a créditos en el sistema financiero y comercial en el ámbito nacional, lo cual ocasionaría que la demandante no cumpla sus fines sociales.

7. Por último, no se encuentra acreditado en autos que la empresa Hombrecitos de Color S.A. haya adjuntado a las cartas de requerimiento de pago la fotografía cuya copia obra a fojas 17-15.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, El Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere, Ha resuelto:

1. Declarar INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado.
2. Declarar FUNDADA la acción de amparo.
3. Disponer que las partes emplazadas se abstengan de continuar realizando prácticas de cobranza de la deuda que atenten contra los derechos constitucionales y que hagan valer su derecho conforme a ley.
4. Declarar FUNDADA la pretensión de pago de costos y costas del proceso, los que se deben liquidar en ejecución de sentencia.

Publíquese y notifíquese.

(Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional en el proceso de amparo expediente N° 835-2002-AA/TC)

SENTENCIA 2

EXP. N.º 0425-2003-AA/TC. TACNA. JAVIER LUIS MENDOZA ALEGRE

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Presidente; Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Javier Luis Mendoza Alegre contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 404, su fecha 16 de diciembre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 8 de mayo de 2002, interpone acción de amparo contra la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna, el Jefe de la Sección de la Policía Fiscal de Tacna y otros efectivos policiales, por la presunta afectación de sus derechos constitucionales a la propiedad, a la libertad de trabajo, a la libertad de contratación y otros, aduciendo que, con fecha 4 de mayo de 2002, fue intervenido por los demandados sin que medie orden judicial o investigación específica, siendo posteriormente detenido de manera irregular, procediéndose a la retención del vehículo de su propiedad, con placa de rodaje N.º RB-4102, por lo que solicita se le restituya la propiedad de éste.

La Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Tacna contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada, por falsa, temeraria y tendenciosa, pues su intervención y los actos practicados en su condición de funcionario, son legales y no arbitrarios.

A fojas 164 corre el escrito de desistimiento de la acción de amparo presentado por el demandante, en lo que respecta al Jefe de la Sección de la Policía Fiscal de Tacna y demás efectivos policiales demandados, escrito que en sus alcances fue precisado a fojas 212 y siguientes. Dicha solicitud fue aceptada en la sentencia del Primer Juzgado Civil de Tacna.

El Primer Juzgado Civil de Tacna, con fecha 31 de julio de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que el demandante es presunto autor del delito de contrabando, razón por la cual el vehículo materia de litis fue internado en los almacenes de la Aduana de Tacna, pretendiendo el recurrente, a través del presente proceso, la devolución del vehículo que es fundamental para la investigación que se está realizando.

La recurrida confirmó la apelada, aduciendo que, como se aprecia de autos, existían indicios razonables de la comisión de un delito, enmarcándose la intervención del Ministerio Público dentro de las funciones previstas en su Ley Orgánica. Asimismo, al haberse dispuesto el archivamiento de la denuncia formulada en su contra, es en dicho proceso en que debe solicitarse la devolución del vehículo incautado.

FUNDAMENTOS

1. La presunta afectación del derecho de propiedad del demandante, sobre el vehículo de Placa de Rodaje N.º RB-4102, se produjo a partir de la investigación policial seguida en su contra, por la presunta comisión del delito de contrabando. Cabe señalar que el derecho de propiedad alegado está protegido tanto por el inciso 16) del artículo 2º de la Constitución, como por el artículo 70º.

2. De la revisión de autos se acredita que la inmovilización del vehículo se encuentra plenamente justificada, dado que en torno a dicho bien gira la investigación fiscal y judicial iniciada contra el accionante, por la presunta comisión del delito de contrabando.

3. La inmovilización o incautación del vehículo, aunque importa una restricción del derecho de propiedad alegado, no constituye una afectación irrazonable o arbitraria, sino que está sustentada en los hechos vinculados con la investigación precitada, con el objeto de verificar los datos correspondientes a las piezas principales del vehículo –el número de serie del motor y chasis–, y para determinar si el vehículo fue ingresado por partes, puesto que existían indicios razonables de ello (documentos de fojas 63 y 84 y siguientes), así como el año en que supuestamente fue fabricado, puesto que se declaró el año 1994, cuando se presumía que el año correcto es 1991.

4. De otro lado, si bien es cierto que el proceso penal seguido en contra del demandante ha quedado archivado, conforme lo expone el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio Público en su escrito de fecha 2 de abril de 2003 (cuadernillo del Tribunal Constitucional), lo cual, a tenor de lo previsto en el artículo 221º del Código Procesal Civil, constituye una declaración asimilada, también lo es que

en dicho proceso es en donde debe solicitarse la devolución del bien incautado, no habiéndose acreditado en autos que el demandante hubiese solicitado su devolución con anterioridad a la fecha de expedición de la presente sentencia.

5. Finalmente, tampoco escapa a este Colegiado que, con fecha 7 de febrero de 2003, se denunció penalmente al demandante por la presunta comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de uso de documento público falso, respecto de los hechos derivados justamente de la determinación del año de fabricación del vehículo incautado, proceso éste que podría tener incidencia en la devolución de dicho bien. En consecuencia, al no acreditarse la afectación de derecho alguno, la demanda debe ser desestimada.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

REVOCANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara **INFUNDADA**. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

(Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 0425–2003–AA/TC)

SENTENCIA 3

EXP. N.º 2700-2006-PHC/TC .LIMA.VÍCTOR ALFREDO POLAY CAMPOS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2007, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Gonzales Ojeda y Vergara Gotelli y, pronuncia la siguiente sentencia

I. ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Alfredo Polay Campos, contra la sentencia de la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos

en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 352, su fecha 29 de diciembre de 2005, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

Con fecha 17 de setiembre de 2004, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Presidente del Comité Técnico del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao y el Jefe del Centro de Reclusión de máxima seguridad de la Base Naval del Callao, por la presunta vulneración de sus derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica; y a la resocialización, reeducación y rehabilitación como fines de la pena. En consecuencia, solicita que se disponga su traslado a un penal de máxima seguridad para civiles, que se encuentre a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPE).

La demanda se fundamenta en los siguientes argumentos:

- El accionante se encuentra en un centro de reclusión militar pese a haber sido condenado, en un primer momento, por el supuesto delito de terrorismo en el fuero común. Asimismo, señala que, si bien en la actualidad su proceso se encuentra en trámite, su permanencia en la Base Naval vulnera el principio de igualdad de armas en el proceso, puesto que deberá responder en juicio por los enfrentamientos ocurridos entre la Marina de Guerra del Perú y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (en adelante MRTA).
- De otro lado, señala que los internos no se encuentran adecuadamente distribuidos, puesto que no se ha tomado en consideración los antagonismos ideológicos y políticos que existen entre los miembros del MRTA y de Sendero Luminoso.
- Si bien las condiciones de su reclusión se flexibilizaron una vez concluido el gobierno de Alberto Fujimori –en que fue sometido a un régimen de crueldad de acuerdo a lo señalado por la Cruz Roja Internacional–, el reducido número de reclusos del penal le impide entablar relaciones normales con otras personas y

revertir, en cierta forma, el daño psicológico ocasionado durante el tiempo en que fue sometido al régimen de silencio e inactividad total.

- Finalmente, señala que lleva trece años recluso, sin condena, siendo privado de sus derechos a la libertad de culto, a ser asistido por un consejero espiritual, a la educación, a la libertad de creación intelectual, a la información, a la libertad de expresión y a los beneficios penitenciarios.

2. Investigación sumaria de hábeas corpus

Realizada la investigación sumaria, se recibe la declaración indagatoria del demandante, quien se ratifica en el contenido de su demanda (fojas 18 a 22). Por su parte, los demandados coinciden en señalar que el tratamiento de los internos del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao está a cargo del INPE y que el demandante ha sido recluso en dicho establecimiento, junto a otros civiles, por ser considerado un reo “de alta peligrosidad”. Asimismo, niegan que esté siendo víctima de algún tipo de afectación a su integridad física o psicológica, más aún si el régimen de reclusión impuesto al recurrente se ha ido flexibilizando gradualmente. Finalmente, descartan la necesidad de que sea trasladado a otro establecimiento penitenciario puesto que el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao está adecuadamente preparado para prevenir cualquier tipo de enfrentamiento entre los integrantes del MRTA y Sendero Luminoso (fojas 32 a 40, 193 a 206 y 213 a 214).

Asimismo, con fecha 27 de setiembre de 2005, la Juez del Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de Lima se dirigió a los ambientes del Centro de Reclusión Especial de la Base Naval del Callao, con el objeto de llevar a cabo la diligencia de constatación de la celda en que permanece recluso el demandante (fojas 170).

3. Resolución de primer grado

Con fecha 27 de octubre de 2005, el Cuadragésimo Sexto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda en el extremo en que alega la vulneración de los derechos a la vida, a la dignidad, a la integridad física y

psicológica, a la socialización y a la rehabilitación. Asimismo, declara fundada la demanda en el extremo relativo al INPE, disponiendo que una vez culminado el proceso judicial se efectúe una clasificación y se traslade al demandante, de ser el caso, a otro establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Finalmente, declara improcedente la demanda respecto de aquellos emplazados que, a la fecha, no se encuentran ejerciendo el cargo por el cual fueron demandados.

4. Resolución de segundo grado

Con fecha 29 de diciembre de 2005, la Primera Sala Especializada en lo Penal para Procesos de Reos en Cárcel, declaró infundada la demanda por considerar que no se ha acreditado la existencia de una efectiva vulneración a los derechos fundamentales invocados en la demanda, más aún si las actuaciones de los demandados se han ajustado a las normas reglamentarias que regulan la materia.

III. FUNDAMENTOS

Precisión del petitorio de la demanda

1. Del análisis integral de lo actuado se desprende que el demandante pretende que el Tribunal Constitucional ordene su traslado a un penal de máxima seguridad para civiles y que esté a cargo del INPE. Considera que, al estar recluso en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (en adelante, CEREC), se afectan sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la integridad física y psicológica; y a la resocialización, reeducación y rehabilitación como fines de la pena.

Análisis constitucional del caso concreto

2. Previamente a resolver la cuestión de fondo, el Tribunal Constitucional estima pertinente señalar que el proceso constitucional de hábeas corpus no sólo protege la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende a otros derechos fundamentales. En efecto, su tutela comprende también la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan reclusas en establecimientos penales e incluso

de personas que, bajo una especial relación de sujeción, se encuentran internadas en establecimientos de tratamiento, públicos o privados.

3. Por ello, es legítimo que ante la afectación de tales derechos fundamentales o de aquellos derechos directamente conexos al de la libertad personal o ante la lesión de derechos diferentes al de la libertad, cuya afectación se genere como consecuencia directa de una situación de privación o restricción del derecho a la libertad individual, puedan ser protegidos a través del proceso de hábeas corpus, que la tipología elaborada por la doctrina ha denominado como *hábeas corpus correctivo*.

Sobre la naturaleza –civil o militar– del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao

4. Ahora bien, una primera cuestión que el demandante considera que atenta contra sus derechos fundamentales invocados está relacionada con el carácter –civil o militar– del establecimiento penitenciario en el cual se encuentra. Según afirma, está recluso en un establecimiento penitenciario militar, siendo que el sistema penitenciario debe estar bajo el control civil y no militar. El Tribunal Constitucional no comparte esta afirmación del demandante.
5. Ello por cuanto que, de conformidad con la Disposición Final Única del Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS, de fecha 19 de agosto de 2001,

“El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa podrán celebrar, con la participación del Instituto Nacional Penitenciario y la Marina de Guerra del Perú, Convenios de Cooperación Interinstitucional relacionados con la administración del CEREC, regulación del régimen de vida y tratamiento y el desarrollo de las acciones de tratamiento de los internos reclusos en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao”.

6. Si bien es cierto que la custodia de los procesados y sentenciados que están en el CEREC está a cargo de efectivos de la Marina de Guerra del Perú, ello no convierte, necesariamente, a dicho establecimiento penitenciario en uno de carácter militar, por cuanto que según el artículo 41º del mencionado Decreto Supremo, es el Comité Técnico, presidido por el Presidente del INPE –en representación del Ministerio de

Justicia–, un representante de la Defensoría del Pueblo entre otros, el que asume la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del Reglamento del CEREC. Por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimada.

7. La segunda cuestión que el demandante considera lesivo de sus derechos fundamentales es que, al estar recluso conjuntamente con miembros de Sendero Luminoso no se le permite que se desarrolle como persona, dadas las profundas diferencias políticas e ideológicas que existe con aquellos. Este hecho, según afirma, no le permite realizar una convivencia social adecuada; lo que sí lograría, según dice, si es que se le permitiera relacionarse con otras personas que tengan afinidad, amistad, cultura y estudios semejantes.
8. Este Colegiado no comparte las afirmaciones del demandante. Conforme dispone el artículo 63° del Código de Ejecución Penal:

“El interno es clasificado en grupos homogéneos diferenciados, en el Establecimiento Penitenciario o sección del mismo que le corresponda, determinándose el programa de tratamiento individualizado”.

Ello quiere decir que la clasificación de los internos se realiza en función de criterios objetivos y técnicos con la finalidad de que se elabore y determine el programa de tratamiento individualizado de cada interno. Lo que obedece a la necesidad de que se dé cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 139° inciso 22 de la Constitución del Estado. Por ello es que existen “Normas de Clasificación para internos Procesados y/o Sentenciados a nivel nacional” (Directiva N.º 001-97-INPE/DGT).

9. Es más, de acuerdo con el Código de Ejecución Penal (artículo 11°) y con su Reglamento (artículo 46° del), la orientación ideológica y política no son criterios técnicos de clasificación de los internos tal como lo ha previsto el legislador; por lo que este Tribunal considera que no se afectan los derechos que invoca el actor por el hecho de estar en un establecimiento penitenciario en el cual se encuentran también internos con distinta orientación política e ideológica. Claro está, ello no exime a que la autoridad penitenciaria garantice la seguridad e integridad personal de cada uno de los internos.

10. En el caso específico, el demandante se encuentra comprendido dentro de los alcances de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N.° 024-2001-JUS, según el cual el CEREC alberga a los jefes o dirigentes principales de las organizaciones delictivas que se encuentren procesados o sentenciados por delitos de terrorismo, traición a la patria, contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad y por razones fundadas de seguridad nacional; lo que no obsta para que se señale que el régimen penitenciario del CEREC se fundamente en la convivencia pacífica, el trabajo y el desarrollo de actividades culturales y educativas, y la seguridad dentro del respeto a los derechos fundamentales y a la Constitución. En este extremo, por tanto, tampoco este Tribunal encuentra que se hayan afectado los derechos invocados por el demandante.

Sobre el derecho fundamental a la libertad religiosa

11. La tercera cuestión tiene que ver con la supuesta afectación del derecho a la libertad religiosa. El demandante señala que durante trece años se le ha impedido ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa, pues no obstante haber solicitado en múltiples oportunidades la asistencia de un consejero espiritual, dicha solicitud le ha sido denegada. Por su parte, en su declaración de descargo, de fecha 04 de octubre de 2005 (fojas 193) los emplazados no han desvirtuado lo alegado por el demandante.

12. Al respecto, el artículo 2° inciso 3 de la Constitución, reconoce como derecho fundamental de toda persona “(...) la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público”. En sentencia anterior (STC 0256-2003-HC/TC, FJ 15) este Colegiado señaló que

“[l]a libertad religiosa, como toda libertad constitucional, consta de dos aspectos. Uno negativo, que implica la prohibición de injerencias por parte del Estado o de particulares en la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las manifiesten. Y otro positivo, que implica, a su vez, que el

Estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las potestades que comporta su derecho a la libertad religiosa”.

13. Es innegable que el reconocimiento constitucional del derecho fundamental de las personas a profesar una determinada religión, da lugar también al derecho a practicar los actos de culto y a *recibir la asistencia religiosa* correspondiente sin que se atente contra el orden público o contra la moral pública. Y es que la libertad religiosa no sólo se expresa en el derecho a creer, sino también en el derecho a practicarla. Así, una vez formada la convicción religiosa, la fe trasciende el fuero interno del creyente y se exterioriza ya sea en la concurrencia a lugares de culto, a la práctica de los ritos de veneración, e incluso como la adopción de determinadas reglas de trato social (saludo, vestimenta, entre otros).
14. Pero es parte también del contenido, del derecho en mención, recibir la asistencia o consejería religiosa, necesarias para la tranquilidad espiritual de las personas que pudieran encontrarse dentro de un régimen especial de sujeción, como por ejemplo en hospitales, asilos, centros de rehabilitación, centros de formación militar, establecimientos penitenciarios, entre otros. Ello es así en la medida que existe íntima relación de la libertad religiosa con el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1º de la Constitución), por lo que es un derecho que el Estado debe proteger, si bien dentro de los límites previstos en nuestra Constitución.
15. El derecho fundamental a profesar una religión, en consecuencia, está reconocida en la Constitución pero, al igual que los demás derechos fundamentales, no como un derecho absoluto o sin límites. Por ello, negar la titularidad de dicho derecho sería inconstitucional, mas no regular las condiciones de su ejercicio; más aún si el demandante se encuentra recluso en un establecimiento penitenciario de alta seguridad. Por ello, atendiendo a que la Constitución establece como derecho fundamental de todas las personas –incluido los reclusos– a la libertad religiosa –la misma que se asienta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana– y que el principio del régimen penitenciario tiene por objeto reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad, recibir asistencia religiosa como un medio penitenciario y como un fin en sí mismo de resocialización a través de la fe, no

constituye una violación constitucional a los valores del orden público y a la seguridad ciudadana.

16. Dicho esto, es evidente que la persona que se encuentra internada –procesada o sentenciada– en un establecimiento penitenciario no puede ser impedida, *prima facie*, de ejercer su derecho fundamental a la libertad religiosa; siempre que de ello no deriven afectaciones a los derechos fundamentales de los demás o no impliquen actos de intolerancia que pongan en riesgo otros bienes constitucionales como el orden público, la moral, la seguridad de la población, bienes que, según el artículo 44° de la Constitución le corresponde también proteger al Estado. En ese sentido, el Tribunal Constitucional estima que, no habiéndose desvirtuado las afirmaciones, en este extremo, del demandante, el Comité Técnico del CEREC debe evaluar y responder la solicitud del demandante, a fin de no vulnerar su derecho a la libertad religiosa.

Sobre el derecho fundamental a la libertad de información

17. El recurrente también alega la presunta vulneración de su derecho fundamental a la libertad de información, pues afirma que no se le permite conceder entrevistas y conversaciones sobre su situación personal y jurídica que, muchas veces, los medios de comunicación tergiversan y que, por derecho, requiere de rectificaciones. Sobre esto, es pertinente dejar establecido que las personas internadas en un establecimiento penitenciario no pierden sus derechos fundamentales por el mero hecho de estar reclusos, ya sea como procesados o sentenciados.
18. Sin embargo, es igualmente verdad que los derechos fundamentales no son absolutos y, por ende, pueden ser restringidos con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. De ahí que el derecho a la libertad de información puede ser restringido, razonablemente, cuando se trate de garantizar la seguridad personal del interno o la seguridad del establecimiento penitenciario. Esto, sin embargo, no se configura en el caso del demandante, pues, como él mismo lo afirma (fojas 33), tiene acceso a libros y periódicos para lectura y a determinados medios de comunicación (radio, televisión). Motivo por el cual, se aprecia que la autoridad penitenciaria está respetando su derecho a la libertad de información.

Sobre el beneficio penitenciario de la visita íntima

19. Finalmente, el actor cuestiona el hecho que no se le haya otorgado el beneficio penitenciario de la visita íntima. Sobre esta cuestión se ha de señalar que el Tribunal Constitucional ha afirmado (STC 0842-2003-HC/TC, FJ 3) que

[e]n estricto, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, a fin de concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. (...) En efecto, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas. Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de las personas. (...) Por otro lado, no cabe duda que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción del acceso a los mismos, debe obedecer a motivos objetivos y razonables.

20. En ese sentido, la visita íntima en nuestro ordenamiento jurídico-penitenciario y tal como dispone el artículo 58° del Código de Ejecución Penal es un beneficio penitenciario que “tiene por objeto el mantenimiento de la relación del interno con su cónyuge o concubino”. Su concesión, como todo beneficio penitenciario, está sujeto no sólo al cumplimiento de determinados requisitos previstos en el artículo 195° *in fine* del Reglamento del Código de Ejecución Penal, sino también a la valoración positiva que en este caso le corresponde analizar y resolver al Comité Técnico, tal como dispone el artículo 22° del Decreto Supremo N.º 024-2001-JUS y no al Tribunal Constitucional.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

1. Declarar **INFUNDADA** la demanda en lo referido al traslado del demandante a otro establecimiento penitenciario.
2. Declarar **FUNDADA** la demanda en el extremo referido al derecho a la libertad religiosa; en consecuencia, ordena que el Comité Técnico del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, resuelva la solicitud del demandante en el extremo referido a la visita de un sacerdote católico.

Publíquese y notifíquese

LANDA ARROYO

GONZALES OJEDA

VERGARA GOTELLI

(Reproducción libre de la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 2700-2006-PHC/TC)

Sentencia 4

EXP. N.º 2655-2002-AA/TC. LIMA. LUIS AUGUSTO SALA HERRERA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Rey Terry, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Augusto Sala Herrera contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 274, su fecha 15 de agosto de 2002, que declara improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo contra Petróleos del Perú, con objeto de que se le restituyan las pensiones renovables de la que venía gozando y, específicamente, el íntegro de los montos que percibía hasta el 30 de diciembre de 1995, y que a partir de esa fecha se le pague el íntegro de dichas pensiones, sin recorte alguno, así como los devengados e intereses legales.

La emplazada propone las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado, de falta de agotamiento de la vía administrativa, y de prescripción extintiva, y niega y contradice la demanda en todos sus extremos la demanda, alegando que el demandante no ha acreditado la violación de derecho constitucional alguno, porque de los propios medios probatorios se aprecia que se le está pagando su pensión mensualmente y sin retraso alguno, y tampoco la fijación de topes a su pensión, agregando que el pago de los reintegros no es posible a través de esta vía por carecer de etapa probatoria, y que todo reajuste debe efectuarse de acuerdo con las previsiones presupuestarias y las posibilidades de la economía nacional.

El Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 15 de enero del 2002, declara infundadas las excepciones propuestas y fundada, en parte, la demanda, ordenando que la demandada abone la pensión del recurrente sin tope, con el pago de los reintegros correspondientes, e improcedente el pago de intereses.

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundadas las excepciones propuestas, y revoca el extremo que declara fundada la demanda, y, reformándola, la declara improcedente en todos sus extremos, por considerar que de los documentos que obran en autos no se acredita la disminución en el monto de la pensión del recurrente.

FUNDAMENTOS

1. Del estudio de autos se ha podido acreditar que la pretensión de fondo invocada por el demandante, en su calidad de pensionista del Decreto Ley N.º 20530, se refiere al reajuste periódico de las pensiones, esto es, la pensión renovable. Sin embargo, no corre en autos la resolución de otorgamiento de pensión al recurrente, ni documento alguno

que permita a este Colegiado tener la certeza de que el demandante goza de pensión nivelable.

2. De las boletas de pago que obran en autos de fojas 60 a 65, se observa que al demandante se le ha venido incrementando el monto de su pensión, no existiendo documento alguno que acredite de manera cierta e indubitable que su pensión haya sido rebajada o que se le haya aplicado tope alguno; por lo tanto, careciéndose de pruebas suficientes, no es posible decidir a favor del demandante

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando, en parte, la apelada, declaró infundadas las excepciones propuestas y, revocándola, declaró **IMPROCEDENTE** la demanda, dejando a salvo el derecho del demandante para hacer valer su pretensión con arreglo a ley. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

GARCÍA TOMA

(Reproducción libre de la sentencia del Tribunal constitucional Exp. N°2655-2002-AA/TC).

SENTENCIA 5

EXP. N.º 4018-2004-AA/TC. LIMA

NARVIN AUGUSTO

CANALES RIMARCHI

En Ica, a los 18 días del mes de febrero de 2005, el Tribunal Constitucional, en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Alba Orlandini,

Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Gonzáles Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Narvin Augusto Canales Rimarchi contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 44 del cuadernillo formado ante esa instancia, su fecha 11 de agosto de 2004, que confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de agosto de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Juez del Segundo Juzgado de Familia de Piura y el Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Piura, por considerar que con la expedición de la resolución judicial mediante la cual se ordena que pague una pensión de alimentos de S/. 1400.00 nuevos soles, se ha violado su derecho al debido proceso y a la defensa; por lo que solicita que se declare sin efecto la referida resolución.

En concreto, sostiene que es arbitrario que se haya fijado una pensión de alimentos ascendentes a 1400.00 nuevos soles, cuando en su condición de empleado de la Empresa Somos Mac Color SRL sólo percibe la suma de S/. 800.00 nuevos soles. Con ello, no sólo se pone en riesgo su vida y salud, sino incluso la de su menor hijo, quien desde el mes de marzo de 2003 se encuentra bajo su cuidado, tras haber sido "encontrado en estado de abandono económico y moral", además de enfermo. Asimismo, considera que se ha violado su derecho al debido proceso, por cuanto no se admitieron las tachas propuestas por él, tras considerarse que se habían formulado extemporáneamente. No obstante ello, lejos de prestarle igual tratamiento a la demandante del proceso de alimentos, cuando ésta la formuló sí se la admitieron.

El Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Piura contesta la demanda indicando que admitió no se admitió la tacha del recurrente, porque ésta no la formuló

al contestar la demanda. Y admitió posteriormente la tacha de la demandante en el proceso de alimentos, por que ésta se formuló en la audiencia única, que es el único estadio procesal donde ella pudo hacerlo.

A su vez, la Juez del Segundo Juzgado de Familia de Piura contesta la demanda, solicitando que ésta se declare infundada, tras considerar que la resolución judicial que se impugna ha sido expedida dentro de un proceso regular. Asimismo, refiere que al momento de contestar la demanda, el recurrente no sostuvo que su hijo estuviera viviendo con él; de modo que al alegarlo en segunda instancia, no podía valorar tal situación, habida cuenta que el artículo 374 del Código Procesal Civil sólo autoriza que en los procesos de conocimiento y abreviado se presenten, con la apelación, nuevos medios de prueba; lo que no era el caso, puesto que el proceso de alimentos se tramita como proceso sumarísimo.

Con fecha 3 de noviembre de 2003, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura declara improcedente la demanda, tras considerar que el amparo no es la vía para conseguir una reducción o exoneración de la pensión alimenticia. La recurrida confirmó la apelada, tras compartir los criterios de ésta.

FUNDAMENTOS

1. Aunque no se precisa el acto reclamado en la demanda, el objeto de ésta es que se declare nula y sin efecto la sentencia expedida por el Juez del Segundo Juzgado de Familia, de fecha 7 de julio de 2003, mediante la cual se ordenó que el demandante acuda con una pensión alimenticia a favor de su cónyuge doña Mabel Teresa Rojas Ponce y su menor hijo Marvin Santier Canales Rojas, la suma de S/. 1400.00 nuevos soles, por considerarse que ésta viola su derecho al debido proceso y de defensa.
2. Este Tribunal tiene afirmado, que en el amparo contra resoluciones judiciales la competencia del Juez Constitucional no se extiende *prima facie* a la evaluación de los criterios que hayan podido tener los jueces ordinarios al momento de resolver una causa determinada; salvo que esto sea constitucionalmente legítima, adecuada, necesaria y proporcional para la resolución de la tutela o no del derecho

constitucionalmente protegidos. El amparo, hemos afirmado, no es un medio por virtud del cual se convierta a la justicia constitucional de la libertad en una suerte de última instancia judicial, donde se pueda revisar los términos conforme a los cuales se resolvió una controversia surgida en un proceso ordinario. Tampoco una vía donde pueda reproducirse la misma controversia ventilada en el ámbito de la judicatura ordinaria.

En ese sentido, si el recurrente considera que la pensión decretada por los jueces emplazados es excesiva, porque, entre otras cosas, ahora es él quien tiene bajo su cuidado a su menor hijo, en vez de procurar la reducción de esa pensión de alimentos en el seno del proceso constitucional de amparo, éste tiene el derecho de solicitar la misma pretensión en la vía correspondiente, como las dos instancias judiciales previas lo han advertido.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

HA RESUELTO

Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

VERGARA GOTELLI

LANDA ARROYO

SENTENCIA 6

EXP. N.º 0465-2003-AA/TC.LIMA

Gracia María FRANCISCA

ALJOVÍN DE LOZADA

En Lima, a los 8 días del mes de marzo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gracia María Francisca Aljovín de Losada, contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 17 del cuaderno de apelación, de fecha 5 de marzo de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de febrero de 2000, la recurrente interpone acción de amparo contra la Jueza del Segundo Juzgado Especializado de Familia de Lima, señora. Rosa Margarita Aguirre Aguilar, a fin de que se declare nula la Resolución N.º 6, del Expediente N.º 4076-99, sobre Exoneración o Reducción de Alimentos, expedida por el Segundo Juzgado Especializado de Familia de Lima, alegando que fue emitida en un proceso irregular, en el cual se han vulnerado los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la debida motivación de las resoluciones judiciales y a la autoridad de cosa juzgada. Sostiene que fue demandada por su esposo José Muñante en un proceso sobre exoneración o, subordinadamente, reducción de alimentos, cuando aún el proceso de alimentos que entabló a aquél se hallaba en ejecución de sentencia y el demandante no había cumplido siquiera con pagar el 5% (cinco por ciento) del monto devengado por pensiones atrasadas, intereses legales y gastos de dicho proceso; asimismo que, al no encontrarse al día con el mandato ordenado por el poder judicial, no debió admitirse su demanda sobre exoneración de alimentos. Por otro lado, señala que la presente demanda no había cumplido con los supuestos legales requeridos para ese tipo de

proceso, como son: i) grave disminución del patrimonio del demandante, que le pudiese impedir cumplir con la obligación, poniendo en riesgo su propia subsistencia; y ii) variación del estado de necesidad del demandado. Señala que el estado de necesidad del demandante no fue acreditado con pruebas ni documento alguno, y que, por el contrario, su patrimonio se ha incrementado al haber fallecido su padre un mes después de haberse admitido la demanda. Asimismo, alega la afectación de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, ya que: a) no se merituaron pruebas importantes en el proceso de reducción de alimentos; b) hubo indebida y contradictoria motivación de las sentencias, afectándose con ello el principio de congruencia; c) hubo negligencia en la tramitación del proceso en la segunda instancia e irregularidades procesales dentro del proceso que evidenciaron parcialización de los jueces; y d) hubo vulneración al principio constitucional de cosa juzgada.

La emplazada contesta la demanda señalando que es cierto que ante su judicatura se tramitó el mencionado proceso, pero que no procede interponer acción de amparo contra resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular, y que del tenor del recurso postulatorio de la demanda, se aprecia que lo que pretende la accionante es el cuestionamiento de lo resuelto por el órgano jurisdiccional, y no cese de la afectación de sus garantías personales. Sostiene que, en cuanto a los medios probatorios ofrecidos en la apelación de la sentencia, tal como lo establece el artículo 374° del Código Procesal Civil, “sólo en los procesos de conocimiento y abreviados las partes pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de la apelación o en el de absolución de agravios”, y que si se hubiesen admitido y hecho referencia en la sentencia de vista, se habría desnaturalizado el Proceso Único (alimentos, reducción, exoneración de la pensión alimenticia). Asimismo, que la alegada contradicción entre la sentencia de vista y la apelada es una apreciación errónea, pues la suscrita aplicó su criterio de conciencia. Respecto a la apelación que supuestamente se omitió resolver y que se refiere a la admisión misma de la demanda, afirma que, efectivamente, no resolvió dicha apelación porque ésta se concedió sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, y que, debiendo la parte apelante (es decir la accionante), expedir las copias a fin de formar el respectivo

cuaderno y elevarlo al superior jerárquico, conforme se desprende de la misma resolución, no lo hizo ni lo elevó al respectivo despacho, siendo, por dicha dilación, multado el abogado de la actora.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 26 de marzo de 2001, declaró improcedente la demanda, por considerar que la accionante persigue cuestionar la resolución judicial que le fue desfavorable, pretendiendo su revisión en sede constitucional.

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que la demandante no acreditó que se haya proveído a la Jueza de Familia cuando, antes de la sentencia de la vista, presentó recurso ofreciendo nuevas pruebas; y que no se aprecia la grave contradicción denunciada por la demandante, ya que las dos apelaciones fueron concedidas sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferidas, correspondiendo en todo caso al Juez de Paz Letrado formar dichos cuadernos a instancia de la parte actora. Que, con respecto a la apelación concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida, que no fue resuelta por la Jueza demandada, la actora no ha acreditado haberla efectuada después de la sentencia de vista; y, con respecto a la vulneración de cosa juzgada, no hay tal, si se tiene en cuenta la naturaleza de los procesos de alimentos, de aumento y/o reducción, que pueden interponerse cuando varíen las necesidades de la alimentista y/o las posibilidades del demandado.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la presente demanda es que se declare nula la sentencia de vista Resolución N.º 6, corriente en el Expediente N.º 4076-99, sobre Exoneración o Reducción de Alimentos, expedida por el Segundo Juzgado Especializado de Familia de Lima, por considerarse que fue emitida en un proceso irregular, con violación de los derechos constitucionales al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la motivación de las resoluciones judiciales y cosa juzgada.

2 Sin ingresar a evaluar el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional considera que la pretensión debe desestimarse, ya que:

2.1. Conforme se establece en el artículo 2° de la Ley N.° 23506, las acciones de garantía proceden en los casos en que se violen o amenacen los derechos constitucionales por acción, o por omisión, de actos de cumplimiento obligatorio.

2.2. Tal como lo establece el artículo 10° de la Ley N.° 25398, las anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso regular al que se refiere el inciso 2) del artículo 2° de la Ley precitada, deberán ventilarse y resolverse dentro de los mismos procesos mediante el ejercicio de los recursos que las normas procesales específicas establecen.

2.3. En el caso, pese a que se ha alegado la violación de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, lo que la recurrente pretende cuestionar es la resolución judicial que le fue desfavorable en el proceso sobre exoneración de alimentos, a pesar de que contó con los mecanismos procesales, e hizo ejercicio de ellos, con la finalidad de hacer valer su derecho. En tal sentido, y en concordancia con el artículo 6° de la Ley N.° 23506, no proceden las acciones de garantía contra las resoluciones judiciales o arbitrales emanadas de un proceso regular.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

Declarar **IMPROCEDENTE** la acción de amparo.

Publíquese y notifíquese. SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY , REVOREDO MARSANO

SENTENCIA 7

EXP. N.º 1317-2002-AA/TC. ANCASH

VENANCIO DE PAZ QUITO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Venancio de Paz Quito contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 73, su fecha 7 de febrero de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 18 de mayo de 2001, interpone acción de amparo contra el Director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Huaraz. Manifiesta que al estar cercando el inmueble de su propiedad con un muro de adobe, de conformidad con la Licencia de Construcción N.º 00990 con la que cuenta, fue notificado para que paralice, demuela y desocupe el inmueble que recién había adquirido. Expresa que, ante ello, se acercó a la Dirección General de Desarrollo Urbano, donde le informaron que había sido estafado por el vendedor del inmueble y que, en cuanto la Licencia de Construcción que exhibía, en la municipalidad no obraba documento alguno al respecto. Alega que al regresar a su propiedad, verificó que el mismo día en que fue notificado, la Policía Municipal demolió el muro que había levantado, lo que, considera, constituye una violación de su derecho constitucional a la propiedad.

El Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, con fecha 29 de octubre de 2001, declaró improcedente la demanda, por estimar que el recurrente no agotó la vía administrativa, porque no ha demostrado la demolición del muro y por encontrar incoherencia entre el petitorio y los fundamentos de hecho alegados por el actor.

La recurrida confirmó la apelada, por estimar que los hechos invocados requieren ser probados en un proceso con etapa probatoria, más aún si no se agotó la vía administrativa.

FUNDAMENTOS

1. De autos fluye que el demandante cuestiona lo siguiente:
 - a. La demolición de un muro de adobe, y,
 - b. La orden de paralizar y demoler la obra, así como desalojar el inmueble de su propiedad por ocupar áreas de terceros.
2. Respecto a los cuestionamientos antes mencionados este Colegiado debe precisar:
 - c. Que el recurrente no ha acreditado con medios probatorios suficientes la demolición de la que habría sido objeto. En efecto, salvo la notificación que corre a fojas 2, en autos no obra documento alguno emitido por la emplazada, situación que, además, y al no haber sido contestada la demanda, no puede ser dilucidada por el Tribunal Constitucional.
 - d. Que, a tenor de lo expuesto por el propio demandante a fojas 10 de autos, la emplazada le comunicó que había sido estafado por el transfiriente del inmueble que ocupaba y que carecía, de una Licencia de Construcción conforme a derecho
3. Como es de verse, de autos se advierten situaciones controvertibles que no están debidamente esclarecidas. Consecuentemente, al no haberse acreditado suficientemente la pretensión, la demanda debe ser desestimada, aunque se deja a salvo el derecho del demandante para hacerlo valer, en todo caso, en la forma legal que corresponda.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica.

FALLA

REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, reformándola, la declara **INFUNDADA**. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

SENTENCIA 8

EXP. N.º 0700-2004-AA/TC
LAMBAYEQUE
BALTAZAR DE LOS REYES
SILVA SERNAQUE
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Baltazar de los Reyes Silva Sernaque contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 73, su fecha 12 de diciembre de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 18 de octubre de 2002, interpone acción de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a fin de que se declare la inaplicabilidad del Decreto Ley N.º 25967 y de la Resolución N.º 6248-98-ONP/DC, en mérito de la

cual se le otorgó pensión de jubilación adelantada y, en consecuencia, se emita una nueva resolución con arreglo al Decreto Ley N.º 19990, así como se ordene el pago de reintegros de sus pensiones devengadas y los intereses generados. Manifiesta que la pensión otorgada debió calcularse conforme al Decreto Ley N.º 19990, pues adquirió su derecho pensionario con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967. Alega que, no obstante ello, se calculó su pensión sobre la base del Decreto Ley N.º 25967, el que le ha sido aplicado retroactivamente.

La ONP contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, y alega que al 19 de diciembre de 1992, fecha en que entró en vigencia el Decreto Ley N.º 25967, el actor no reunía los requisitos para acceder a ningún tipo de pensión de jubilación bajo los alcances del Decreto Ley N.º 19990.

El Primer Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 15 de julio de 2003, declaró infundada la demanda, por estimar que a la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, el actor no cumplía el requisito de la edad previsto por el artículo 44º del Decreto Ley N.º 19990 para acceder a una pensión de jubilación adelantada.

La recurrida revocó la apelada, y declaró improcedente la demanda, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

1. El demandante pretende que el cálculo de su pensión de jubilación adelantada se efectúe sin aplicarle el Decreto Ley N.º 25967, alegando que le ha sido aplicado retroactivamente.
2. Del Documento Nacional de Identidad de fojas 1, así como de la cuestionada resolución, se aprecia que a la entrada en vigencia del Decreto Ley N.º 25967, esto es, al 19 de diciembre de 1992, el actor sólo contaba con 51 años de edad y 39 años de aportaciones y, por ende, aún no había satisfecho el requisito de edad para acceder a una pensión de jubilación adelantada conforme al Decreto Ley N.º 19990.

3. Consecuentemente, y al no haberse acreditado que el Decreto Ley N.º 25967 se haya aplicado retroactivamente para calcular la pensión del recurrente, la demanda pierde sustento.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

Declarar **INFUNDADA** la acción de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

SENTENCIA 9

EXP. N.º 1624-2002-AA/TC

LIMA

SALVADOR FERNÁNDEZ SERVAT

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de junio de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Salvador Fernández Servat contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 128, su fecha 11 de marzo de 2002, que declara infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 03 de noviembre de 2000, interpone acción de amparo contra don Ángel Mariano Fernández Villanueva, solicitando que se le deje proteger, asistir y defender los derechos de su representada, doña María Rosa Fernández Caja, quien se encuentra imposibilitada de valerse por sí misma, agregando que es representante legal y sobrino de la referida señora y que el demandado pretende impedir que cumpla con su deber de proteger su salud, su integridad física y sus derechos, al haber interpuesto una denuncia penal en su contra por el delito contra la libertad personal en agravio de doña María Rosa Fernández Caja y vulnerando de tal forma su derecho a la protección familiar. Asimismo, añade que el demandado intenta impedir que el inmueble que recibió la citada señora como herencia, y en el cual habita, sea destinado a un hogar de ancianos.

El emplazado contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, argumentando que con la denuncia iniciada contra el demandante no se afecta derecho constitucional alguno, toda vez que el proceso penal es regular y totalmente válido, añadiendo que en la Resolución N. ° 054 de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Lima se concluye que existen indicios razonables de la comisión de un delito contra la libertad personal.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, con fecha 07 de diciembre de 2000, declara fundada la demanda, aduciendo que se ha acreditado que el recurrente es sobrino de María Rosa Fernández Caja, quien requiere atención médica; que el demandante ha acreditado haberle brindado los cuidados necesarios, y que, en ese sentido, la protección y defensa de sus derechos recaen en su persona, y lo contrario supone vulneración de sus derechos.

La recurrida revoca la apelada declarándola infundada, aduciendo que las acciones de garantía no son declarativas de derechos y que están reservadas a los casos en que se violen o amenacen derechos con rango constitucional, siendo necesario para su procedencia que el accionante acredite la existencia de un derecho constitucional que haya sido objeto de lesión o puesto en peligro por terceros.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que cese la amenaza al ejercicio del derecho constitucional del demandante de proteger a un familiar discapacitado, toda vez que mediante una denuncia por el delito de secuestro y otros actos, el demandado pretende impedir que defienda los intereses de su familiar.
2. En autos (fojas 5 y siguientes) obra el poder por medio del cual doña María Rosa Fernández Caja autoriza al demandante a realizar diversos actos jurídicos en su nombre.
3. De la sentencia emitida por el Decimotercer Juzgado Civil de Lima, corriente a fojas 17, se colige que el demandado simuló la venta de los derechos y acciones de doña María Rosa Fernández Caja sobre el bien inmueble en el que habita, mediante un documento viciado por la falta de manifestación de voluntad de ella.
4. Asimismo, a fojas 14 del cuadernillo del Tribunal Constitucional, corre la Resolución N.º 14, de fecha 23 de agosto de 2002, derivada del proceso penal en el que se investigó al accionante como presunto autor del delito de secuestro en perjuicio de doña María Rosa Fernández Caja, de la que se advierte que la Segunda Sala Penal Superior de Procesos Ordinarios determinó que no había mérito para pasar a juicio oral por cuanto la supuesta agraviada admitió que no se encontraba privada de su libertad y que, por el contrario, el demandante le brindaba la protección y apoyo que requería debido a su estado. Asimismo, la Sala Penal resolvió que la conducta mal intencionada del denunciante (demandado en el presente proceso) evidenciaba la comisión de un delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de denuncia calumniosa, considerando necesario iniciar una investigación en su contra.
5. Existe el deber de amparar a las personas incapaces de valerse por sí mismas especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I de la Constitución otorga a todos los ciudadanos; por consiguiente, el respeto y la dignidad de la

persona discapacitada, así como su autonomía e igualdad de oportunidades deben quedar garantizados, en el presente caso, permitiendo que el demandante cuide y proteja a la persona discapacitada, y el libre ejercicio de las facultades de representación otorgadas, por cuanto toda persona con discapacidad física debe gozar hasta el máximo grado de viabilidad de los mismos derechos de los que las demás personas gozan.

6. Por consiguiente, habiéndose acreditado la amenaza del derecho a la protección del discapacitado consagrado en el artículo 7° de la Constitución, la presente demanda deberá ser estimada.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.
2. Ordena que don Ángel Mariano Fernández Villanueva se abstenga de impedir que el recurrente ejerza el derecho de protección de su representada, doña María Rosa Fernández Caja.

Publíquese y notifíquese.

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

SENTENCIA 10

EXP. N.º 1804-2003-AA/TC

AYACUCHO

JUANA TEODORA VEGA VERGARAY

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 2 días del mes de junio de 2004, el Tribunal Constitucional, reunido en sesión de pleno jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Aguirre Roca, Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Juana Teodora Vega Vergaray contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de fojas 345, su fecha 25 de junio de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 30 de diciembre de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra el Gerente Departamental Ayacucho de EsSalud, don Julio Aguilar Límaco, para que se declare inaplicable la Carta de Despido N.º 975-GDAY-ESSALUD-2002, de fecha 20 de diciembre de 2002, y, por consiguiente, se la restituya en su puesto de enfermera. Refiere que en abril de 2002 fue contratada a plazo indeterminado para desempeñar el cargo de enfermera del Hospital II de EsSalud, por haber ganado el concurso público correspondiente; que en dicha carta se le imputó la comisión del delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, durante el desarrollo del mencionado concurso público de méritos; que, sin embargo, esta imputación se sustenta en apreciaciones subjetivas; y que no se le cursó la carta de preaviso para que hiciera sus descargos.

El emplazado contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando que en la carta de despido no se ha invocado causa alguna relacionada con la conducta o la capacidad de la recurrente, razón por la cual no era necesario cursarle la carta de preaviso; y que el despido de la demandante ha sido incausado, al amparo de lo dispuesto por el artículo 34.º del Decreto Legislativo N.º 728.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huamanga, con fecha 12 de febrero de 2003, declaró improcedente la demanda, por considerar que la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar la controversia, por carecer de etapa probatoria.

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS

4. Se aprecia de la Carta de Despido N.º 975-GDAY-ESSALUD-2002 (a fojas 9) que, invocándose el artículo 31.º del Decreto Legislativo N.º 128, aprobado por el Decreto Supremo N.º 003-97-TR, se despidió a la demandante por la comisión de faltas graves y el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, en el concurso público de méritos en el que participó; sin embargo, el emplazado no ha seguido el procedimiento preestablecido en la ley, puesto que no cumplió con cursarle la carta de preaviso concediéndole no menos de seis días para que efectuara sus descargos, como lo manda el mencionado dispositivo legal; por lo tanto, se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al debido proceso y de defensa.
5. El emplazado pretende justificar esta omisión señalando que no estaba obligado a cursar la carta de preaviso, debido a que el despido de la recurrente no fue por falta grave sino sin expresión de causa; no obstante, como se tiene dicho, el tenor de la carta de despido desmiente esta afirmación.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA** la acción de amparo.
2. Ordena la inmediata reincorporación de la demandante en su puesto de trabajo, o en otro de igual o similar nivel.

Publíquese y notifíquese. .

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTIRIGOYEN

AGUIRRE ROCA

REVOREDO MARSANO, GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA